Tulio Halperín Donghi

Argentina en el callejón

Ariel

TULIO HALPERÍN DONGHI nació en Buenos Aires en 1926. Realizó estudios en la Universidad de esa ciudad y siguió cursos en la de Turín y en l' École Practiques des Hautes Études de París. Durante su estadía en Francia y España preparó su tesis: *Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia*.
Fue profesor en la Universidad del Litoral, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (Montevideo) y en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. De su tarea de investigación han surgido numerosos estudios y ensayos, entre los que se destacan: *El pensamiento de Echeverría*, *Historia de la historiografía argentina*, *Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo*, *Historia de la Universidad de Buenos Aires*, *La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-1852)*, *Argentina en el callejón*, *Revolución y guerra*, *Historia contemporánea de América Latina*, *Una nación para el desierto argentino y el espejo de la historia*.
Dirigió para esta editorial la Biblioteca del Pensamiento Argentino, tomando bajo su responsabilidad el estudio preliminar de tres de los siete títulos que integran esta colección: *Proyecto y construcción de una nación*, *Vida y muerte de la República verdadera*, *La república Imposible.*

Desde 1972 trabaja en el Departamento de Historia de la Universidad de Berkeley.

Cubierta: Concetto spaziale attese, *Lucio Fontana,* hidropintura sobre tela con cortes (1965).


ARGENTINA EN EL CALLEJÓN

Tulio Halperín Donghi

Argentina en el callejón

Ariel

Halperín Donghi, Tulio
Argentina en el callejón.- 1ª ed. – Buenos Aires : Ariel, 2006.
224 p. ; 23x15 cm.

ISBN 950-9122-97-1

1. Historia Política Argentina I. Título
CDD 320.982

Diseño de cubierta: Mario Blanco

Independencia 1668, C 1100 ABQ, Buenos Aires, Argentina
www.editorialplaneta.com.ar

2ª edición: 2.000 ejemplares
(1ª edición en este formato)

ISBN-13 978-950-9122-97-0
ISBN-10 950-9122-97-1

Impreso en Artes Gráficas Urano SRL,
Castro 928, Capital Federal
en el mes de abril de 2006.

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en la Argentina

Advertencia

Los escritos aquír eunidos, y producidos entre 1955 y 1964, reflejan un esfuerzo por entender la enigmática etapa argentina que se estaba viviendo, sostenido por la esperanza de que, al desentrañar sus claves, fuese posible también descubrir el rumbo hacia el cual habría finalmente de encaminarse.

La lectura retrospectiva nos dice que, como era previsible, esa doble ambición se ha cumplido sólo parcialmente, pero (si no me engaño) sugiere también que en la combinación de extrañas cegueras y miradas ocasionalmente perspicaces que viene a descubrirse hoy en estos textos no son las primeras las menos interesantes.

Porque lo que esas cegueras delatan es que el esfuerzo por comprender un cierto entorno argentino era inseparable del dirigido a llevar adelante una carrera intelectual y profesional en un contexto que se anunciaba poco promisorio; la esperanza de encontrar razones para creer que ese proyecto no estaba condenado de antemano influía más de lo que entonces era posible advertir sobre el rumbo que tomaban esas exploraciones.

Cuando se las examina desde esa perspectiva, no es difícil descubrir en ellas el testimonio de una experiencia que no se co-

rresponde exactamente con las que subtienden las del perplejo grupo de intelectuales evocados en los libros recientes de Oscar Terán y Silvia Sigal, a quienes tocó en suerte atravesarlos en etapas más tempranas de su propia trayectoria.

Si tanto para Oscar como para Silvia el contexto histórico y la constelación de ideas que ambos reconstruyen tan eficazmente son los que encontraron ya constituidos al asomarse al mundo, no era ése mi caso: pese a algunas experiencias previas, trascurridas bajo el signo poco hospitalario de la restauración ideológica intentada por la revolución del 4 de junio de 1943, fue la fecha del 17 de octubre de 1945 —que me sorprendió por cierto muy pasados los quince años— la que marcó también para mí, como en la canción de María Elena Walsh, el ingreso ya irrevocable en la intemperie de la historia.

Quien comenzaba a hilar las reflexiones aquí recogidas era entonces parte de un grupo generacional, tenido todavía por joven en 1955, ya que por diez años el peronismo había mantenido su futuro en suspenso, y tan impaciente como podía esperarse por recuperar el tiempo que le había sido robado.

¿Advertíamos ya que ese tiempo no había sido con todo perdido y que, luego de su caída, el peronismo nos iba a compensar con creces por las oportunidades que por una década nos había arrebatado? En todo caso, nos prohibíamos advertirlo, mientras procedíamos como si lo percibiésemos perfectamente. Frente a esa dimensión estrechamente profesional de la experiencia de varias generaciones de intelectuales argentinos sigue reinando un extraño pudor; recuerdo vivamente mi silenciosa indignación ante un integrante de la generación de Silvia, a quien volví a encontrar ya transformado en celebrado pensador posmarxista, en gira de conferencias desde su base londinense, y que tras echar una mirada circular a la sobria elegancia del comedor del Faculty Club de Berkeley observó "es curioso lo bien que nos ha ido a todos", en comentario que me pareció menos inexacto que vagamente sacrílego.

Es ésta una ceguera análoga a la que se despliega en las memorias de quien fue figura ejemplar para esas mismas generaciones. Mientras el lector de Simone de Beauvoir en La force de l'age *encuentra difícil no advertir que, para ella como para Jean-Paul Sartre, tanto la llegada como la involuntaria partida del ocupante alemán no podían haber ocurrido en momento más oportuno, la autora esquiva con obstinación análoga a la nuestra alcanzar esa conclusión sin embargo obvia.*

Había con todo una diferencia que íbamos a descubrir sólo gradualmente: mientras en 1944 el ocupante había abandonado para siempre la escena, 1955 sólo iba a marcar una primera inflexión en el nexo infinitamente problemático que nos seguiría ligando con un actor colectivo que no había perdido junto con el poder su papel central en un drama que iba a ocupar el resto de nuestras vidas.

No es extraño que ese alarmante descubrimiento sólo se consumara luego de que hechos tan repetidos como contundentes hicieran imposible seguir eludiéndolo. Se buscaría en vano un anticipo de él en el primer escrito aquí incluido, "La historiografía argentina en la hora de la libertad", publicado en el número de Sur *consagrado a la reconstrucción nacional al triunfar la revolución de 1955, y casi siempre evocado desde entonces con intención poco afectuosa hacia quienes habían contribuido a él. Más de una vez me pregunté qué misericordioso azar hacía que esos comentarios poco amables ignorasen sistemáticamente mi aporte; releyéndolo advierto que el azar tuvo muy poco que ver con ello: se entiende que aun lectores dispuestos de antemano a la cólera hayan reaccionado con más perplejidad que indignación ante un texto que invitaba a hacer de la caída del régimen peronista la ocasión para un definitivo ajuste de cuentas con la Nueva Escuela Histórica, en las figuras representativas de Ricardo Levene y Emilio Ravignani.*

En esas breves páginas, en efecto, la década peronista es vista como un irrelevante paréntesis cuyo afortunado fin hace po-

sible encarar una actualización historiográfica que precisamente porque llega con varias décadas de retraso no está en absoluto dispuesta a contemporizar con los obstáculos que espera hallar amontonados en su camino. Revelador en cuanto anticipa las internas tensiones que iban a tornar más vibrante pero también más frágil la nueva experiencia universitaria cuyo umbral no se había aún cruzado, ese texto sólo lo es del modo esencialmente negativo que ya se ha señalado en cuanto al tema que aquí nos interesa: muestra convincentemente que su autor aún no ha descubierto que hay allí en efecto un tema.

No lo advierte mucho mejor en la contribución al número tanto menos triunfalista con que Contorno *se hizo presente en la misma ocasión. Sin duda "Del fascismo al peronismo" encuentra su asunto en lo que en el escrito anterior había sido relegado a un brumoso trasfondo, pero no vacila en abordarlo en el modo de la historia: no se pregunta en efecto qué es, sino qué fue, el peronismo. La convicción de que el peronismo era ya cosa del pasado explica quizá también el tono desapasionado de un análisis que en más de un aspecto sigo encontrando válido. Pero, si rastreaba —creo— bastante bien la trayectoria que llevó a Perón a capitanear un movimiento de perfil social mucho más acusado de lo que había estado en sus intenciones originarias, la caracterización del peronismo como movimiento social era del todo insuficiente: tal como iba a señalarlo muy justificadamente la llorada Celia Durruty, yo hablaba allí —como tantos entonces— de lo que no conocía.*

Esa ignorancia habría de corregirse apenas comenzáramos a conocer peronistas que mantenían intacta la fe pese al fin del régimen. Pero aun después de descubrir un peronismo más capaz de sobrevivir a la adversidad que el que por diez años había ocupado el proscenio de la vida nacional, no íbamos a mostrar demasiada prisa por alcanzar las conclusiones que se imponían a partir de ese descubrimiento. Ellas están del todo ausentes del siguiente escrito, publicado en el número de Contorno *dedicado*

al giro que el presidente Frondizi imprimió a su gobierno, y que por sugestión de Ismael Viñas iba a titularse "El espejo de la historia" (aquí incluido como "El frondizismo en el espejo de la historia"). El espejo es el ofrecido por la trayectoria recorrida más de un siglo antes por los corifeos de la generación de 1837; de nuevo, si hay mucho en las conclusiones a las que arriba ese ejercicio de comparación que sigue pareciéndome válido, la decisión de abordar desde ese ángulo preciso los dilemas que planteaba ese momento decisivo parece hoy aún más problemática de lo que sin duda apareció ya a más de un lector de 1958.

Y no tanto por la morosidad con que se detiene en el examen del pasado, que sugiere que el interés que llevaba al examinarlo era más independiente de las incitaciones del presente de lo que el marco y el título del trabajo autorizaban a concluir, sino porque en el pasado tanto como en el presente lo que busca rastrearse es el abandono demasiado rápido de una vocación —o quizá sólo de una veleidad— revolucionaria, definida menos por sus objetivos que por una radicalidad que lo coloca de todos modos en la línea de esa Revolución que pronto se usaría escribir con mayúscula.

Y puede parecer curioso que un escrito que obviamente descree de la seriedad de esa vocación revolucionaria —tanto en los protagonistas políticos de ambas etapas sometidas a comparación como en el país que en ambas iba a asistir sin indignación y se diría casi que sin sorpresa a su apostasía— dedicase tanto espacio a escrutarla. La explicación puede encontrarse en parte en el marco mismo de ese escrito: esa vocación revolucionaria que faltaba al doctor Frondizi y quizá también al país al que aspiraba a gobernar, campeaba en cambio plenamente en ese número de Contorno, *animado sin duda por una voluntad de comprensión pero más aún de denuncia.*

El enfoque con que ese escrito abordaba el giro del frondizismo reflejaba sin duda una amistosa y lamentada, pero irremediable, distancia de la fe inspiradora de los escritos a los que

acompañaba el mío, pero ésta no nacía de que reconociese en la alternativa revolucionaria tan sólo un objeto imaginario de deseos acaso igualmente imaginarios, como la mirada retrospectiva tiende a hacerlo quizá con demasiada frecuencia.

Pero, si la alternativa revolucionaria podía ser algo más que ese objeto imaginario al que hoy tendemos a reducirla, estaba lejos de ser la más relevante al contexto argentino de 1958. La atención que mi escrito le concedía pudo ser en parte reflejo del lugar que ella ocupaba en la visión de quienes me habían invitado a colaborar en Contorno, *pero creo que respondía también, aunque de modo oblicuo, a ese contexto mismo.*

Considerar como única alternativa al experimento frondizista la ofrecida por una revolución que se reconocía imposible llevaba a una aceptación resignada de lo mismo que por otra parte se condenaba. Esta se justificaba en nombre de la necesidad de no abrir el camino a la involución reaccionaria que iba en efecto a seguir a la caída del presidente Frondizi, pero —y no sólo para mí— tenía también otra justificación menos confesada y quizá menos advertida: del éxito de la aborrecida nueva política presidencial dependía el de la actualización científica y cultural en que estábamos poniendo tanto de nosotros; y ello no sólo porque era ya claro que su fracaso desencadenaría una tormenta política que habría de arrasar las frágiles estructuras que nos daban albergue. El nuevo presidente lo había apostado todo al logro de una trasformación socioeconómica lo bastante honda para privar de sentido a las enconadas oposiciones políticas y sociales legadas por el peronismo; del éxito de esa apuesta dependía también que una sociedad cada vez más encerrada en ese oscuro laberinto no terminase por rechazar como irrelevante el proyecto renovador lanzado en 1955.

La misma actitud ambigua subtiende la "Crónica del período" escrita para el número con que Sur *celebró sus tres décadas de publicación (aquí incluido bajo el título "Crónica de treinta años). Este esbozo de historia de la Argentina más reciente re-*

mata en el mismo punto de llegada que el escrito precedente: el presente desde el cual contempla ese pasado tiene todavía en su base el mismo audaz giro político, y sus posibilidades de futuro son de nuevo estimadas con una ecuanimidad que sugiere que el autor abriga hacia él sentimientos más ambiguos que los reflejados en el retrato muy poco halagador que traza del entonces presidente.

El último de los textos aquí reunidos fue escrito por sugerencia de Angel Rama, quien me propuso completar hasta el presente de 1963 la crónica incluida en Sur, *que así ampliada fue publicada al año siguiente por Arca, la editorial montevideana que él entonces dirigía, bajo el título* Argentina en el callejón, *aquí retenido para esta última sección.*

En ella, y sólo en ella, campean plenamente los oscuros presagios sugeridos por ese título, que el presente volumen retoma, por otra parte, del publicado hace tres décadas.

Esa lucidez que se negaba a avanzar hasta las últimas consecuencias, rehusándose a la desesperación pese a haber renunciado a la esperanza, no era por cierto ni precoz ni original. Se advertía ya cada vez mejor que la Argentina estaba viviendo el afiebrado final de una suerte de era de Weimar; la conciencia de que así estaban las cosas exacerbaba todas las tensiones, a la vez que las escondía bajo las luces efímeras de un frenético fin de fiesta; los mismos semanarios que conquistaron un público celebrando el triunfo de la frivolidad militante anunciaban a la vez como una buena nueva la reacción salvadora que habría de ponerle fin.

El breve volumen de Arca refleja más fielmente el temple de esa hora crepuscular de lo que haría suponer el contraste que ofrece con el tono cada vez más impacientemente militante de la mayor parte de los escritos que ella inspiraba: mientras éstos invadían el pasado con los dilemas del presente, esta crónica de un tercio de siglo buscaba a su modo contribuir al ingreso —en la Argentina siempre tan demorado— de ese pasado reciente en la

historia. Era un propósito logrado sólo a medias (en particular en el tratamiento de la década del treinta se advierte cómo los descubrimientos de una mirada histórica luchan con éxito variado por desplazar las imágenes de una memoria colectiva alimentada por rencores políticos por otra parte demasiado justificados).

El esfuerzo por alcanzar una visión histórica del pasado más reciente reflejaba menos una preocupación de objetividad que una conciencia muy viva de lo que ese pasado tenía ya de irrevocable y —si así puede decirse— de irremediable. En el texto final esa conciencia se extiende del pasado al futuro: el trecho de historia abierto en 1930 se revela aquí, por fin, como el inexorable avance hacia un desenlace necesariamente catastrófico de esa larvada guerra civil en que se había ya consumido un tercio de siglo de historia argentina.

TULIO HALPERIN DONGHI
Buenos Aires, octubre de 1994

La historiografía argentina en la hora de la libertad

He aquí un título algo problemático: no es de ningún modo evidente que entre la liberación y la actividad de nuestros historiadores haya de existir un nexo necesario. Uno, sin embargo, parece indiscutible: se ha cerrado la tentativa de crear una cultura y una historiografía consagradas a la mayor gloria del régimen. ¿Pero es ésa una diferencia importante? Todos los vastos designios que la dictadura intentó tenazmente realizar en el campo cultural se vieron trabados por un hecho esencial: entre la dictadura y la vida cultural argentina no existían los puntos de tangencia a través de los cuales aquélla hubiera podido influir directamente sobre ésta. No hubo entonces, una historiografía peronista; el régimen debía actuar, también en este campo, mediante truchimanes, que no se avenían sin segundas intenciones a ejercer ese poco honroso papel. Los encontró entre los revisionistas; encontró además una suerte de tropa de reserva entre ciertos estudiosos adictos a la neutralidad erudita que había sido consigna de la Nueva Escuela Histórica.

Pero la Nueva Escuela y el revisionismo eran los movimientos que dominaban la investigación historiográfica argentina cuando se organizó la dictadura; tampoco aquí trajo ésta, ni

para bien ni para mal, nada de sustancialmente nuevo, salvo ciertas trabas absurdas y humillantes. El Estado se limitaba a poner su acrecida potencia al servicio de ciertas orientaciones preexistentes; con ello acrecía sin duda sus posibilidades, pero también la resistencia que despertaban; esto es cierto sobre todo acerca del revisionismo, presentado a menudo como ideología oficial del régimen, con lo que venía a simplificarse polémicamente una relación más compleja y ambigua.

No, la dictadura no abrió la crisis que atraviesan los estudios historiográficos en la Argentina. Ya antes de ella la imagen que los argentinos se trazaban del pasado nacional era confusa y contradictoria; ya antes de ella se habían acostumbrado los argentinos a no esperar aclaraciones al respecto por parte de sus historiadores. Más aún: esa crisis sólo en parte puede atribuirse a la paralela crisis de ideales políticos y convicciones heredadas que el país atravesaba; era además el aspecto argentino de una crisis general en todo el Occidente. El siglo XX no puede ya llamarse el siglo de la historia; ahora no creemos ya, como podía creer Vico, que la naturaleza de las cosas se identifique con su nacimiento; esa decadencia de las explicaciones génitas ha liberado sin duda a la investigación histórica de muchos de los prejuicios que hasta ayer trabaron su desarrollo, pero a la vez la ha privado del apasionado interés que eruditos y políticos habían puesto en el examen del pasado, clave de los enigmas del presente. La investigación histórica se transformaba así en un saber especializado; este hecho inevitable presenta a la vez inconvenientes y posibles ventajas: en la Argentina se hicieron sentir sobre todo los primeros. Porque los historiadores argentinos no solían interesarse por el destino y las revoluciones de su disciplina; basta en efecto reflexionar sobre qué nombres, entre los de quienes en estos últimos cincuenta años han significado algo en la evolución de los estudios históricos, son conocidos por los estudiosos argentinos, y sobre todo cuántos de éstos han sabido

emplear sus lecciones o sus enseñanzas... La historiografía argentina, en medio de esa angustiada renovación, seguía encerrada sobre sí misma, vivía, si es que puede decirse que vivía, de la gran herencia del romanticismo liberal, sobre la cual se habían construido los esquemas aplicables a la historia argentina, a mediados del siglo XIX.

Sólo que frente a esa herencia nuestros historiadores no querían ya mantener un acatamiento total. La Nueva Escuela había pretendido emanciparse de su pesada tutela; con Ricardo Levene había rechazado la violenta contraposición entre despotismo colonial y libertad revolucionaria; con Emilio Ravignani había rechazado la imagen heredada de la época de Rosas, como período de lucha cerrada entre la libertad y la tiranía. Pero tras corroer esas grandes antítesis caras a la tradición recibida, la Nueva Escuela no supo con qué reemplazarlas; en esto se correspondía bastante bien con el movimiento político a ella paralelo, con el radicalismo, también él incapaz de elegir entre la condena y la aceptación del pasado liberal. La Nueva Escuela no eligió nunca; iluminó su imagen del pasado con una vaga luz crepuscular que borraba todos los rasgos originales, e identificó alegremente la Contrarreforma y la Ilustración, y dio un retrato de don Juan Manuel de Rosas que acaso hubiera sido igualmente válido para don Pastor Obligado. Es lo que los historiadores de la Nueva Escuela llamaban orgullosamente historia erudita y documentada, que proclamaba un gigantesco progreso sobre el anterior y más despreocupado modo de hacer historia. Pero aun la investigación erudita requiere un marco, un contexto en el cual ubicar sus descubrimientos, y la Nueva Escuela utilizó alternativamente, y con total indiferencia, los que le eran ofrecidos. La facilidad con que, de edición en edición, tal estudioso de la Nueva Escuela va cambiando el sentido general de un proceso por él estudiado según cambian las simpatías retrospectivas de los poderosos del momento puede sin duda indignar. Pero al autor

no le habrán sin duda costado demasiado tales concesiones, para él sin importancia, a los caprichos del tiempo. Más que esa pasajera espuma le importa la firme roca sobre la cual ha edificado: la tupida contextura de las notas a pie de página.

Este culto del dato, del hecho desnudo, se identifica pues con lo que la Nueva Escuela, en tren de halagarse a sí misma, llamaba su objetividad erudita. ¿Será necesario decir de nuevo hasta qué punto esa imagen de la objetividad histórica era falsa? ¿Recordar cómo el hecho desnudo no es algo que el historiador encuentra en su camino, que es algo que él debe construir; que su objetividad está dada también ella *in interiore homine*, que es el fruto de un riguroso proceso espiritual? La objetividad de los hechos incansablemente almacenados por la Nueva Escuela se obtenía de otro modo: mutilándolos de algunos de sus elementos esenciales, para los cuales no disponían al parecer esos historiadores de instrumentos de captación adecuados.

"Se comienza siempre por la objetividad." La vacía objetividad de la Nueva Escuela abría en efecto una crisis de nuestra historiografía; pero la abría sin siquiera advertirlo, sin buscar por lo tanto los elementos que podrían utilizarse para superarla. Una comprensión más exacta de la situación en que se hallaba nuestra conciencia histórica está en la base del revisionismo. Parten los revisionistas de una comprobación que no ha de discutirse aquí: lo que se ha llamado tradición liberal argentina ha agotado ya su eficacia y sus posibilidades; es preciso crear una nueva conciencia nacional capaz de reemplazarla. Esa renovación debe extenderse, desde luego, al campo de la investigación histórica; se manifestará en ella como una revisión sin complacencias de los valores recibidos, cuya ilegitimidad se sospecha. La tentativa no estaba exenta de riesgos: algunos, que no han de considerarse ahora, nacen de la imprecisión del ideario político de los revisionistas. Otros, que sí han de tomarse en cuenta, vienen de que los revisionistas

vieron en su tarea histórica un aspecto en el fondo marginal de un vasto proceso que tenía por centro la vida política: se trataba de privar de su prestigio a una tradición política aborrecida; la historia, como interés sin reticencias por los hechos y su sentido, sólo remotamente se vinculaba con ese propósito. Sólo así puede entenderse una conducta que, desde el punto de vista de la pura investigación histórica, parece aberrante. Los revisionistas no revisan los esquemas heredados; invierten tan sólo los signos valorativos que tradicionalmente marcaban a cada uno de los términos en ellos contrapuestos. Descubren que un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires es presentado habitualmente con negros colores; según la moda vigente en esos años que vieron tantas y tan arbitrarias rehabilitaciones, adoptan su nombre como el de un precursor de sus propios ideales. El ejercicio de hallar parecidos entre Rosas y los distintos jefes políticos que gozaron de la simpatía de los revisionistas comenzó a practicarse con alegre espíritu deportivo por una juventud turbulenta que tenía toda la vida por delante. Tras de un cuarto de siglo, trocado en rito melancólico, sigue practicándose por unos hombres un tanto desencantados porque hay quienes se obstinan en no tomarlos en serio. Pero el revisionismo tiene todavía otro aspecto: antes de transformarse en el héroe retrospectivo de una juventud amiga del escándalo, Rosas había sido jefe de un partido y de una familia; había dejado en la Argentina quienes lo recordaban con afecto o con reconocimiento: toda una literatura había surgido en su defensa, una literatura tupida de hechos y alusiones, pobre en cambio de contenidos ideológicos. Destinada a probar que Rosas había sido un gobernante como los otros, tan excelente (o pésimo) liberal como los otros, y más honrado que los otros, sus propósitos tenían muy poco en común con los del revisionismo. Pero el revisionismo hallaba en ella todo un arsenal de hechos y argumentos que lo eximía en parte de emprender una seria investigación histórica, cosa a la cual la ma-

yor parte de los revisionistas estaba dispuesta. Surge así el doble aspecto del revisionismo; por una parte propone una imagen del pasado argentino nacida de una abstracción de segundo grado, nacida de la reelaboración polémica de los esquemas de la historiografía liberal, por otra vuelve a formas de crónica apologética y censoria en boga cincuenta años antes. Ideológicamente, el revisionismo integraba un esfuerzo en parte logrado por adecuarse al tiempo en que el fascismo parecía recoger la herencia de la democracia moribunda; desde el punto de vista de la pura investigación histórica significaba una evidente involución respecto de las modestas conquistas de la Nueva Escuela.

Desde uno y otro punto de vista era ya cosa anacrónica cuando se instaló la dictadura; acaso porque lo era, porque estaba ya alejado de todos los problemas que la Argentina del presente planteaba, gozó el revisionismo del favor de ésta. Pero si la investigación histórica oficial nunca ha estado más alejada de la vida argentina que en estos diez años, pocas veces se ha sentido más intensamente la necesidad de vincular pasado y presente para entender lo que en el país ocurría. Y no han faltado tampoco personas de buena voluntad dispuestas a colmar ese hiato. Criticar con excesivo rigor los frutos de su esfuerzo sería injusto: es preciso no olvidar que, si esa tarea quedó en manos no profesionalmente capacitadas para ella, fue por una previa dimisión de quienes tenían a la vez el derecho y el deber de emprenderla. Ha de reconocerse además que esas investigaciones emprendidas al margen de toda escuela ampliaron en tiempo y magnitud de problemas encarados el marco habitual de la historia argentina. No es menos innegable que utilizaron con confianza a menudo infundada los datos recogidos con propósitos muy diversos por historiadores anteriores; se apoyaron entonces en un caudal de hechos en el mejor de los casos fragmentario y en el peor y no infrecuente escasamente exacto. No menos grave es que la inspiración

ideológica de ese movimiento renovador fuese a menudo una suerte de marxismo simplificado y sumario, más empobrecedor a veces de la compleja realidad que las interpretaciones de marca oficial comunista. Esta forma de marxismo difuso es acaso característica inevitable de un pensamiento elaborado dificultosamente en un clima de represión política e ideológica: es característico que su influjo sea aún mayor en España; allí el más adormecido archivista sabe que todo, desde la resistencia de Sagunto hasta la política de Maura, tiene "desde luego" explicación económica.

Si aquí se insiste en las fallas de ese heroico esfuerzo individual es a sabiendas de la injusticia que con ello se comete. Injusticia necesaria: una historiografía argentina que quiera volver a ser cosa viva deberá surgir como continuación —y a la vez corrección— de ese esfuerzo, y para este nuevo comienzo es preciso un previo y severo balance. A él invita la Liberación. La Liberación no sólo implica el fin de la dura presión del Estado contra toda actividad cultural seria, no sólo permite esperar razonablemente que dentro de la penuria de los años que vienen esas actividades podrán contar con auxilios, ya que no cuantiosos, sensatamente distribuidos de origen estatal. Todo eso, con ser importante, no es lo esencial. Lo esencial han de hacerlo, ahora como antes, quienes, sin que nadie los haya llamado a ello, elaboran la cultura argentina porque tal es su vocación. Pero también para ellos y su obra la hora de la Liberación significa algo. Significa que se inaugura un nuevo modo de dar testimonio de una lealtad tan duramente mantenida en los años que pasaron. Un modo a la vez más sincero y más audaz, cuya sinceridad y audacia no se han de ejercer ya polémicamente sobre los adversarios, sino sobre el propio pensamiento y las propias costumbres intelectuales, moldeadas por un decenio de convivencia, así sea hostil, con la dictadura. De este modo el balance al que invita la Liberación en cuanto a la situación de nuestros estudios históricos

debiera ser a la vez un examen de conciencia exento de toda complicidad con el pasado; con el de los demás, lo que es evidente; con el nuestro, lo que no es tan evidente pero acaso aún más necesario. Pero es además un punto de partida: de él debiera surgir un cuadro preciso de lo que necesita la investigación historiográfica argentina para estar a la altura a la vez de la nueva hora nacional y del movimiento general de los estudios históricos. Intentemos trazar aquí, así sea en forma conjetural, algunas de las grandes líneas de ese cuadro.

Ante todo, la investigación historiográfica debe permanecer cerca de los problemas vivos de nuestro tiempo. No significa esto que deba transformar las luchas del pasado en una alegoría de las del presente; debe sí alcanzar esa forma de actualidad que es propia de la historia, que hizo la grandeza de las grandes obras históricas (en nuestro país de la de Mitre) y que liberará a nuestros historiadores de la tentación de acomodar su labor dentro de esquemas que han perdido ya validez.

La investigación debe además apoyarse en una cultura histórica más sólida y moderna; es intolerable que de los debates en los que se decide la suerte de su disciplina los historiadores argentinos suelan no tener siquiera conocimiento (y no son discusiones sin incidencia dentro de la concreta investigación: véase tan sólo qué insuficiencias presenta nuestra historia económica sencillamente porque los que a ella se dedican creen lícito ignorar lo que en otras partes se hace). Esta exigencia viene a identificarse con la anterior: precisamente a través de la evolución actual de la ciencia histórica podrán nuestros estudiosos captar, si es que tienen órgano adecuado para ello, la presencia viva de nuestra época turbada. La cultura académica es menos cerrada de lo que se cree a los problemas actuales (aun una disciplina aparentemente tan árida y abstracta como la historia de precios lleva en su desarrollo la huella, por ejemplo, de la boga del socialismo a fines del siglo XIX, o de la

crisis de 1929). A condición, claro está, de ser cultura académica de hoy; la de anteayer, no es preciso decirlo, responde a las apetencias de anteayer.

Y —cosa no menos importante— esa cultura histórica enriquecida debe estar en la base de un esfuerzo de investigación erudita si mejor orientado no menos intenso que el emprendido por la Nueva Escuela. Habría que subrayar esto: es de temer que por reacción a una erudición sin norma ni sentido pueda surgir aquí también una rebelión contra toda cautela erudita, tal como la predicaba, con fe elocuente, Ramón Iglesia, tal como sigue proponiéndola Edmundo O'Gorman. ¿Es necesario decir que el correctivo contra una erudición que no sabe qué se propone no es la falta de toda erudición, sino una investigación que ella sí sabe qué busca? Acaso lo sea. Pero apenas intentemos plantear ciertos problemas (para poner tan sólo un ejemplo, las alternativas de la rivalidad entre agricultura y pastoreo en el noroeste) nos parecerá que la historiografía argentina no ha pecado por exceso sino por defecto de erudición: hasta tal punto nos faltan los datos orientadores. No, el juicio sobre la pasada labor erudita debe ser aún más duro; no es verdad que haya juntado materiales de los que toque ahora hacer, como se dice, la síntesis; ha reunido indiscriminadamente material útil e inservible, y toca a los historiadores de hoy enmendar, completar y a menudo comenzar de nuevo su trabajo.

¿Todo es posible? No lo sé, en todo caso sería preciso que lo fuese. De lo contrario también la hora de la Liberación habría pasado en vano para la historiografía argentina, y no es previsible que una coyuntura tan rica en aperturas hacia el futuro vuelva a darse en mucho tiempo.

Del Fascismo al Peronismo

Entre fascismo y peronismo la comparación se ha hecho una vez y otra, y no es difícil hallar semejanzas exteriores entre dos movimientos que, en una era de masas, condujeron a la instalación de dictaduras. Pero apenas se intenta llevar la comparación a planos menos superficiales no se alcanzan ya resultados tan satisfactorios; es por lo tanto natural que se renuncie a seguir un camino de indagación del que no se espera nada nuevo ni importante. Sin embargo la cuestión no es tan sencilla: el peronismo no fue, sin duda, una forma de fascismo; fue por lo menos el resultado —o más bien el residuo, inesperado para todos y también para su creador y beneficiario— de una tentativa de reforma fascista de la vida política argentina. Pero la vinculación entre fascismo y peronismo se da todavía de otra manera: el fascismo siguió hasta el fin siendo el modelo que el jefe del peronismo se había fijado, que intentaba con cautelosa obstinación llevar a los hechos. No porque esa larga y sinuosa tentativa haya sido a la vez un fracaso tiene ella menos importancia: si el ejemplo del fascismo no pudo dar orientación concreta al movimiento peronista contribuyó en cambio muy eficazmente a desorientarlo, a fijarle métodos y objetivos a la vez imposibles y contrarios a la índo-

le misma del movimiento argentino. Nace de allí una interna tensión que acompañó al peronismo en todo su curso, anticipo de la crisis final prevista por observadores sagaces, en la cual las energías revolucionarias largamente constreñidas fuera de cauce natural arrasarían con las estructuras políticas que pretendían representarlas y de hecho las traicionaban. Ahora bien, el peronismo pudo dominar durante diez años, pudo ser derrocado sin que esa crisis se produjese, sin que pareciese siquiera cerca. ¿Es que la fuerza revolucionaria que anidaba al movimiento no era al cabo tan considerable? O, para plantear en términos más amplios el problema sin duda básico para entender la historia del peronismo: ¿se frustró en él una revolución o acaso no hubo en su origen revolución alguna que pudiera frustrarse?

Orígenes, naturaleza, ímpetu revolucionario del peronismo; todos esos problemas sin duda demasiado vastos es preciso evocar para entender la ambigua relación entre peronismo y fascismo.

Como posible solución a la crisis política argentina, el fascismo había aparecido con creciente insistencia a partir de 1930. Sin duda sólo una minoría abogaba decididamente por su implantación, sin duda las tentativas de implantarlo carecieron de seriedad y continuidad. Pero no por eso dejaba de gozar el fascismo de un prestigio muy vasto, debido tanto a sus éxitos europeos como a la peculiar situación política que atravesaba la Argentina. Los grupos dominantes luego de 1930 buscaron restaurar una república conservadora, apoyada en el falseamiento sistemático del sufragio universal. Pero, como era esperable, esta restauración creó una situación sustancialmente nueva. Nueva en el campo económico: el régimen conservador tradicional buscaba encauzar y explotar la tendencia ascendente de la economía argentina, y sus períodos de esplen-

dor habían coincidido con las épocas de prosperidad; mérito del general Justo fue advertir que era posible montar una máquina política conservadora para épocas de depresión, aprovechando y adaptando los principios dirigistas que la crisis iba imponiendo en todas partes. Nueva también en lo político: antes el grupo gobernante conservador había pretendido actuar en nombre de una voluntad popular ausente, y su gestión estaba destinada a tornarla cada vez menos ausente; en palabras de Alberdi, la apenas republicana república posible abría el camino para la república verdadera. Ahora la república verdadera quedaba atrás; a los ojos de los nuevos dirigentes la experiencia democrática había sido concluyente y no se trataba ya de preparar el nacimiento de una efectiva voluntad popular, sino de contrarrestar una voluntad juzgada radicalmente incapaz de gobernar. Así, ante el régimen conservador parecían cerrarse todas las vías de evolución: no había ya "radioso porvenir" de prosperidad económica ni progreso hacia una democracia menos irrisoria. Entre todos esos caminos cerrados, quedaba abierto el camino del fascismo. No es que los dirigentes conservadores se propusieran conducir por él a la Nación: en general no aspiraban a nada mejor que dejar las cosas como estaban. Pero cuando la guerra puso fin a la coyuntura económica sobre la cual había construido su sistema político el general Justo, cuando los intentos de su sucesor mostraron que la vuelta a modos más sinceros de practicar la democracia política era un peligro menos remoto de lo que se creía, el fascismo pareció acercarse cada vez más. Y cuando, en 1943, una revolución militar desalojó del poder al último presidente conservador, mientras el fascismo, apenas superado el punto más alto de su trayectoria, dominaba a toda Europa y se preparaba a defenderla del asalto del resto del mundo, pareció evidente, tras de los titubeos iniciales, que la Argentina iba a tomar, por fin sin reticencias, el camino del fascismo, ante el cual había vacilado durante trece años.

Se empezó a edificar, entonces, la Argentina fascista. Y a la vez se empezó a advertir que una orientación o ideología es cosa muy distinta de un modo de gobierno; que aun como ideología el fascismo era cosa menos clara y precisa de lo que había parecido cuando había pesado como promesa o amenaza en el horizonte político. En la Argentina de 1930-43 fascismo había significado a la vez justificación y una suerte de extrapolación autoritaria de los modos de gobierno vigente; los ensayos fascistas más caracterizados (como el de la provincia de Buenos Aires) participaron del aire hechizado y fantasmagórico de toda esa época: basta pensar en cómo la experiencia de Buenos Aires fue cortada sin resistencia por una decisión del poder central, basta comparar su vitalidad con, por ejemplo, la del cantonismo sanjuanino, también él ensayo de régimen autoritario crecido en clima muy distinto de la experiencia radical. Durante trece años fascismo había sido sustancialmente complicidad con el régimen conservador; y luego de la revolución de junio fue la interpretación conservadora del fascismo la que comenzó por triunfar. Se trataba, siguiendo el ejemplo de España y de la aún prestigiosa Francia de Vichy, de volver a los valores tradicionales, negados desde hacía un siglo por los directores de la política argentina. La restauración resultó cosa mucho menos fácil de lo que creyeron los revolucionarios de junio al comenzar su tarea. Si en España el orden restaurable estaba aún cercano, vivo aún en los hechos y en las conciencias de buena parte de los españoles, si en Francia era preciso sin duda combatir una tradición republicana identificada tras de un siglo y medio con la tradición nacional, pero al menos existía medida común entre la nación francesa del antiguo régimen y la de 1939, al menos la estructura más honda del cuerpo nacional conservaba los rasgos dominantes de la Francia monárquica, en la Argentina no parecía haber ya esa medida común entre la realidad de 1943 y los ideales vigentes, o supuestamente vigentes, en el Buenos Aires de 1750

o de 1850. Toda una estructura económica y social incomprensible a la luz de esos ideales era puesta en entredicho por los restauradores. ¿La amenaza fascista era una amenaza seria? Por lo menos tomada extremadamente en serio por algunos grupos que debían su existencia misma a los cambios introducidos que habían creado una Argentina nueva luego de Caseros, que sintieron, ante los extravagantes ataques a los que esa Argentina era sometida por los nuevos gobernantes, que su *status* social estaba siendo amenazado. La más sensible a esa amenaza fue la clase media superior y profesional, porque estaba más dispuesta a dar peso a un peligro que parecía limitarse por el momento a los encendidos esfuerzos oratorios de los restauradores. A la luz apocalíptica de la experiencia totalitaria europea, esa clase pudo creer que estaba al borde de ser degradada socialmente en beneficio de los argentinos en que sobrevivía la "tradición hispanocriolla", o, en palabras más pobres, de los grupos dirigentes tradicionales, que tras de eliminarla de toda participación en el poder en 1930 renegaban de su pasado liberal para pretender crudamente una restauración del orden social anterior a 1852.

Así, el fascismo llegó a ser ante todo una tentativa de restaurar el orden tradicional. La restauración política se dobló de inmediato de restauración religiosa: no casualmente la revolución que volvía a aspectos fundamentales del Estado confesional parecía cortar definitivamente los lazos con el pasado liberal. Pero la restauración religiosa se daba a la vez subordinada a la restauración política: los dirigentes intelectuales del movimiento, vueltos a la fe gracias a una crítica previa de la política y la sociedad moderna, veían en ella, si no tan sólo un *instrumentum regni*, sí en todo caso un aspecto de una constelación cultural que se trataba de restaurar. Sobre estas bases doctrinarias, los fascistas argentinos se lanzaron a una infatigable cruzada de elocuencia: durante meses amenazaron con el hierro y el fuego a la nación culpable de apostasía. Así

negados, los mitos de la Argentina liberal revelaron que no estaban del todo muertos; ellos guiaron al primer gran movimiento político del turbado año 45: la Resistencia. Hoy se tiende a identificar la resistencia con la última defensa de las clases dirigentes tradicionales ante el avance de cambios revolucionarios; la interpretación, aunque explica algunos aspectos del movimiento, es fundamentalmente falsa. Ni la índole ni los errores del movimiento corresponden a lo esperable en grupos de larga experiencia política, conscientes a la vez de su impopularidad. No, la Resistencia es ante todo la obra de grupos sociales en ascenso, por un instante amenazados. Pero lo que le dio su fuerza y su fe en el triunfo fue el súbito disiparse de esa amenaza.

En efecto, mientras la Argentina parecía madura para el fascismo, el mundo se revelaba demasiado maduro para él. En Europa el nuevo milenio comenzaba a dar señales de tocar a su fin; en la Argentina los profetas coléricos o melancólicos que invitaban a mirar en el ejemplo europeo los frutos amargos de un siglo de liberalismo hallaban que de súbito los hechos se negaban a ilustrar la moraleja que incansablemente habían venido repitiendo. A la luz de la nueva experiencia europea las que habían sido figuras temibles se trasformaron en figuras grotescas. Los más agudos entre los gobernantes surgidos de la revolución advirtieron muy pronto que la tarea de adaptar la estructura política argentina al nuevo orden totalitario había perdido ya toda oportunidad. Si el año 44 comenzó bajo el signo del adviento totalitario, el 45 comenzó mucho más apaciblemente: debía ser el año de la "vuelta a la normalidad". Los partidos, esas sentinas de corrupción, los políticos cotidianamente injuriados, se transformaron de pronto en elementos indispensables para la reconstrucción nacional. Mientras el gobierno buscaba colmarlos de menudos favores, el ministro de Guerra y secretario de Trabajo ofrecía su prestigio ya considerable y un influjo sobre el gobierno que nadie se atre-

vía a discutir al grupo político que le concediese a la vez su apoyo. En la Universidad, tras de una sucesión de ululantes Jeremías y Habacucs del Nuevo Orden, se vio reaparecer la figura no desconocida del doctor Arce; él y el que sería jefe del peronismo tomaron sobre sí la tarea de "devolver la normalidad" a esa institución largamente atormentada; la síntesis entre el ayer y el mañana se realizaba de esta manera sin duda imprevista para quienes venían proclamándola desde hacía un año. Acaso ni el precio que el ministro de Guerra exigía por sus servicios, no inferior al que por una operación análoga había obtenido el general Justo, hubiese impedido, en una Argentina que fuese aún la de 1943, que el negocio alcanzara buen término.

Pero la Argentina de principios de 1945 no era ya la de 1943. Los grupos que habían sentido la amenaza de la restauración del nuevo y viejo orden aspiraban también, a su manera, a una nueva distribución del poder político en la Argentina; no querían que la aventura totalitaria terminase con una restauración de los viejos políticos, y menos aún con una alianza entre viejos políticos y jefes fascistas a medias arrepentidos. Esos grupos, que no se habían sentido representados ni por la política aplebeyada del radicalismo, ni por la cerrazón oligárquica de la restauración conservadora, esos grupos que en medio de tales sinsabores políticos no habían dejado de ascender socialmente (y habían seguido ascendiendo, más rápidamente que antes gracias a la prosperidad de la guerra, mientras los nuevos gobernantes cubrían de injurias la tradición con la cual se identificaban) creían que su hora había llegado. En esta seguridad influía, junto con el optimismo impaciente de todo grupo en ascenso social, el ejemplo europeo. El peso de este último se revela ya en el nombre que tomó el movimiento: la Resistencia. En efecto, la resistencia argentina quiso incluirse en la vasta saga antifascista que abarcaba todo el mundo; de ella tomó los mitos, desde Juana de Arco hasta los soldados de

Valmy y los defensores de Madrid, y tomó también la táctica: una presión continua y despiadada contra un enemigo con el cual no era posible imaginar acuerdos. La lucha debía terminar en la rendición incondicional, y la resistencia argentina, con imprudente seguridad, no ocultaba su intención de imponer duros castigos a los responsables del ensayo fascista. La resistencia europea y la guerra sirvieron para enmascarar ciertos aspectos en que el movimiento argentino mostraba sus carencias: así la falta de todo contenido específico de cambio social. La guerra hace siempre aparecer fluidas las estructuras sociales; hace que toda reforma parezca a la vez posible y secundaria; todos creen evidente que el mundo que surgirá de ella será radicalmente nuevo, hasta tal punto lo creen que es apenas preciso insistir sobre ello. En la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de conciliar los idearios sociales de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética contribuyó a agregar vaguedad a la vaguedad. De este modo la resistencia argentina no podía recibir de su modelo europeo sino un ejemplo de genérica buena voluntad en el plano social, y lo hizo suyo de buen grado. Prueba sin duda de que el movimiento no tenía el carácter de reacción oligárquica que le atribuye la que durante diez años ha sido versión canónica; pero esa imprecisa buena voluntad no bastaba para proteger a la resistencia de las tentativas reaccionarias de confiscar el movimiento en provecho propio. De hecho, esa buena voluntad impedía más eficazmente el concreto planteo de exigencias sociales que una abierta negativa a plantearlos. De este modo la resistencia fue en un núcleo un movimiento destinado a imponer el cumplimiento estricto de la Constitución de 1853. ¿Esa exigencia constitucional era insuficiente para traducir las aspiraciones de la mayoría del pueblo argentino?

Al principio pareció que era, por el contrario, del todo suficiente. La resistencia pudo juntar multitudes antes no vistas, pudo organizar un sistema capilar que cubrió el país, utilizan-

do organizaciones estudiantiles y profesionales ya existentes, pudo crear comités de emergencia de profesiones y oficios que contaban en ellos con la casi unanimidad. Esa casi unanimidad no era del todo espontánea; era sabido que en ciertos grupos era necesaria alguna entereza para no agregarse a la falange de luchadores por la libertad; nueva prueba, a su modo, de la vitalidad preponderante del movimiento. Sin duda, estas coincidencias se limitaban a ciertos grupos sociales; en otros la actitud, sin ser en un principio hostil al movimiento, era indiferente. Pero esos grupos estaban acostumbrados a considerarse voceros de todo el pueblo, o por lo menos, para usar un término aparentemente inadecuado, de todo el Tercer Estado; y de hecho desde 1930 sus motivos de apartamiento del régimen vigente coincidían con los que animaban a capas más numerosas del pueblo. Y la misma exigencia de aplicación leal de la Constitución tenía tradicionalmente contenido popular: era ante todo exigencia de llevar a los hechos el sufragio universal, de dar así participación en el poder a grupos hasta entonces excluidos. ¿Seguía significando eso? Sin duda para la resistencia la vuelta a la Constitución significaba eso, pero también algo más, ante todo la imposición de ciertos modos de acción políticos ajenos a la vez a toda demagogia plebeya y a toda prevención ante una democracia sinceramente practicada, modos de acción que no tenían un específico contenido de clase, pero que representaban sin embargo una exigencia de clase, en cuanto buscaban imponer valores que interesaban ante todo a un determinado grupo social, que sólo los miembros de ese grupo social estaban en condiciones de imponer desde el gobierno. Pidiendo una democracia honrada, la resistencia pedía a la vez el gobierno para los grupos que la integraban. Esa ambigüedad de la exigencia constitucional era oscuramente sentida por quienes eran espectadores y no actores del conflicto entre el gobierno militar y la resistencia civil; era evidente que apenas apareciese un nuevo modo de lograr la

participación de otras clases en el gobierno, menos lento y engorroso que la práctica leal de la Ley Sáenz Peña, la resistencia quedaría del todo privada de su eco, ya tan sordo, en la masa del pueblo. Mientras tanto, no preveía el peligro, seguía lanzando golpe tras golpe al gobierno fascista y manifiesto tras manifiesto a un país que comenzaba a dudar del derecho que tenía de considerarse perseguido un movimiento que con impune insolencia devolvía cotidianamente a un gobierno ahora resignado al parecer a todo las injurias que de él había recibido un año antes.

Pero el gobierno no estaba resignado a todo; estaba dispuesto a sufrir infinitas humillaciones, no a perecer en la guillotina insistentemente prometida por la resistencia. Atacado, contemporizaba y preparaba su defensa. Su primera ventaja fue que advirtió el primero que no habría salida revolucionaria: la crisis política se resolvería de modo menos novedoso mediante elecciones generales. Y mientras la resistencia se preparaba y fortalecía su ánimo para una guerra civil, mientras vivía de la fe en el nuevo comienzo que el año anterior había animado a sus perseguidores, el gobierno buscaba pacientemente posibles votantes. En esta engorrosa y no limpia tarea se destacó el que iba a ser fundador del peronismo. El gobierno contaba sin duda con apoyos ganados en sus dos etapas anteriores: la restauración totalitaria y la "normalización". La primera dejó como saldo el apoyo episcopal, la segunda la adhesión, si no de políticos de dimensiones nacionales, de muy numerosos caudillos locales que encauzaban y dirigían la distribución de los favores estatales. Ambos elementos creaban el núcleo de una estructura partidaria de tipo tradicional en la Argentina; no bastaban de ningún modo para vencer a las organizaciones políticas tradicionales. La resistencia estuvo por eso en lo justo al no amedrentarse ante estas tentativas de

"fundar un partido político como si fuese una agencia de colocaciones".

Pero sin desdeñar esos apoyos, el secretario de Trabajo buscó otros en una Argentina profundamente transformada por la prosperidad de guerra. Los encontró entre dos grupos también ellos en rápido ascenso. Ante todo en un sector industrial, que veía con alarma cómo la resistencia recibía sin recelo la adhesión de los grupos económicos tradicionales dominantes, que temía que una derrota del gobierno implicase por lo tanto el desmantelamiento de la frágil industrialización de guerra. Y otra clase a quien la industrialización había hecho también más numerosa y próspera: los obreros industriales. Ante ellos podía el gobierno invocar una política de reformas sociales que hoy tiende a identificarse desde sus comienzos con lo que luego sería el peronismo.

Ahora bien, que esa política es el antecedente principal de lo que luego sería el peronismo no ha de discutirse. Pero no es, ya, el peronismo. Cuando el que luego sería jefe del movimiento toma a su cargo la política social del gobierno de junio comienza por aplicar también en este campo un esquema sustancialmente fascista: para poner fin a la lucha de clases, declarada estéril y contraria a la cohesión nacional, el fascismo había proporcionado a la clase obrera ciertas ventajas en campos muy limitados (asistencia, previsión), que venían a testimoniar a esa clase la concreta solidaridad de la Nación con sus aspiraciones a la vez que intentaban alejarla de todo retorno a la tradición revolucionaria. Pero tenía ese efecto apaciguador, la política social fascista podía contar con el apoyo de los grupos patronales, aunque les impusiese algunos sacrificios inmediatos. Ese modo de poner fin a las tensiones sociales intentó aplicarse en la Argentina, pero faltaban aquí los supuestos que en los países fascistas le ganaron buena acogida entre los grupos patronales y una recepción notablemente fría por parte de los trabajadores. El secretario

de Trabajo gustaba en los comienzos de explicar largamente cómo esas reformas eran una suerte de seguro contra la revolución social; los patrones argentinos, muy sensatamente, se negaban a creer en un cercano peligro de revolución social y se resistían a pagar onerosos seguros contra una eventualidad en extremo improbable (un año después darían prueba aún más clara de su confianza en la solidez del orden social argentino, al no negar su apoyo al partido Comunista, en el que buscaban protección contra quien quería protegerlos de la amenaza revolucionaria).

De este modo, la política social podía ser, en la intención, un esfuerzo por quebrar la conciencia de clase de los trabajadores; en los hechos, si quería sobrevivir, debía ser otra cosa. En el mismo sentido que este fracaso actuaba el éxito relativo alcanzado entre los trabajadores: la hostilidad inicial contra el gobierno reaccionario no era tan fuerte que no pudiese ser vencida con algunas medidas de reforma no demasiado revolucionaria. Gracias a ellas, el gobierno pudo ganar apoyo de algunos jefes sindicales que no por ello se proponían, por lo menos en los comienzos, renegar de su pasado. Tuvo así el gobierno, desde sus primeros pasos, un cierto apoyo obrero. No alcanzó sin embargo a adquirir un tono nuevo y definido en ese campo; las medidas de reforma se hacían con consignas en parte socialcristianas, en parte inspiradas en el paternalismo humanitario que era la posición más audaz imaginable para los funcionarios heredados del Departamento Nacional del Trabajo (que en ese primer momento tuvieron papel decisivo en la política obrera), en parte animadas del cauteloso reformismo de los jefes sindicales adheridos, que sacrificaba sin pena a las ventajas inmediatas una ya empalidecida tradición revolucionaria. Como desenvolvimiento natural de esa situación era pensable algo comparable a la España de Primo de Rivera, cuya dictadura pudo contar con la adhesión de los clericales y la benevolencia de los socialistas, pero careció de vigor

bastante para crear un movimiento obrero identificado en forma militante con el régimen. Esta pálida tentativa de reforma social paternalista se vio comprometida junto con los demás aspectos de la instauración de un Estado fascista por el crecimiento de la oposición interna e internacional. Acaso, de haber desembocado el régimen en una "vuelta" a la normalidad, el ensayo hubiese sido continuado en forma análoga a la que caracterizó a los gobiernos radicales; la resistencia impuso otro curso a los hechos.

El secretario de Trabajo advirtió qué posibilidades se abrían gracias al prejuicio favorable que su anterior política había asegurado al gobierno en la masa obrera; se propuso transformar ese prejuicio favorable en adhesión militante y hacer de la clase obrera el núcleo de cristalización constitucional del gobierno de junio. Todo ello sin crear tensiones sociales que pudiesen conducir a situaciones revolucionarias: si no creía ya que su papel fuese el de salvador del orden social amenazado, el secretario de Trabajo no deseaba tampoco someterlo a amenazas serias. El plan político del secretario no era ni original ni excesivamente sutil: era en su origen el intento reaccionario de despojar bruscamente a los partidos liberales de su clientela popular. Lo que hizo notable y singular el proceso argentino fue un éxito que superaba acaso las previsiones y los deseos de quien lo desencadenó.

Ese éxito debe ser explicado por las características peculiares de la clase obrera a la que se dirigía el secretario. El sector más antiguo y mejor organizado resistió sólo débilmente a las tentaciones de la nueva aventura política; y de ello se ha echado la culpa al reformismo sin horizontes ni perspectivas a que había venido a reducirse la conciencia sindical argentina en el período inmediatamente anterior. Pero el influjo de ese sector organizado fue al cabo secundario y tan sólo negativo; se vio arrastrado por la impetuosa adhesión de otras capas de formación más reciente, que iban a dar al movimiento obrero de

la era peronista su tono peculiar. Esos grupos se consideraban ya beneficiados por el tránsito de una durísima vida campesina al arrabal fabril, donde en medio de suciedad y promiscuidad que no eran para ellos nuevas conocían por lo menos, gracias a los altos salarios y la ocupación plena que trajo consigo la guerra, una despreocupación por el futuro, una holgura, una vez satisfechas las necesidades esenciales que se mantenían en un plano muy rudimentario, que eran ellas sí del todo nuevas. Era esa liberación del temor y la angustia lo que el peronismo se proponía institucionalizar y consolidar mediante sus reformas. El sentimiento de clase que está detrás del peronismo no es entonces el de un grupo que se siente víctima de la sociedad, sino el de un grupo que ve colmadas sus aspiraciones, que se ve instalado en lo que en su infinita inocencia juzga la prosperidad y quiere permanecer ya para siempre en ella. Pero si esa conciencia de clase no es socialmente revolucionaria, si en este campo es sustancialmente conservadora, puede ser en cambio revolucionaria en lo político. Esa clase obrera llegada así a clase emancipada de la pasada servidumbre económica, quiere a la vez emanciparse del sistema de valores impuesto a la sociedad argentina por las clases antes dominantes. Esa emancipación es lo que significó en el campo político el peronismo. El secretario de Trabajo advirtió muy bien hasta qué punto esa clase era ajena a las preocupaciones de decoro gubernativo y corrección constitucional que animaban a la resistencia, quiso transformar ese desapego en cerrada hostilidad, hacer madurar súbitamente una conciencia de clase que se daba como conciencia, no principalmente de un antagonismo económico y social, sino de un opuesto ideal cultural. Abandonando las mieles socialcristianas y las polvorientas arengas inspiradas en las memorias del Museo Social, se lanzó a una febril oratoria que sus incautos adversarios juzgaron delirante y era en cambio eficacísima. De su mente fértil surgieron uno tras otro los más regocijados mitos polémicos: tras de los

jovencitos engominados fueron las señoras que charlan de política en las confiterías, los *maquisards* de la parroquia del Socorro, los caballeros cuya máxima culpa era usar galera y bastón. En esas figuras grotescas se resumía la intemperante voluntad pedagógica de la resistencia, y por debajo de ella toda una forma tradicional de valoración era puesta en entredicho. Un día de octubre pudo advertir la resistencia con cuánto éxito: ahora las multitudes estaban también en el otro bando, y se entregaban con delirio al júbilo de su liberación. El modo de festejarla sobrecogió de horror a los indignados espectadores; y en su inocencia tenían en efecto los festejos una clara voluntad sacrílega: desde las danzas orgiásticas en la sala de espera de la estación Once hasta los gritos indeciblemente obscenos con que sus partidarios recibieron en su primera aparición pública a la esposa del jefe del movimiento. Pero esa deliberada ruptura con todo un pasado, en que la respetabilidad impuesta desde arriba parecía identificarse con la miseria también impuesta desde arriba, no fue acompañada de las venganzas sangrientas esperables de un rencor largamente reprimido. Y en efecto, el peronismo conservó siempre ese "talante de romería" de que habló un florido militante del movimiento, ese tono carnavalesco que le encontraban, en sustancial coincidencia, sus adversarios. Si en efecto las atrocidades debieron cometerse en los diez años de peronismo en el secreto de las comisarías, si las escenas de cólera popular debieron ser preparadas no sólo en cuanto a las incitaciones iniciales sino en todo su curso, porque era ya cosa sabida que las incitaciones no daban fruto, si las cosas estaban así, fue, se dice a menudo, porque el pueblo argentino es bueno. Y es cierto que el pueblo peronista se mostró muy escasamente feroz; esa conducta es por otra parte la esperable en grupos sociales sustancialmente satisfechos de su situación, que creen estar coronando el predominio social y económico que imaginan haber alcanzado con un equivalente predominio político.

La anterior caracterización no quiere ser una crítica de los que así veían su presente y su futuro, y creían candorosamente que las jubilaciones y las licencias por enfermedad eran ya la revolución social. No son tampoco necesariamente una censura para quien decidió emplear y encauzar esa fuerza social que se les ofrecía, dándole a la vez el apoyo del Estado. Se trataba de una clase que había alcanzado muy escasa madurez; era inevitable que sus organizaciones, coronadas por la majestuosa CGT de seis millones de proletarios, tuviesen más forma que sustancia o, más exactamente, una sustancia del todo indiferente a su forma. Esto no era nuevo en un país cuyos dirigentes tradicionales habían creído que es preciso crear ante todo el órgano, porque de algún modo el órgano termina por crear la función; en que fue levantada toda una organización constitucional reconocidamente impracticable en la esperanza de que los decenios terminaran por envolver de carne viva a ese vacío esqueleto. La inmadurez de los grupos sociales, el influjo supletorio de la única organización fuerte, el Estado, son datos esenciales de la historia argentina que el peronismo no creó, que se limitó a dejar intactos, que será preciso, cualquiera sea el signo político que el país asuma, seguir tomando en cuenta. Cabe anotar tan sólo que una conciencia social tal como había logrado evocar en la clase trabajadora el fundador del peronismo concedía a éste un espacio de maniobra singularmente cómodo. En efecto, no se traducía en exigencias urgentes de nuevos cambios sociales. El futuro era visto como prolongación indefinida del presente de bienaventuranza; las clases explotadas no debían ser eliminadas (en este campo el peronismo puso sus columnas de Hércules en la participación en las ganancias, y es significativo que no haya existido nunca efectiva presión de parte de su masa para que diera cumplimiento efectivo a promesa tan bien sonante). Al revés, los patronos debían continuar siéndolo en el nuevo clima político y social: su expiación consistiría en contemplar y costear la fe-

licidad de sus antiguos siervos. Pero esa falta de horizontes revolucionarios en el peronismo era algo más que la renuncia a una táctica determinada, estaba en la raíz misma de la conciencia social por él evocada no sólo en cuanto era conciencia de una clase ya satisfecha en sus exigencias, sino a la vez conciencia de una clase definible sólo en el contexto del antiguo orden como abarcando todo lo no incluido por las antiguas clases dirigentes. Esa clase aceptó para sí el término caracterizador de "los humildes", aceptó que se incluyera en ella a todos los agraviados por el antiguo régimen, aun, por ejemplo, los delincuentes comunes (a ellos, en cuanto grupo social, se dirigió la esposa del jefe del movimiento en una de sus primeras oraciones políticas). En suma, no sólo se ubicaba dentro del régimen social vigente, sino sólo podía verse a sí misma dentro de ese régimen social.

De este modo el jefe del movimiento podía estar seguro: lo único que exigía esa masa que abnegadamente lo apoyaba era que mantuviese su prosperidad; traducida en otros términos, su exigencia era la misma que la del grupo de industriales que se había acercado al movimiento: se trataba de mantener a cualquier costo la industrialización surgida de la guerra. En cuanto al resto, el jefe del movimiento podía escoger libremente su futura política.

Pero esa posibilidad tan amplia de escoger su camino tenía también su aspecto negativo: del cuerpo social encuadrado en el movimiento no llegaba ninguna orientación acerca del rumbo que era preciso tomar. Al principio la desorientación de esa "nueva conciencia" que se había puesto en marcha y no sabía hacia dónde, quedó enmascarada por la extrema torpeza que mostró la resistencia en sus últimas tentativas. Octubre la había privado de la fe en sí misma que hasta entonces le había dado audacia; ahora buscó y aceptó todas las alianzas, sin

pesar siquiera lo que aportaban y lo que restaban a su fuerza original. Con un ciego frenesí quiso modelarse sobre la imagen que de ella daban sus adversarios; fue no sólo la abierta y declarada expresión política de la oligarquía terrateniente, sino todavía de la embajada de los Estados Unidos y todavía de la Unión Industrial. Haber destruido tan amenazadora conjunción de fuerzas era para la masa encuadrada en el peronismo un motivo de alivio perdurable; para el jefe del movimiento significaba algo distinto pero no menos importante: había logrado, con un golpe maestro, desligarse de la ruina común que amenazaba a todas las formas sobrevivientes de fascismo. Pero el regocijo de un pasado triunfo no puede suplantar indefinidamente a una orientación política precisa. Esa orientación debía darla el jefe del peronismo; de hecho, pese a dos planes quinquenales y una doctrina superadora a la vez de capitalismo y marxismo, nunca fue capaz de dar un concreto criterio que orientara a su movimiento ante los problemas también concretos que la Nación enfrentaba. En este sentido no es acaso superfluo comparar su acción con la de Mitre, el fundador de la Argentina que el peronismo quiso abolir. También Mitre había encontrado estructuras sociales inadecuadas para realizar una transformación como la que él deseaba; no contaba por otra parte con el admirable instrumento con que contó el jefe del peronismo: una máquina estatal poderosa, que debió laboriosamente crear, desde sus más modestas estructuras burocráticas hasta sus mitos inspiradores. Debió transar a cada paso con realidades hostiles; debió admitir en la clase dirigente a gobernadores locales difícilmente discernibles de los que habían sostenido el aborrecido poder de Rosas. A pesar de todo eso, pudo realizar una obra eficaz, pudo dirigir a la Nación en el sentido que se había propuesto. Pero, precisamente, Mitre se había propuesto dirigirla en un sentido determinado. ¿Es decir que el jefe del peronismo no se había propuesto nada parecido? Es la conclusión más fácil, y viene a formular de otra

manera el reproche que le formularon más de una vez sus adversarios: habilísimo político, el jefe del peronismo no era en absoluto, como se dice, un estadista. Pero si el fundador del peronismo ante una situación riquísima en posibilidades buscó ante todo la manera de salir del paso, sin intentar siquiera ver en el proceso que había desencadenado otra cosa que una forma de soborno sólo distinguible por su magnitud de la compra de un caudillo pueblerino, si eso era así, no era porque su ideario político se moviese al ras de una realidad que él era incapaz de abarcar en su conjunto. Por el contrario, su ideario político permanecía totalmente ajeno a esa realidad; seguía siendo, pese a todos los desengaños, el fascismo. Capaz de advertir qué había hecho del fascismo, tal como se había practicado en la Argentina, una corriente política incompatible con la Nación, creyó todavía posible introducirla subrepticiamente y en forma sabiamente dosada. En este sentido logró cosas admirables (logró, tras de diez años de dictadura, ser creído por muchos cuando consideró y rechazó la posibilidad de transformarse en dictador). A estos méritos estrictamente limitados a la habilidad táctica, el fascismo no agregaba sustancialmente nada; era utilizado por el jefe del peronismo para justificar ante sí mismo las actitudes que urgentes necesidades tácticas le obligaban a asumir. Así, la consigna de mantener la industrialización era por una parte necesidad de no desmantelar el feudo electoral del gran Buenos Aires, por la otra, aplicación local de la política autárquica, impuesta en todas partes por la crisis de 1929, y que el fascismo, haciendo de necesidad virtud, había presentado como un aspecto prodigiosamente original de su Nuevo Orden. Lo importante era que la consideración "doctrinaria" de inspiración fascista no ofrecía solución ninguna a los problemas que la industrialización planteaba; al revés, ocultaba esos problemas, al proponer una indiscriminada protección de toda industria (que era, por otra parte, la política que convenía a los inmediatos intereses tác-

ticos del jefe del movimiento). En este caso el influjo del fascismo era dañoso; lo más frecuente es que se caracterizase por una inoportunidad que conducía a la total ineficacia. Así, a los ojos del jefe del movimiento, su política obrera podía todavía seguir siendo un medio de unificar a la Nación con vistas a esa guerra que es como el horizonte último de todo programa fascista; este misericordioso autoengaño no alcanzaba a dar sentido ninguno preciso a su acción en este campo, y le era necesario guiarse por un examen de sus inmediatas conveniencias políticas, no iluminado por ninguna otra consideración menos estrecha. Del mismo modo podía creer que su cotidiana creación de nuevas instituciones y centros de adoctrinamiento estaba organizando la Nación; de hecho estaba desorganizando su movimiento: en la hora final se advirtió que, si no le faltaba vigor ni savia popular, esa savia no corría por las secas estructuras del Partido que encuadraba a millones de empleados públicos dispuestos a gozar del espectáculo de la caída de un poderoso. Así, el jefe del peronismo se redimía cotidianamente ante sí mismo evocando un ideal político cada vez más descarnado, cada vez más ajeno a la concreta política tal como se ejercía en la Argentina. Debido a ese hiato entre orientación política y práctica política, la búsqueda de expedientes se transformó en segunda naturaleza (el mismo peronismo era acaso a sus ojos un vasto expediente para salir del paso), y prosiguió aún cuando el paso estaba expedito, cuando alrededor del gobierno se había formado una red de intereses que sólo deseaba gozar sin sobresaltos de la adquirida prosperidad, cuando se imponía, como se dice, la consolidación del régimen. Aun entonces fue preciso disimular el vacío interior con nuevos y absurdos conflictos; tanto virtuosismo político, transformado de medio en fin, hecho cosa tan abstracta como el abstracto ideal con el que convivía, condujo a un derrumbe que muchos observadores habían juzgado, no sin perspicacia, en extremo improbable.

Así la historia del peronismo no necesita ser la historia de una desvanecida oportunidad revolucionaria para ser en efecto la de una oportunidad perdida. Sin duda, la Argentina de 1945, la energía optimista de una nación en ascenso podían haberse empleado en forma menos absurda que en mantener un sistema político creado sin otra finalidad que durar mientras se pudiese. Pero si en efecto el peronismo no tuvo otra finalidad ello se debe a su culpa original: su nacimiento de una tentativa fascista. Ese origen impidió una alianza entre todos los grupos ascendentes en la sociedad argentina, a los que nada sustancial oponía y que sin embargo chocaron decisivamente en 1945; ese origen privó así al movimiento de una parte de lo que podían haber sido sus cuadros, lo obligó a buscarlos entre reaccionarios y gentes atraídas sin íntima convicción y por lo tanto interesadas tan sólo en su prosperidad personal. Pero lo privó todavía de algo más importante: de toda orientación válida y precisa. Su fundador, ante la experiencia de los hechos, elaboró lo que alberdianamente podríamos llamar el fascismo posible, estableció la máxima dosis de fascismo que la Argentina de la segunda posguerra era capaz de soportar. Esa hazaña de política práctica no debe hacer olvidar sus insuficiencias en un plano menos pedestre: si la alberdiana república posible tenía otros méritos aparte del adecuarse al credo político en boga (ante todo el de fomentar y encauzar una segunda colonización capitalista del país, que Alberdi juzga muy juiciosamente indispensable), el fascismo no tenía en cambio otro mérito que el de haber sido el sistema de referencia sobre el cual había formado su ideología política el talentoso oficial del Ejército del período conservador, destinado a dar su nombre al período siguiente. En este sentido, y pese a sus menudas infidelidades cotidianas, el jefe del peronismo no era sino demasiado fiel a su pasado. Pero ese pa-

sado no era tan sólo suyo, era a su modo un lazo de unión con la Argentina anterior a 1943. Las insuficiencias del peronismo son entonces trasunto en un plano distinto de las insuficiencias en la actitud política del grupo dirigente que, ante la crisis de la democracia en el país y en el mundo, creyó hallar la solución ya preparada en el fascismo. Y las no menores insuficiencias de los que, frente a la oleada fascista, supieron tan sólo apegarse a cualquier pasado...

No sé si es posible extraer una moraleja de esta historia melancólica. Se ha dicho que de ella puede obtenerse una enseñanza moral: que la mera habilidad no basta. La enseñanza es evidente, pero no sé si es propiamente moral. Porque el peronismo no eligió la mera habilidad, se vio acorralado en ella por insuficiencias que no eran tan sólo suyas. Su fracaso es a la vez el fracaso de la clase política argentina, surgida al derrumbarse la experiencia radical, con la que terminó el proceso iniciado en 1853, el de construcción de la república verdadera. En un momento las costumbres intelectuales de ese grupo pudieron resumirse bajo la cifra del fascismo; bajo esa forma contribuyeron con singular eficacia a frustrar la experiencia comenzada en 1945. Pero no es ésa su única forma posible, y aun bajo esa forma su culpa principal no era la de proponer su orden político sin duda perverso, cuya perversidad era sin embargo anulada en la Argentina por la ineficacia. Su culpa fue la de pretender llenar un hueco que no llenaban, de dar una orientación que no daban. Y no es impensable que, en cuanto solución que nada resuelve, tenga el fascismo herederos, es probable que los tenga muy influyentes. Porque hallar una solución válida, atenta a la vez a los concretos problemas de la Argentina y a su situación dentro del mundo es hoy mucho menos fácil que hace cien años, cuando Europa daba una orientación aún unívoca, y misericordiosas circunstancias quisieron que fuese a la vez acorde con lo que el país en efecto necesitaba. Mientras tanto, y si del fracaso peronista es impres-

cindible sacar una moraleja, acaso ésta no sea inútil en estas horas confusas: el peronismo fue sin duda fruto de muchas cosas, pero si fue un fruto tan amargo y tan estéril ello se debió acaso ante todo a cierta no siempre involuntaria falta de lucidez con que los que dirigieron la Argentina antes del peronismo y durante el peronismo se enfrentaron con su país.

El frondizismo en el espejo de la historia

He aquí que el país ha tomado un camino, o más bien alguien lo ha tomado por él, en un compromiso no fácilmente revocable. El que lo tomó puede ser suave o brutalmente apartado del poder; no tenemos derecho a esperar razonablemente que quienes lo aparten de él cambien el rumbo que acaba de adoptarse. El camino que se ha tomado lleva a incorporar a la Argentina al mundo del presente; o más exactamente a la porción del mundo presente que le ha tocado en suerte, y ponerla a la altura del tiempo buscando, en condiciones en que no es posible regatear el precio, el auxilio del capital que ayer se llamaba imperialista y hoy no hay ningún motivo para llamar de otro modo.

Se trata, entonces, de utilizar estructuras que se renuncia *in limine* a cambiar, sin esquivar —antes, aceptando— el riesgo de ser utilizados por ellas. La elección es total, sin titubeos ni medias tintas; ese extremismo poco dispuesto a transacciones es lo único que queda de un estilo que fue revolucionario.

Esta toma de posición puede ser indignante; no tiene nada de sorprendente. Nace sin duda de una situación económica que no podría trasformarse en sentido revolucionario sin un

esfuerzo que sería peligroso solicitar del país. Pero esa peligrosidad se debe ante todo a la situación política: para que una línea económica distinta hubiese sido posible habría sido necesario que el "gran triunfo popular del 23 de febrero" hubiese sido en efecto un gran triunfo popular, y no una obra maestra cuyo mérito mayor es haber llevado al plano de la política de masas una maniobra que la Argentina oligárquica conoció de sobra: la doble maniobra extorsiva, sobre el gobierno impopular y la oposición perseguida, que alcanzó éxito en 1890-92 y de nuevo en 1930-32. Una maniobra de este tipo permite alcanzar el gobierno, pero obliga a utilizarlo con sabia prudencia, para buscar reemplazo al insuficiente apoyo político en un apoyo no gratuito de ciertas fuerzas económicas del país y de fuera de él. En 1932 el general Justo se aseguró sólidamente el poder organizando la explotación política y económica de la crisis en beneficio de ciertos grupos muy claramente identificables. Hoy la seguridad política proviene de un apoyo a la vez similar y de sentido opuesto: no se trata de utilizar el retroceso, sino el progreso nacional, por eso, al margen de la concreta coyuntura política, es menos inadecuado comparar al actual poder con el de Roca que con el de Justo.

Nada parece, entonces, más previsible, menos sorprendente que el actual rumbo nacional. En todo caso lo que tiene de sorprendente es ser el desenlace de una empresa política que no se fatigó de proclamarse revolucionaria. En este sentido es, sí, desconcertante, y lo más desconcertante es acaso la demasiado fácil aceptación que el cambio de rumbo ha logrado en un partido acostumbrado a denunciar no sólo las formas abiertas y tradicionales, sino las más hábilmente insidiosas, de penetración imperialista, en un país conquistado sucesivamente por dos movimientos políticos de signo antiimperialista. Sin duda, los que han votado por una suerte de general Cárdenas y encuentran que han elegido a una suerte de general Roca no dejan de protestar por la descortesía de no habérseles avisado

con la debida anticipación. Pero más que la concreta política adoptada es la desenvoltura con que se los ha utilizado y burlado lo que los indigna: también ellos suelen admitir que la política seguida es la única posible. He aquí, entonces, un curso de hechos que merece que le concedamos alguna atención: un movimiento que se proclamaba revolucionario puede renegar totalmente de esa vocación sin provocar reacción sustancial alguna. Esta actitud es posible juzgarla moralmente, y condenarla; lo que ahora nos importa examinar es otra cosa: si la realidad nacional y la coyuntura universal se adapta tan bien a un régimen conservador, si el movimiento en el poder está tan dispuesto a ejercerlo, si el país lo recibe con una apacible resignación muy parecida a la aceptación franca, ¿cómo es posible que hace dos años, hace seis meses, el movimiento ofreciera y el país aceptase soluciones revolucionarias? La explicación más frecuente tiene dos defectos: pretende ser ante todo una forma de vilipendio y es por añadidura perfectamente falsa. Esa explicación consiste en adscribir las anteriores posiciones revolucionarias a una intención demagógicamente electoralista. Para sostener esto es preciso ignorar que el programa intransigente impuesto al radicalismo fue por largos años exactamente lo contrario de lo que hubiera deseado la clientela electoral que quedaba a ese partido; si sin embargo se lo mantuvo no fue porque satisficiese a una masa de electores, sino porque lo juzgaban bueno algunos dirigentes que creían que los cambios radicales en él propuestos eran en efecto imprescindibles. Sin duda, confiaban en que esa opinión estaba destinada a ser finalmente compartida por la mayoría destinada a beneficiarse con los cambios, pero esa confianza era consecuencia y no causa de su fe en la bondad del programa. Es preciso olvidar que, por añadidura, la única elección victoriosa realizada por la intransigencia se caracterizó por la extrema moderación de su propaganda electoral: llevada a cabo cuando estaba ya perdida la fe en las posibilidades de atrac-

ción de un programa revolucionario, no fue sino el prólogo a la actual acción de gobierno.

Esa actitud revolucionaria, que no nació de la búsqueda de éxito inmediato, que era a la vez desinteresada y escasamente profunda, es lo que se querría entender. Pero 1958 no es la única fecha que propone este problema a quienes quieran comprender de veras lo que ha pasado en el país. Todas las grandes modernizaciones de la estructura nacional, modernizaciones esencialmente conservadoras en cuanto hicieron posible la supervivencia de rasgos básicos extremadamente arcaicos, surgieron de actitudes que se quisieron revolucionarias. Así ocurrió en 1880: en la prehistoria ideológica del roquismo caben casi todas las tentativas de negación del orden remozado en 1852. Pero, precisamente, la historia del roquismo es casi lo opuesto de su prehistoria: cuando Martínez Estrada nos recuerda que José Hernández concluyó sus días en el más plácido conformismo, sus críticos creen necesario llamar al psicoanálisis en auxilio del materialismo dialéctico para revelar qué abismos de abyección se ponen de manifiesto en este importuno recuerdo; acaso hacen mal en dejar de lado que cualesquiera sean las razones que mueven a Martínez Estrada a recordarlo, el hecho es verdadero. El ejemplo de 1880 no es el único ni el más claro: la corriente revolucionaria que confluye en el roquismo es confusa y contradictoria: en ella van juntos el federalismo autóctono y un populismo que es el último y apagado avatar del romanticismo político y social de Francia; y todo eso es lo bastante inarticulado para ser sumergido sin resistencia bajo el alud positivista.

1852 proporciona, en cambio, un ejemplo mucho más claro. En nuestros manuales, y no sólo en ellos, se nos dice que en esa fecha comienza la realización de un programa articulado en 1837. Sin embargo no es fácil descubrir un acuerdo entre los hechos que siguen a Caseros y el programa de 1837. ¿Involución? En todo caso esa involución se da en un largo y

sinuoso proceso en cuyo punto de partida podremos encontrar ya, a poco que pongamos alguna atención, los gérmenes de lo que en la realidad elaborada a partir de 1852 niega las esperanzas de 1837. Es esa involución y ese proceso lo que se quisiera revisar en estas páginas.

Acaso ningún grupo ideológico argentino se presentó al país con tan firme y arrogante seguridad de ofrecer el punto de partida para una *renovatio ab imis*, para una ruptura total y revolucionaria con el pasado como el de 1837. Es esta seguridad con que los hombres de 1837 opusieron sus propias opiniones al pasado con todos sus prestigios, al presente con todos sus modos concretos de presión e imposición, lo que hace que —al margen de las concretas ideas que sustentase esta generación— fuese en efecto revolucionaria. Esa actitud revolucionaria iba además acompañada de la presencia de ciertos contenidos ideológicos que también lo eran, y en los que se gusta insistir. Sólo que al examinarlos hay que proceder con cierta cautela: es sabido que los versículos arrebatados del *Dogma socialista* esconden mal una heterogeneidad de posiciones que sólo pueden convivir plácidamente gracias a una cierta inconsecuencia del pensamiento; podemos, si queremos, poner a este texto apodíctico y confuso bajo el signo de Saint Simon, de Lamennais o de Mazzini, pero tampoco sería ilícito evocar las sombras menos agitadas de Cousin y de Royer-Collard. Esto es así porque el *Dogma* quiere muy declaradamente ser el resumen y a la vez la aplicación a una cierta circunstancia concreta de las soluciones propuestas por el pensamiento político y social europeo en un momento de su desarrollo; este propósito sólo es concebible si se admite, como admitieron los hombres de 1837, que ese pensamiento formaba un todo coherente, un conjunto de descubrimientos teóricos y aplicaciones prácticas que permitían hablar del "estado actual de la ciencia política" con las mismas connotaciones que implica el referirse, por ejemplo, al "estado actual de la

ciencia física"; de esta manera Leroux y Thiers pueden ser vistos como colaboradores en una empresa de indagación doctrinaria, no como defensores de posiciones teóricas que implicaban a la vez muy concretas opciones prácticas. Sin duda, pero no por ello dejaba de verse ese pensamiento europeo según una cierta perspectiva que no era la de los conservadores europeos: Echeverría podía creer muy sinceramente que Leroux era el más importante pensador de su tiempo, destinado a dejar su huella tanto como en la política en la especulación filosófica; esa creencia era inseparable del apoyo a las soluciones que Leroux proponía. No hay en esto nada de sorprendente: toda posición revolucionaria exige una perspectiva nueva de la cultura en su conjunto, con sus condenas, sus revaluaciones y sus tentativas, más o menos felices, de salvación. Lo que tiene de notable la actitud de los hombres de 1837 es que en ellos la revisión de la perspectiva cultural no surge como consecuencia de la previa adopción de una concepción revolucionaria: por el contrario, las conclusiones revolucionarias son aceptadas como parte de una enciclopedia del saber político, admitida del todo al margen de cualquier deseo excesivamente vehemente de ver abolido el orden social vigente en favor de una libre comunidad humana basada en la asociación. Las conclusiones no son, entonces, sino la adhesión a ciertas posiciones culturalmente prestigiosas (y no importa aquí si ese prestigio de que se las rodea en el Río de la Plata se deba a la casualidad, a un equívoco, o a la lectura empedernida de periódicos que presentan una imagen parcial del pensamiento europeo). Esa adhesión a ciertas ideas está por otra parte curiosamente desprovista de consecuencias concretas: es característico, por ejemplo, que la opinión que da el *Dogma* en cuanto a soberanía popular y sufragio sea la de los *doctrinaires*, generalmente despreciados, y que al ocuparse de la igualdad, tras de un largo *excursus* sobre la igualdad ante la ley, se limite a mencionar, sin adhesión alguna y en forma extremadamente fría y

ambigua, una fórmula de Saint-Simon vinculada con la igualdad social.

Entonces la actitud revolucionaria que caracteriza al grupo de 1837 no se vincula con la adhesión a ciertas soluciones concretas de sentido revolucionario: la doctrina o conjunto de doctrinas que hay en el *Dogma* no es revolucionaria en el sentido en que lo eran las doctrinas europeas admiradas por su autor; no se trata ahora de profetizar y acercar el nacimiento de una sociedad nueva, con nuevas jerarquías, y una nueva cultura en la que se expresase, y una nueva religión a ella adecuada, tal como las habían planeado y propuesto, cada uno a su manera, Saint-Simon o Mazzini, Lamennais o Leroux. Pero no por eso esa actitud revolucionaria deja de existir, no por eso los hombres que la sustentan dejan de creerla legítima y fundada; la ruptura con el pasado, que debía ir más allá de la mera oposición política contra ciertos regímenes heredados del pasado, no deja de ser proclamada con la máxima energía.

Y proclamada no sin fundamento. Esa ruptura existe, por lo menos en el plano ideológico-cultural, que para el grupo de 1837 tiene importancia decisiva: ¿no comenzó ese grupo por actuar como innovador cultural e ideológico, y sólo por las urgencias de una situación crítica eligió otro campo de acción? Esta ruptura con toda la tradición ideológica no implica tan sólo un cambio de teorías, sino algo más radical: incluye una comprensión distinta de las relaciones entre teoría y acción, tal como es elaborada filosóficamente por el ochocientos europeo y orienta la acción política y social de esa misma época. Que toda teoría lo es de una *praxis* determinada, no sólo en el sentido de que su legitimidad se prueba al volcarse eficazmente en ella, sino en el sentido aun más radical de que debe su origen a ella, es algo que los hombres de 1837 no vieron demasiado nítidamente. Sus maestros franceses, ubicados algo marginalmente frente a esa gran revolución del pensamiento europeo, pudieron enseñarles que una cierta imagen de la

realidad y una cierta situación histórica son términos correlativos; pero en esa unidad era todavía la imagen teórica el elemento dominante: así en Saint-Simon el paso de las eras orgánicas a las críticas comenzaba con el derrumbe de la *creencia*, que traía consigo un derrumbe de la ética en ella fundada, y tras de este último la crisis que dejaba su huella en todas las obras de los hombres. El grupo de 1837 no fue en este aspecto más allá de sus maestros, y por razones que —como se verá en seguida— eran en este caso más hondas que la mera adhesión a una opinión prestigiosa. En todo caso, y aun limitado en su planteo teórico, este descubrimiento significó la aparición de un nuevo estilo político, que parecía unir, a los ojos de quienes no lo compartían, un doctrinarismo cerrado y fanático a un oportunismo excesivamente libre de escrúpulos. Gracias a este descubrimiento era posible la adhesión total y abnegada a un credo reconocidamente provisional, redactado en muchos de sus pasajes esenciales con la meticulosa vacuidad que suelen emplear las cancillerías al tocar puntos espinosos. Esa actitud, que a través de la adhesión a un planteo concreto venía a otorgarla a una corriente de acción que ese planteo inauguraba y por la cual era validado, anuncia ya al revolucionario moderno: porque no la advirtieron, o porque no podrían comprenderla, los rivales políticos del grupo de 1837 pudieron acusarlo de inconsecuencia y de hipocresía, cuando la publicidad misma con que llevó a cabo sus no infrecuentes cambios de frente era el fruto de una conciencia que se sentía al respecto perfectamente en orden. Esa imagen nueva abría nuevas posibilidades a la acción política; era una inesperada liberación de viejas trabas, y como tal la entendieron los hombres de 1837. Pero no está exenta de riesgos, que ellos no adivinaron. Una complicada casuística intenta guiar al revolucionario de hoy por el áureo camino que, por hipótesis, existe necesariamente entre los dos abismos de dogmatismo y oportunismo; al parecer esa casuística es, pese a toda su rique-

za, insuficientemente orientadora, puesto que ha nacido y se la utiliza sobre todo para castigar las desviaciones demasiado frecuentes a sus sabias enseñanzas. Toda esta problemática los hombres de 1837 no la adivinaron siquiera: se lanzaron a usar con confiado entusiasmo el instrumento que la madurez de los tiempos les proporcionaba.

Si toda teoría política debe ser valorada a la luz de su eficacia en el plano de la acción, los hombres de 1837 tienen un criterio más preciso para valorar esa teoría a la luz de la circunstancia argentina: la exigencia de unidad. Esa unidad puede expresarse en lenguaje saintsimoniano o mazziniano; alude sin embargo a la más inmediata experiencia política argentina, y entendida en ese contexto nos da la clave para penetrar en el núcleo mismo del pensamiento político del grupo. La unidad a que se alude allí es la que se ha perdido en la Argentina: la del grupo que ha comenzado a ser dirigente en 1810 y ha dejado de serlo hacia 1829. Este grupo se ha dividido bien pronto, y porque se ha dividido ha sucumbido. Porque se ha dividido y porque, por indiscreta adhesión a doctrinas sin medida común con la realidad local, ha incurrido en una inoportuna evocación de las fuerzas dormidas en las masas populares (¿haber entregado "el sufragio y la lanza al proletario" no es el error que el partido unitario no ha terminado aún de expiar?). Se trata ahora, para el grupo que fue dirigente, de unirse y reconquistar la perdida hegemonía. El *Dogma* no es entonces la proclama revolucionaria de un grupo desposeído que frente a un orden tradicional levanta la imagen ideal de un orden nuevo; es por el contrario la autocrítica de un grupo dirigente que advierte que está dejando de serlo y busca la causa de un proceso que le importa detener.

Este propósito orienta la marcha del pensamiento que el *Dogma* registra, y por debajo de la concreta línea política que en él se propone condiciona la imagen misma de la realidad que ese texto lleva implícita. El grupo que debe dominar polí-

tica y socialmente se autodefine como grupo ilustrado; ningún interés concreto, ninguna precisa vinculación con ciertas posiciones sociales o económicas lo mueve, sino su fidelidad a esa vocación iluminada. Es precisamente esa vocación la que le da derecho a exigir el papel de guía y maestro de un entero pueblo y la que, fuera de éste, le fija alianzas y hostilidades. Existe entonces todo un grupo de hombres que abarca al mundo todo y finca su comunidad en la común posesión de una cultura, y su pretensión de dirigir la historia en esa posesión misma y su disposición a enseñar a toda una humanidad que debe aceptar sumisamente el papel discipular que por naturaleza le corresponde.

Pero esta función magistral sólo es concebible si se admite que las construcciones teóricas, las ideologías y la cultura toda no son creaciones surgidas libremente en un clima histórico determinado, que son, por el contrario, una intemporal constelación que cabe recibir pasivamente, sin volverla a crear en el acto de apropiarla. Si, en otras palabras, se renuncia a la renovación que implicaba el descubrimiento de relaciones nuevas entre teoría y acción en favor de la vieja imagen de una verdad que desciende de lo alto, en la que la revelación divina ha sido ahora reemplazada con la opinión de los publicistas más adelantados. La libertad que nace de ese descubrimiento queda entonces reservada al grupo director, para quien es, en cambio, válida la nueva imagen y son lícitos los modos de conducta que ella autoriza.

He aquí, entonces, una imagen aristocrática del quehacer político, que invalida por lo menos parcialmente la actitud revolucionaria misma, ya que sólo puede justificar la asignación de un papel histórico pasivo a las masas populares restaurando —así sea parcialmente— la imagen tradicional cuyo repudio estaba, como hemos visto, en la raíz misma de la actitud revolucionaria del grupo de 1837. La ambigüedad de esa actitud, heredada de sus inspiradores franceses (piénsese, por

ejemplo, en la doble dirección de sabios e industriales que Saint-Simon propone para la sociedad futura, y oculta mal la falta de elección frente a una alternativa sin embargo ineludible), es confirmada por la concreta inspiración que los hombres de 1837 reciben de la circunstancia en la que actúan y el papel que en ella se asignan. En lo que toca a los contenidos revolucionarios del *Dogma* esta limitación es, sin embargo, menos determinante de lo que podría creerse. Testimonio de la búsqueda de una perdida hegemonía política por parte de un grupo que se define a sí mismo en términos culturales y no económicos, el *Dogma* no necesita rehuir las tomas de posición más audaces en el plano social; su escaso contacto con la realidad sobre la cual están destinadas a actuar las priva de eficacia y por lo tanto de peligrosidad. Sólo que la existencia de contenidos revolucionarios sólo es admitida en la medida justa de esa ineficacia real: la indiferencia frente al contenido concreto del Dogma de Mayo (que fue lúcidamente advertida por más de uno de sus secuaces; pienso, por ejemplo, en el testimonio particularmente claro de Benjamín Villafañe), no nace tan sólo de una imagen de la teoría política que la une tan estrechamente a la acción que corre riesgo de subordinarla a ésta; surge, por añadidura, de la irrelevancia que necesariamente caracterizaba a toda teoría política frente a una realidad que le es sustancialmente extraña: en estas condiciones la existencia de un sistema de doctrina viene a cumplir una exigencia —si así puede decirse— formal, corolario de la exigencia unitaria misma; puesto que las cosas están así, lo menos importante es el contenido de ese cuerpo doctrinario...

De esta manera la existencia de una profesión de fe, algunos de cuyos artículos suponían la abolición del orden social vigente, no condicionó en manera alguna el modo de acción política que adoptó del grupo de 1837. Sin duda, los voceros del grupo se revelaron por anticipado ante la posibilidad de ser juzgados por esa acción; impuesta por circunstancias no pre-

vistas ni deseadas, vino a contradecir en más de un punto la que habían proyectado los hombres de 1837 al comenzar su prédica política. Sólo que la que, en 1846, Echeverría asigna a ese momento inicial no es menos ajena a todo planteo revolucionario; sin duda su propósito último es "alcanzar sin sangre, en el momento oportuno, una revolución radical y regeneradora", pero el camino para lograrla era el utilizar el influjo de "gran número de hacendados ricos y de prestigio en la campaña de Buenos Aires", "jóvenes influyentes en las provincias interiores" y oficiales jóvenes del ejército rosista; por este camino lo que había de alcanzarse era, cualquiera fuese el nombre que se le asignara, una reorientación del grupo política y socialmente hegemónico que cambiase el rumbo de la Nación.

Pero tal es, en sus líneas esenciales, lo que intentaron los hombres de 1837 en la gran crisis que hasta 1842 sacudió al poder rosista. Apenas entrados en la acción, los que integraban el grupo lograron dirigir, por lo menos en sus líneas generales, la política antirrosista a lo largo de toda la crisis; a ellos se deben tanto la alianza francesa como la Liga del Norte, y de ambas hazañas, de oportunidad muy discutible, conservaron por largos años un intenso orgullo. Esas alianzas no eran sino la utilización de estructuras de poder ya existentes en beneficio de un cambio político deseado, y limitado precisamente por los medios que se utilizaban para alcanzarlo. Pero si el camino empleado implicaba olvidar las exigencias revolucionarias inscriptas en el *Dogma*, no implicaba negarlas, y por otra parte la nueva táctica no suponía negación de la exigencia fundamental del *Dogma*, la exigencia unitaria. Por el contrario, la alianza francesa es a los ojos de Alberdi, su principal defensor, el esfuerzo de una minoría por transformarse en mayoría evocando en su auxilio fuerzas nuevas, ajenas a las que tradicionalmente se combatían en el escenario rioplatense; es, entonces, y muy conscientemente, el medio por el que se busca retomar esa hegemonía perdida a través de la división del

grupo dirigente. La Liga del Norte realiza aún más claramente esa exigencia unitaria, en cuanto reúne a grupos representativos de ambos partidos rivales, y los pone al servicio de los planes de la Nueva Generación. Toda esa vasta alianza podía entonces ser interpretada a la luz de la oposición entre ilustración e ignorancia: la monarquía de Luis Felipe aparecía en ese contexto como una suerte de brazo secular al servicio de la causa ilustrada, que encontraba paladines algo inesperados en la caterva de caudillos federales, encabezados por el zarco Brizuela y del todo dispuestos a firmar proclamas inspiradas en las ideas de la Nueva Generación. Mientras esta coalición pareció cercana a lograr la victoria no existía estímulo alguno para revisar los planteos políticos que habían llevado a los hombres de 1837 a contribuir decisivamente a su constitución y que utilizaban todavía para explicarla e interpretarla. Ese estímulo vino, por el contrario, de la derrota. El rey Luis Felipe pactó con Rosas, abandonando sobriamente a su destino a sus demasiado candorosos aliados, sorprendidos de que cesase su interés por la causa de la cultura en este rincón agreste. Más constantes pero no más afortunados en la defensa de la ilustración se mostraron los caudillos federales alzados, y aun, en su estilo desesperantemente sinuoso, don Fructuoso Rivera. He aquí una serie de hechos merecedores de que se reflexionase sobre ellos: en vista del desenlace parecía ya imposible inscribirlos bajo el signo de la lucha entre la luz y la tiniebla: todo un juego mucho más complejo, juego de ideas y de tradiciones tanto como de intereses, comenzaba a ser columbrado; la realidad con la que trabajaban los hombres de 1837 se revelaba no como una masa plástica y pasiva, cuya máxima autonomía era alcanzada en una resistencia obstinada pero también ella desprovista de toda posibilidad creadora: era un espontáneo y libre equilibrio, siempre cambiante, de energías que buscaban su cauce. A partir de 1845 los hombres de 1837 reanudan, bajo ese nuevo signo, sus tentativas de interpretar

la realidad argentina. La nueva versión del *Dogma Socialista*, de 1846, incluye en la *Ojeada retrospectiva* una tentativa de interpretar históricamente, en ese juego complejo, la trayectoria anterior del movimiento inaugurado con los planteos programáticos de 1837. Sin duda, el lector de hoy no advierte cambio importante de orientación entre ese examen y el texto en nueve años anterior: Echeverría sí pareció advertirlo, puesto que partía ahora de la base del todo nueva de que el grupo ilustrado nada podía hacer por sí mismo: su última esperanza reposaba en los caudillos federales, en una nueva coalición más sólida y poderosa que la del Norte. Un año antes, en el *Facundo*, Sarmiento había propuesto una versión herética (o, para emplear el lenguaje de Echeverría, poco dogmática) del contraste entre luz y tinieblas; en ella la lucha entre dos principios se transformaba en lucha entre dos modos de vida, dos tradiciones históricas. Pero la tercera parte del *Facundo*, yendo más allá de esa encarnación de las abstracciones del *Dogma*, trae un programa concreto destinado a evocar en su apoyo las fuerzas mismas de la Argentina bárbara, que tras de prosperar bajo el orden rígido de la federación rosista comienzan a encontrar que ese orden mismo traba su desarrollo futuro. En este nuevo contexto la oposición de civilización y barbarie pierde buena parte de su sentido: al proyectar el futuro de su país, Sarmiento renuncia a valorar las fuerzas que en él actúan, precisamente porque aspira a utilizar a todas ellas. Todavía en *Facundo* esas fuerzas ya existentes deben ser integradas en un orden que sin duda las respeta e interpreta en sus aspiraciones, pero las orienta en sentido nuevo. En otro texto característico de estos años de derrota, Alberdi va aún más allá. Su *República Argentina 37 años después de su revolución* es un balance, inesperadamente positivo, de la experiencia atravesada por el país a partir de 1810. El optimismo del que hace ostentación Alberdi oculta mal un pesimismo radical: al subrayar los aspectos positivos de la Argentina pre-

sente viene a proponer consuelos frente a la demasiado probada impotencia para trasformarla.

De este modo la experiencia revela la autonomía de lo real, las fuerzas que en él se desencadenan; lo real deja de ser la contrapartida negativa del único foco de positividad: el grupo ilustrado que lo plasma venciendo su ciega resistencia. Surge de aquí la posibilidad de una imagen nueva de la tarea revolucionaria, desprovista de las limitaciones que tenía la aceptada por el grupo de 1837 al constituirse como tal: el revolucionario debiera ahora ser el intérprete de una realidad que permanece muda para sí misma, el que la declara y a la vez la transforma según ciertas líneas de fuerza que están inscriptas en ella. Pero para que esto fuese posible habría sido necesario elegir dentro de esa realidad, unir su destino al de alguna de las fuerzas que en ella juegan. Los hombres de 1837 se niegan a ello: las aceptan ahora a todas por las mismas razones que tuvieron antes para negarlas en bloque; lo que pudo ser el nacimiento de una más radical postura revolucionaria es en cambio la renuncia a toda pretensión revolucionaria. El nuevo papel del político no es el del creador de una realidad nueva, es el del *honnête courtier* entre las fuerzas contrastantes en la realidad tal como es; buscando alcanzar nuevos equilibrios entre ellas el político, por encima del pesimismo radical de Alberdi, pero aceptando su punto de partida de la esencial inmutabilidad de lo real, puede aún justificar su existencia.

De este modo el proyecto revolucionario de 1837 parece ser relegado en beneficio de una actitud sistemáticamente oportunista. Pero llegó un momento en que ya no cupo siquiera el oportunismo, porque no quedó ya un credo revolucionario por traicionar. Esta crisis total, largamente preparada, fue consecuencia de la trayectoria del movimiento revolucionario europeo, y en especial del francés, a partir de 1848. En la revolución de febrero pusieron los hombres de 1837 sus mayores esperanzas: al desembocar en una lucha social presentada por

toda la prensa rioplatense —la de Montevideo a la vez que la de Buenos Aires— como una rebelión de los infiernos, venía a enseñar que un movimiento revolucionario surgido de la espontaneidad misma de ciertas fuerzas oprimidas por el orden social vigente podía no ser imposible, pero era totalmente indeseable. Esta moraleja era implícitamente aceptada por los mismos publicistas que el grupo de 1837 tenía por revolucionarios: lejos de identificarse con los obreros alzados en junio, preferían mostrar en su sublevación la consecuencia sin duda condenable pero necesaria de un régimen social inicuo: la condena no debía recaer entonces sobre los promotores del alzamiento, sino sobre todo ese orden del cual era consecuencia. Desde el Río de la Plata el deslinde de responsabilidades importaba menos que la unanimidad en condenar la tentativa revolucionaria, previamente condenada por su propio fracaso. La experiencia francesa no haría sino confirmar a los hombres de 1837 en su desconfianza por la revolución como obra espontánea de todo un pueblo; los confirmaba en las reservas que habían formulado para su propio país fundándolas en su escasa experiencia política, al resultar estas reservas válidas allí donde la experiencia política no escaseaba: también en Francia la liberación de las energías populares se traducía en una explosión de barbarie incontrolada. Pero la trayectoria de la revolución de Francia enseñaba todavía algo más: que un régimen consecuentemente liberal, en un clima de revisión de estructuras, era un factor de aceleración de la crisis, que sólo podía resolverse mediante el retorno a formas políticas autoritarias.

El desenlace bonapartista podía ser aceptado o no como positivo; en ambos casos era condenada la república democrática y social. Pero quienes aceptaban la solución de autoritarismo político y paternalismo social que en Francia se había impuesto y buscaban aplicar en la Argentina la lección de los hechos franceses venían a dar un paso más, y decisivo, en el

apartamiento de los proyectos revolucionarios de 1837. Habíamos visto que, en su origen, la actitud de los hombres de 1837 se apoyaba en una concepción de la realidad como pura negatividad destinada a ser domeñada por el proyecto revolucionario; en un segundo momento esa realidad demasiado obstinada en su resistencia era aceptada en bloque, y se renunciaba a toda trasformación revolucionaria de ella, juzgada imposible. Ahora se va más allá: aun si fuese posible, esa transformación sería indeseable; el político que planea la nueva realidad argentina tiene sus mejores aliados en los grupos dominantes, que han tenido la honrosa tarea de mantener al país alejado del caos que implicaría la liberación de las fuerzas en él dormidas; esa tarea sigue siendo imprescindible, y más urgente que nunca durante la reordenación de la estructura nacional.

Estas enseñanzas válidas para la Argentina que el proceso francés parecía imponer fueron explicadas al público argentino por más de un publicista en los años inmediatamente posteriores a la caída de Rosas. Así, Mariano Fragueiro inauguró la crítica contra la impostura de la libertad liberal, no para postular una libertad real, sino para proponer la aceptación de un nuevo autoritarismo. Así, Félix Frías hizo de la defensa del orden social supuestamente amenazado el tema principal de una prédica política doblada de predicación religiosa. Pero más importante que esta aplicación apenas adaptada de verdades francesas es el nuevo programa de acción política que trazó Alberdi en sus *Bases*. Aquí el autoritarismo no era evocado en defensa de un orden social que, muy evidentemente, no estaba amenazado, sino para ser puesto al servicio de un progresismo decidido a apoyarse en los núcleos tradicionalmente dominantes, en las jerarquías políticas y sociales consolidadas en la Argentina durante la era rosista. Esas jerarquías se identificaban con el aparato de compulsión que Rosas había erigido pacientemente, y que era el legado de su régimen. Pero la política de Rosas, que creía necesario evitar todo

cambio en beneficio precisamente de la estabilidad social, es ahora juzgada excesivamente prudente por quienes han sido sus beneficiarios y se sienten ya suficientemente fuertes para una línea de acción más audaz. Esa nueva línea es la que propone Alberdi: es la segunda colonización del país, por hombres a la vez que por capitales europeos. El autoritarismo, encarnado en la república posible, es el símbolo de la aceptación, también en el plano político, del orden vigente en la Argentina antes como después de Caseros. Esa aceptación obliga a Alberdi a renegar fervorosamente de todo un pasado ideológico; esta consecuencia no arredra al autor, que por el contrario reprocha duramente a los amigos que no renuncian totalmente a las ideas antes defendidas en común: Mitre —si hemos de creerle— es un rojo; Sarmiento, un defensor del comunismo, porque encuentra que la pena de muerte es castigo excesivo para el robo de ganado menor. Estabilidad social y quietud política son entonces condiciones ineludibles para alcanzar un progreso económico que encierra, él solo, la clave de la salvación nacional.

Pero en el nuevo proyecto que las *Bases* proponen no todo es ruptura con lo que antes se había afirmado. Al reservar la acción política a los grupos dirigentes, al desconfiar de la espontánea fuerza creadora de lo real, Alberdi no hace sino recoger motivos no desconocidos en 1837. Pero el sentido de esa toma de posición ha variado: en 1837, frente a un foco de positividad luminar destinada a triunfar sobre las tinieblas circundantes, se creía hallar la total pasividad de lo real. Ahora se ha descubierto que esa realidad es capaz de acción, que no acata la soberanía de la luz sobre la tiniebla: el foco de positividad ha sido apagado, aun para la esperanza de quienes habían luchado por su triunfo. Apagado, pero no reemplazado: se ha descubierto que lo real no es tan sólo resistencia, pero no deja de ser una ciega mecánica de acciones y reacciones que carece por completo de sentido. Una revolución en el se-

no de una realidad así concebida sería ella también carente de sentido: sólo habría de traducirse en una consolidación del orden de las tinieblas, a través de la lucha que en su seno desencadena. En estas condiciones es preciso acatar las jerarquías que ese orden ha elaborado, no porque sean legítimas, sino porque es imposible reemplazarlas por otras que lo sean más: sólo el progreso económico, que esas jerarquías por otra parte favorecen más que los oprimidos por ellas, podrá terminar eficazmente con la realidad odiosa e inescapable en la que Alberdi debe actuar.

De esta manera la revolución ha dejado de ser imposible: pero se la proclama ineficaz. No menos ineficaz es la acción del grupo ilustrado, predicador de un sistema de verdades que debían imponer su fuerza ideal a la realidad rebelde. Lo único eficaz es el grupo realmente dominante, y su único norte es la defensa de sus intereses rectamente comprendidos. Esa doble mutilación de la realidad tiene consecuencias en todo el pensamiento de Alberdi, así en su concepción utilitaria de la cultura y su difusión, según la cual la cultura deja de ser un instrumento de liberación para convertirse en un adiestramiento para colaborar subordinadamente en una empresa que no es preciso entender: es ocioso, afirma Alberdi, enseñar a leer; basta con enseñar a manejar ciertas máquinas.

No todos los hombres que comenzaron a opinar en política bajo el signo del credo de 1837 llevaron sus conclusiones ante la experiencia argentina hasta el punto al que las condujo Alberdi. Otros vivieron permanentemente en una grata confusión entre autoritarismo y liberalismo, entre fe democrática y solidaridad oligárquica. Hubo también quienes buscaron obstinadamente otra salida que no fuese el servicio de las fuerzas que habían pretendido vanamente destruir, y no aceptaron que el juego ciego de esas fuerzas proporcionase el único camino de salvación. Acaso fue Sarmiento quien mejor representó a estos últimos. También para Sarmiento la experiencia re-

volucionaria francesa había sido decisiva, pero no porque su resultado tuviese algo que enseñar a los argentinos: lo era precisamente porque, a partir de ella, Francia y Europa ya no podían dar enseñanza ninguna. En Francia una lucha sin sentido entre izquierdas y derechas había dado la victoria provisional a las derechas; el resultado no tenía nada de envidiable, pero ese resultado condenaba al proceso entero que a él había conducido. En la Argentina la tarea no podía ser recoger o elaborar doctrinas sociales revolucionarias, ni alarmar con revoluciones de ideas a los grupos dominantes. Sin embargo, no era sin más la de constituirse en administradores políticos de los intereses de esos grupos, que no coincidían, como suponía Alberdi, con los del país entero; los cambios radicales seguían siendo necesarios, y, según Sarmiento, seguían siendo posibles. Esos cambios podían resumirse en la creación de una nación socialmente una, mediante la incorporación al ciclo económico de todo el cuerpo nacional. Esto no era posible sin una cierta igualdad social, y sin una constante expansión económica; ambas condiciones, al darse conjuntamente, hacían la grandeza de los Estados Unidos. Pero para Sarmiento el progreso económico y social, que no era exigido en nombre de un ideal revolucionario de justicia, se integraba, como ya no se integraba para Alberdi, en un cierto sentido. Ese sentido venía dado por un cierto ideal cultural que a través del cambio económico debía alcanzarse, y que a la vez era indispensable realizar para que ese mismo cambio económico fuese posible: la creación de una cultura popular, adecuada a las características del nuevo siglo, en el cual el proceso de ascenso de masas tenía una importancia que Sarmiento captaba con admirable lucidez. Ese ideal cultural no era —es necesario subrayarlo— tampoco el revolucionario; Sarmiento creía que esa nueva cultura habría de ser la ya vigente en una sociedad basada en la desigualdad, con sólo algunas simplificaciones destinadas a su más rápida difusión; también para él, como para el Echeverría

de 1837, esa cultura era una constelación de contenidos que podían ser difundidos o apropiados sin variar con ello esencialmente su sentido; el historicismo de Sarmiento encuentra aquí un límite al negar que la cultura sea libre creación de una comunidad de hombres en un momento histórico preciso, en el cual y del cual recibe su validez; esta negación, que va contra los fundamentos mismos de la visión de la realidad que Sarmiento elabora, muestra su fidelidad al credo de 1837 aun en lo que éste tenía de fe aristocrática en la acción de los ilustrados, poseedores de una verdad objetiva y universalmente válida, sobre la realidad rebelde al triunfo de esa verdad.

Pero si ese ideal que Sarmiento elabora sobre el ejemplo de los Estados Unidos no es ni quiere ser revolucionario, sus corolarios no dejan de imponer a la realidad argentina transformaciones muy hondas. El instrumento de que disponía un gobierno para llevar a los hechos concretos ese ideal era el otorgamiento de tierra y escuela para todos. Sarmiento se propone lograr todo eso en la Argentina, y la segunda exigencia le resulta menos inasequible que la primera. La creación de una democracia rural apoyada en la propiedad no se alcanzará nunca: un éxito local explica acaso adecuadamente las razones del fracaso en el plano nacional. Ese éxito es el que alcanza Sarmiento en su defensa de los chacareros de Chivilcoy contra los propietarios de sus tierras. Muchas razones explican que, en este caso, los dueños de tierras hayan sido derrotados: el origen mismo de sus propiedades estaba "manchado de sangre", ya que eran mercedes políticas de Rosas, y el argumento no dejó de ser debidamente explotado a pocos años de la caída del gobernante. Pero el hecho decisivo era la existencia misma de los chacareros de Chivilcoy, que organizaron una resistencia tenaz, en su aldea, en la prensa, en la barra de la legislatura. Así, en este caso, la realidad que era preciso transformar ofrecía los elementos de su transformación. Pero nada de eso ocurría fuera de ese oeste de Buenos Aires, que

era desde fines del siglo anterior la diminuta zona agrícola de la provincia. Sin duda, Sarmiento no iba a vacilar en imponer por la fuerza a los campesinos del resto del país su conversión a la democracia agraria, pero para disponer de esa fuerza necesitaba disponer del favor no gratuito de los dueños de ella, y para lograrlo debía encauzar su esfuerzo de gobernante, no hacia un plan de progreso económico al servicio de un cambio social radical, sino hacia el logro de un progreso económico que consolidase las estructuras vigentes. Un cuarto de siglo más tarde, Sarmiento iba a trazar un balance desconsolado de los frutos de ese esfuerzo, que no era sólo suyo, para "rescatar a un pueblo de su pasada servidumbre". Eso no se había logrado; se había conseguido en cambio cierto progreso material, pero el trazado de ferrocarriles y la unificación de mercados se habían alcanzado también en el Japón, en la India, en Africa, por el mero juego de las fuerzas económicas. En otras palabras, el plan alberdiano de adherir a las líneas de fuerza de la realidad, y a la vez orientarlas, ha fracasado por entero. Era excesivamente presuntuoso creer que esas fuerzas reales necesitasen para algo la adhesión de unos cuantos teorizadores políticos, y era todavía más presuntuoso creer que esos mismos teorizadores, puestos a gobernantes, podrían desviarlas en el rumbo de su ciega marcha... ¿Es válida esta moraleja, reexaminada a un siglo de distancia de la opción decisiva? Probablemente no, pero refleja en todo caso la imagen que de esa experiencia política llegaron a tener quienes eran sus protagonistas.

* * *

Esa experiencia va desde la aparición de una actitud revolucionaria hasta la colaboración, en condiciones que se admite que concederán muy escasa autonomía de movimientos y se descubre posteriormente que no conceden ninguna, con la

realidad misma que se trataba de abolir. ¿Cómo explicar esa marcha aparentemente sinuosa, pero que vista desde su punto de llegada se descubre rigurosamente rectilínea?

Ya se han visto las limitaciones y el sentido de la actitud revolucionaria inicial. Esa actitud revolucionaria viene a consistir en una extrema libertad ideológica, posible en un contexto social conservador por la fe universalmente depositada en la ineficacia de toda ideología. Esa fe nace de la falta de medida común entre las ideologías y la circunstancia local, que las hace difícilmente aplicables, y que —al realizarse la tarea de adaptación dentro de ese contexto social cuyo signo se ha señalado ya— sólo permite su aplicación en lo que tengan de compatible con él. Así, los contenidos revolucionarios que los hombres de 1837 aprenden en textos franceses deben ser adecuados a la creencia fundamental en que la única fuerza revolucionaria está constituida por la comunidad de los ilustrados, que escapan a la rutinaria aceptación de lo existente. Esta creencia, contraparte de la incredulidad en toda posibilidad de una revolución como fruto de las apetencias y aspiraciones que se encentran ya en el cuerpo social, explica adecuadamente la orientación que tomó, desde su origen mismo, la acción política del grupo de 1837. Esta orientación era revolucionaria en cuanto ignoraba deliberadamente las jerarquías constituidas en la realidad, pero al no buscar en la realidad ninguna alianza distinta de la de esas jerarquías, de hecho se volvía a ellas para tomar contacto con lo real. Al volverse a ellas sin acatar su mecánica propia, sin adherirse al juego de aspiraciones e intereses que acercaban u oponían a las distintas fuerzas que dominaban esa realidad, se condenaba al fracaso; fue ésa la lección de 1837-42. Aliarse con los grupos dominantes significaba acatar la legalidad que les era propia, abdicar de la jefatura de la empresa revolucionaria. Pero esta jefatura quedaba vacante, porque no había ya empresa revolucionaria. Y éste es el punto de llegada, expuesto teóricamente por Alberdi y

aceptado en los hechos aun por quienes recusaron violentamente las conclusiones alberdianas.

Frente a este curso de hechos, podemos alcanzar rápidamente una moraleja, que quiere ser válida para 1837 como para 1958: estos revolucionarios no pudieron serlo porque no se pusieron al servicio de la única fuerza de veras revolucionaria; divorciados del pueblo, su revolución no podía ser sino la de los grupos dominantes, que encuentra siempre y bien pronto sus límites. Esta moraleja no es, sin embargo, tan clara como parece: habría todavía que saber por qué triunfó en 1837 esa imagen errada de la revolución. La explicación es también sencilla: encerrados en los límites, que no advertían, de una ideología que los vinculaba a los grupos que se proponían combatir, los hombres de 1837 trazaron la imagen de una falsa revolución para traicionar mejor a la revolución verdadera. Esto puede ser exacto, y no queda sino tributar una mezcla de horror y admiración a estos abnegados defensores del grupo dominante, que aparentan tan bien traicionarlo hasta ser vilipendiados y perseguidos por él, y hacen todo eso para mejor servirlo. Pero, si no en 1837, en 1958 hay quienes presentan una imagen distinta de la revolución: lo que no pueden presentarnos es una revolución distinta de esa que sólo lo es en el nombre, y a la postre rehúsa serlo aun nominalmente, y reniega con horror de su pasada vocación revolucionaria.

Quedaría aún otra explicación: que la imagen que los hombres de 1837 se hicieron de las posibilidades revolucionarias en la Argentina fuese sustancialmente exacta. Sólo esta última hipótesis permitiría entender la trayectoria paralela que las páginas anteriores rastrean. Porque la similitud básica dada por la ausencia de la función activa de la masa popular no podría encontrarse en las concepciones políticas: hoy se afirma, muy correctamente, que la revolución no puede ser obra de minorías beneficiadas por el sistema que la revolución debería destruir, que sólo puede ser fruto de la vocación revolucionaria de

un pueblo entero. Sólo que esta afirmación tiene por consecuencia, de parte de los que en la Argentina la hacen suya, bien la ira incontenible ante la falta de vocación revolucionaria de ese pueblo, y la adhesión a otras formas de revolución en beneficio de grupos retrógrados, bien la descarada afirmación de una voluntad popular revolucionaria que dictaría una efectiva política revolucionaria (la que vemos desarrollarse ante nuestros ojos). La similitud entre el destino del proyecto revolucionario enunciado en 1837 y el que hoy, según se dice, se está llevando a los hechos no deriva entonces de la analogía entre los respectivos credos revolucionarios, sino de la continuidad de ciertos rasgos dentro de la realidad sobre la cual esos credos pretendieron incidir.

¿Se habrá descubierto entonces un invariante de la realidad nacional; un desconsolador pero por eso mismo auténtico fragmento de la Argentina esencial y eterna? De ningún modo; tan sólo que, en un país que se piensa con categorías surgidas de una realidad distinta de la suya, la tentación de trazar de él una imagen al margen de la realidad es muy fuerte; que esa disposición a planear futuros que tienen poco que ver con el presente puede ser tomada por todos, y en primer término por los mismos que a ella se entregan como prepotente vocación revolucionaria; que si ese país no presenta en sí mismo una situación revolucionaria, esa vocación, admitiendo que efectivamente sea tal, está destinada a ser traicionada en el momento mismo en que es llevada a los hechos. Mientras todas estas condiciones se den, es muy probable que las cosas sigan ocurriendo de esta manera, pero no está dicho que esas condiciones han de durar eternamente.

1930-1960. Crónica de treinta años

Desde hace treinta años la Argentina aparece enfrentada con alternativas políticas que no logra resolver ni eludir; en estas páginas se intenta seguir la quebrada línea de ese proceso. A partir de 1930, en efecto, nuestra historia parece tomar un ritmo más rápido; visto en una perspectiva de treinta años ese ritmo febril parece ser consecuencia de la vigencia constante de ciertos datos determinantes, cuya fijeza es por el contrario extrema: la crisis político-social no sirve ya para marcar las transiciones entre situaciones sólidamente establecidas; ella es ahora el elemento constante, y las soluciones que recibe, vistas más de cerca, son sólo síntomas de su mantenida vigencia.

Estando así las cosas no sería del todo legítimo proclamar anormal esta anormalidad permanente, que es ya el único clima histórico conocido por varias generaciones argentinas. Más valdrá apuntar los rasgos distintivos de ese orden político en perpetua crisis, en cuyo perfeccionamiento se advierte retrospectivamente que han colaborado los sucesivos regímenes conocidos por el país en el último tercio de siglo. Sus elementos constantes los constituyen sin duda la imposibilidad de ganar para ciertas soluciones políticas y sociales la adhe-

sión permanente y segura de la mayoría y la necesidad de contar —para imponer esas soluciones— con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se han acostumbrado a manejar como cosa suya una fuerza que sólo en teoría no les pertenece en propiedad. Pero este papel decisorio de las Fuerzas Armadas sólo ha podido mantenerse como rasgo constante porque el monopolio de la fuerza nunca les ha sido seriamente disputado; y ello deriva del carácter relativamente benigno —a la vez que crónico— de las tensiones político-sociales que hacen necesaria su intervención. Frente a políticas que tiene demasiadas razones para condenar, la opinión mayoritaria se limita a decir, cada vez que es consultada, que no; y si aun eso no le es permitido, se rehúsa por lo menos a decir que sí, pero a esa renitencia obstinada no acompaña una oposición más militante. Si en la Argentina posterior a 1930 —desmintiendo las ilusiones de más de un régimen de restauración— la posesión del poder no es base suficiente para conquistar el apoyo de la opinión, el gobernante que se resuelva a prescindir de ese apoyo no hallará dificultad seria para ejercer su cometido sin contar con él. Quien quiera podrá entonces definir a este último tercio de siglo de historia argentina como una larvada guerra civil, a condición de que no eluda con ello considerar que esa guerra civil permaneció en efecto larvada, y que este hecho requiere también él ser explicado.

Un comienzo de explicación puede hallarse en algunos rasgos del proceso que en 1930 ha agotado ya sus últimas posibilidades; ese medio siglo de "crecimiento hacia fuera", de organización del país para la exportación de cuero, lana, cereales y carnes, presenta sin duda rasgos negativos, cuyas consecuencias se hacen cada vez más claramente evidentes; para entender por qué la Argentina no se muestra más dispuesta a repudiar su tan cargada herencia y emprender sin nostalgias un nuevo camino será preciso —contra las imágenes pintadas con colores de Apocalipsis que prodigan ciertos publicistas en bo-

ga— recordar que en esa etapa histórica no se dieron solamente aspectos negativos.

En efecto, la Argentina de los ganados y las mieses, si no cumplió con todo lo que sus fundadores habían prometido en nombre de ella, logró hazañas no escasas. Sin duda no creó una clase media agrícola sobre la ruina del latifundio ganadero; sin duda el progreso rural se dio, aun en las zonas reorientadas hacia el cereal, acentuando y no atenuando la gravitación de la clase alta terrateniente; sin duda el desarrollo urbano se apoyó en el incremento de funciones de administración, transporte y comercialización subordinadas a las finalidades propias de crecimiento hacia fuera, y —para usar el lenguaje menos neutro, pero no siempre menos exacto, de algunos de nuestros políticos— se colocó, como la totalidad del proceso del que formaba parte, al servicio de la oligarquía y el imperialismo. Sin duda este proceso acentuaba nuestra dependencia de una economía mundial cuyos desarreglos periódicos tenían ya en el siglo XIX efectos devastadores para las frágiles estructuras económicas locales, y cuya tendencia dominante se hizo en el siglo XX desfavorable a los países orientados a la producción de materias primas.

Todos estos rasgos que en la etapa de crecimiento anticipan las modalidades del estancamiento que ha de seguirla no impidieron que en el Litoral aflorase, en ascenso vertiginoso, una clase media urbana y en parte rural cuya prosperidad estaba tan vinculada a los aspectos negativos del proceso de crecimiento como la del principal beneficiario de éste; es preciso tomar en cuenta, además, la presencia de clases populares que, por lo menos en el Litoral, tenían desde tiempos coloniales niveles de vida excepcionalmente altos en el cuadro hispanoamericano y estuvieron lejos de perderlos en las etapas posteriores; que en particular en el cuarto de siglo anterior a 1930 habían gozado de un aumento muy real de su nivel de vida y de las perspectivas de un ascenso social que sólo paulatina-

mente comenzaba a hacerse menos fácil al acercarse el final del período. Estando así las cosas no deberá sorprender que la Argentina del "crecimiento hacia fuera" no sea recordada con nostalgia tan sólo por las clases económicamente dominantes durante esa etapa, que para la entera Nación, aun para buena parte de sus sectores más desposeídos, constituya un mito rival de los que proponen un futuro distinto de cualquier pasado. Ello contribuye a explicar sin duda que en medio de luchas frecuentes por el poder político y aun ejercido éste por grupos que se proclamaban (y en parte eran) opuestos a la clase terrateniente, no se hayan planteado en los años posteriores a 1930 auténticas alternativas al programa que había probado, y agotado, su eficacia en la época concluida en esa fecha.

Y sin embargo el hallazgo de esas alternativas es imprescindible —todos convienen ya en ello— si es que la Argentina ha de salir de la crisis en que vive. Lo que nos introdujo en ella fue la depresión de 1929, punto final de un proceso más que secular en cuyos primeros tramos se inscribe la Revolución Industrial. Fue la depresión la que marcó para la Argentina el comienzo de cambios decisivos; obligó a una transformación interna que, realizada bajo los estímulos brutales y a menudo contradictorios de la crisis y la guerra, no pudo devolver a la íntimamente desequilibrada Argentina actual el lugar en el mundo que, a costa a veces de gravosas automutilaciones económicas, la Argentina agropecuaria había conquistado. Llamar a este proceso excesivamente prolongado una crisis de crecimiento implica una apuesta sobre el desenlace de la crisis misma. ¿Habría sido posible impedir que su dura vigencia se transformase en un rasgo casi permanente de treinta años de vida argentina? Acaso más importante que responder a esta pregunta sea recordar que para salir de esta situación no se han ensayado todas las soluciones; que el mantenimiento de cierto equilibrio de fuerzas sociales (no sólo destinado a evitar cambios catastróficos, sino aun a retardar desplazamien-

tos de poder mucho más modestos de unos grupos hegemónicos a otros) ha sido una consideración constantemente presente en el ánimo de nuestros gobernantes, quienes en este punto no parecen haber traicionado (sino por el contrario reflejado aun sus ambigüedades) las tendencias de sectores por ellos representados y que, sin embargo, como la acrecentada clase obrera o los empresarios industriales, no tenían al parecer motivo alguno para sentirse identificados con el recuerdo de un orden económico elaborado bajo el signo de la hegemonía terrateniente.

Porque aun estos grupos sociales estaban menos alejados de lo que ellos creían de la herencia de la Argentina del cereal y el ganado. La clase obrera en efecto se mostró a través del peronismo adicta por una parte a un distribucionismo que no era en ella nuevo, por otra a un proteccionismo industrial que apreciaba sobre todo en sus consecuencias en cuanto a la creación de fuentes de trabajo. Sin duda el empresariado industrial que halló expresión política en el gobierno de Frondizi hubiera rechazado esta interpretación limitativa de su política; bajo su égida se enriqueció nuestro acervo de lugares comunes con todo el nuevo vocabulario del desarrollo, pero ello no impide que en perspectiva corta ese gobierno haya visto el desarrollo industrial como una suerte de carga que era preciso financiar con una expansión aún más rápida de la economía rural exportadora, que esperaba impulsar acrecentando aún más su parte en la distribución del ingreso nacional.

El peronismo y el frondizismo —que fueron los dos regímenes políticos en teoría más alejados de toda nostalgia por la Argentina exportadora anterior a 1930— vieron entonces la diversificación económica —en los hechos si no en las ideologías— como una suerte de lujo de los años prósperos, que era necesario pagar con retornos periódicos al purgatorio de la Argentina rural.

No es sorprendente que estas premisas hayan contribuido a restar alcances —y acaso eficacia— a los ensayos de solucionar la crisis permanente de la economía argentina. En estas condiciones la crisis política podía conocer atenuaciones, coincidentes —no por casualidad— con los momentos en que la coyuntura económica mundial aligeraba los aspectos negativos de la situación local (es el caso de los primeros años de la etapa peronista), pero aun a través de ellos se disponía a mostrar nuevamente sus rasgos esenciales apenas ese pasajero alivio cesaba.

No sólo la economía ligaba a la Argentina al mundo. Mientras ella vivía su crisis, el mundo vivía la suya, más devastadora y violenta. La Primera Guerra Mundial apresuró la decadencia de nuestra metrópoli económica; la aparición de potencias que pretendían rivalizar con ella aun en este rincón marginal del planeta agregó razones de inestabilidad a nuestra situación. Pero razones más inmediatas las proporcionaba la crisis del liberalismo constitucional en los países a los que la conciencia argentina solía volverse en busca de los puntos de referencia necesarios para entender y organizar nuestra propia realidad política. En esos países se veían ahora surgir multitud de ideologías e instituciones nuevas, muchas de ellas hijas efímeras de la crisis, otras destinadas por el contrario a durar, que se ofrecían como claves —ellas mismas bastante enigmáticas— para interpretar y encauzar el proceso que el país vivía. El comunismo ofrecía un modelo de transformación social lo bastante mal conocido como para que un alarmado sector de la opinión pública lo tuviese por ya realizado en la democracia complacidamente populachera del radicalismo personalista. El fascismo —visto al comienzo como principio orientador de dictaduras militares y conservadoras, desde la española hasta la polaca— parecía ofrecer una solución y significar (a juicio de otros) un peligro. Cuando los resultados de la Segunda Guerra Mundial pusieron un poco de orden en ese caos, la Ar-

gentina, absorbida por una experiencia política interna particularmente intensa, siguió —todavía lo está en parte— apegada a las costumbres intelectuales surgidas en la etapa anterior. Ese desorden ideológico contribuyó a que los rasgos más evidentes de la actual situación mundial hayan comenzado a gravitar sólo muy tarde en nuestra conciencia política: sólo luego de la caída del peronismo comenzaron a usarse para entender nuestro panorama político términos de referencia menos desvinculados de esa situación global. En el momento actual, la inserción no sólo económica de la Argentina en un mundo renovado ha pasado a ser uno de los aspectos más importantes —y también más controvertidos— de nuestro quehacer político. La presencia de los conflictos que dividen al mundo es un dato cada vez más esencial de nuestra realidad político-social.

Pero esa presencia, si ofrece un juego de alternativas menos engañoso que el de la entreguerra, está lejos de contribuir a la clarificación real de nuestro panorama político. Cada vez más rigurosamente vinculados a las modas ideológicas y políticas de nuestras metrópolis, nuestros dirigentes tienden a adoptar tácticas y cánones interpretativos en cuya elección la situación local sólo influye en grado mínimo: el prestigio alcanzado en toda su área de dominio por el liberalismo conservador propiciado por Estados Unidos durante la era Eisenhower contribuyó sin duda a dar un sesgo más duro a la gestión de los dos primeros regímenes posperonistas; en la actualidad buena parte de nuestros políticos, desde la extrema derecha a sectores que fueron alguna vez de izquierda, se disputan el título, que juzgan valioso, de intérpretes locales de la línea Kennedy. Que este modo de difusión de las modas políticas haya encontrado tanto éxito en un país culturalmente extravertido como la Argentina no tiene nada de extraño: en países europeos orgullosos de su individualidad, movimientos políticos que se suponían más apegados a sus tradiciones —desde la socialdemocracia alemana al laborismo inglés— emprenden la

misma aventura. Aun así, no parece que cambios de instrumental conceptual debidos a causas tan extrínsecas ayuden a nuestros políticos a elaborar soluciones adecuadas a problemas que no son al cabo los mismos de los Estados Unidos.

La gravitación de esas modas ideológicas contribuye a restar —en la superficie— continuidad a nuestro proceso político. Pese a ella, las líneas fundamentales de éste permanecen sin embargo invariables; en su base sigue estando esa larvada guerra civil que cubre el último tercio de siglo de historia argentina, y de la que se teme muy vivamente (si no por los grupos dominantes locales, que sólo creen a medias en ese peligro —aunque no desdeñan mencionarlo cuando parten en busca de nuevos apoyos a Washington o Nueva York— sí por lo menos en nuestra actual metrópoli) que venga a integrarse finalmente en la guerra civil a veces menos larvada que es un aspecto del actual orden mundial.

Dentro del orden occidental la Argentina ha pasado a ser considerada una zona de frontera en constante peligro de pasar al adversario. De allí que los aspectos duros de la política de Occidente tengan aquí un eco particularmente intenso, que sus ocasionales aperturas encuentren en cambio aplicación local más limitada. Se debe a ello sin duda que el papel de los ejemplos proporcionados por los países más prestigiosos juegue ahora —al revés de lo que ocurría hace ochenta o cincuenta años— en contra de la adecuación al modelo liberal y constitucional que goza sin embargo de un retorno de vigor en los países metropolitanos. La institucionalización de la política represiva, que implica el uso faccioso del poder del Estado en beneficio de ciertos grupos políticos y en perjuicio de otros, el reconocimiento público del papel de las Fuerzas Armadas, como árbitro supremo que define en último término el área de libertad política compatible con el mantenimiento del orden vigente, la aceptación (aun en grupos ayer desenfrenadamente nacionalistas) de que hay lealtades político-sociales que pa-

san antes que la solidaridad nacional, todos los rasgos, en fin, que no son sino corolarios de la aceptación como definitivo de un clima histórico rabiosamente faccioso, no se darían de modo tan acusado si la lucha que consume a la Nación no fuese identificada con la que divide al mundo. Es éste, entonces, el primero de los servicios que debemos a la gravitación creciente del conflicto mundial de poder; no parece que comprometa nuestra gratitud.

He aquí, entonces, un país que no logra salir de su estancamiento económico; que vive a la vez una crisis política permanente, cuyas consecuencias negativas tiende a exagerar proyectando sobre ella la luz apocalíptica del conflicto mundial de poder. No es extraño entonces que ese país se vuelva nostálgicamente hacia un pasado marcado por la serena hegemonía económica de la clase terrateniente y por el predominio político algo más agitado, pero no quebrado por conflictos graves, de un partido que, como el radical, era pasablemente representativo de los grupos medios y populares; no le cuesta ahora descubrir la fundamental concordia que por debajo de las episódicas tormentas ese orden había hecho posible. No es extraño tampoco que el país guarde aborrecimiento casi unánime a los grupos que en 1930 quebraron la continuidad constitucional; cualesquiera sean sus culpas (por otra parte muy reales), se les reprocha sobre todo haber venido a dar su signo a un cambio visto retrospectivamente como una suerte de expulsión del paraíso.

Esa nostalgia —en parte, como se ha visto, justificada—, ese aborrecimiento, no debieran sin embargo hacernos olvidar que, cualesquiera sean los méritos que se descubran en el orden anterior a 1930, éste tiene el defecto decisivo de no haber encontrado fuerzas para sobrevivir a la crisis; no halló tampoco luego esa fuerza a lo largo de coyunturas aparentemente adecuadas para su restauración. El examen histórico de la situación anterior a la crisis puede permitirnos entender mejor

la actitud nostálgica que en la Argentina no se da tan sólo en nuestra derecha conservadora sino también —apenas oculta— en grupos supuestamente vueltos hacia el futuro. Pero hace evidente también que esa nostalgia no conduce a ninguna solución válida, ya que orienta hacia un orden ya irrevocablemente pasado e irrecuperable. Un orden en el que por otra parte, apenas se lo examina más de cerca, se descubren las internas quiebras de las que iba a morir.

Quiebras en el orden económico, en primer término. Si la clase terrateniente logra mantener en lo interno su hegemonía, sus relaciones con los que dominan la comercialización de los frutos cuya producción controla le son cada vez menos favorables: será ella la que deberá asumir —y transferir a otros grupos sociales internos— las consecuencias del deterioro de los términos de intercambio, agravadas por el afianzamiento de estructuras monopolistas de comercialización. El cambio se ha hecho ya evidente para el cereal antes de 1914; ante la baja de las ganancias es la renta de la tierra la que disminuye, mientras las casas comercializadoras logran prosperar en el nuevo clima económico aparentemente menos favorable. Para la carne la nueva situación se muestra por entero hacia 1925: los frigoríficos dominan el mercado y dictan su ley a los hacendados. Esta transformación —discretamente llevada adelante— está llena de consecuencias: nuevas divisiones en la clase terrateniente; aparición dentro de ella de sectores descontentos que comienzan a preguntarse si la vinculación que esa clase buscó y obtuvo con grupos extranjeros a los que entregó la comercialización, el transporte y las finanzas no comienza ya a mostrar consecuencias negativas... Y todavía: una dureza mayor en esa clase terrateniente para encarar sus relaciones con otros grupos, muy explicable desde que ha comenzado a advertir que sus perspectivas de enriquecimiento no son ilimitadas.

Quiebras en el orden político por añadidura. Sin duda lue-

go de 1916 parece haberse alcanzado la meta fijada por los gobernantes que se sucedieron a partir de 1852: una democracia moderna firmemente arraigada en una sociedad también moderna. Pero esta última se apoya en un orden económico menos íntimamente modernizado; mantenerla es un costo adicional que nuestra economía puede afrontar sólo gracias a un clima de prosperidad que es sin duda habitual, pero no muy sensato, creer definitivo.

Y algo de este arcaísmo fundamental afloraba aun en los sectores aparentemente más modernizados de la vida nacional, y en particular en la vida política: las relaciones de la nueva clase media con el partido que supuestamente la representaba, el radical, fueron siempre, y no por casualidad, ambiguas. El radicalismo, al proclamarse representante de la Nación y no de uno de sus sectores, hacía algo más que sucumbir a una ilusión propia de los movimientos políticos de clase media: reflejaba a la vez un dato real de su propia estructura, en la cual la clase alta tradicional tenía gravitación importante en nivel dirigente, en tanto que los sectores populares daban el tono a casi toda la máquina partidaria.

Pero no era sólo la ambigüedad del radicalismo la que cargaba de provisionalidad su identificación con la clase social que de todos modos le era más cercana: la ambigüedad de actitudes de la clase media era en este punto aun más decisiva. Surgida —como se ha recordado ya— de un proceso de ascenso que formaba entre los objetivos declarados de nuestros gobiernos de oligarquía, se vio muy rápidamente colmada en sus tibias aspiraciones a conquistar el poder político; en este aspecto tendía a ver el obstáculo principal a su hegemonía en la existencia de máquinas políticas de clientela plebeya, cuyo funcionamiento no se daba por otra parte sin estridencias.

Ya en 1928, cuando el radicalismo se dividió, y el sector llamado antipersonalista agrupó junto con casi todo lo que en él estaba presente de nuestra clase alta tradicional a los dirigen-

tes de clase media en los cuales ésta se podía sentir cabalmente representada en sus tendencias, la división afectó muy fuertemente a ese sector de la clientela radical, que en las elecciones presidenciales de ese año se orientó en buena parte hacia la fórmula presidencial antipersonalista, apoyada por otra parte por el maltrecho conservadorismo.

Pese a esas defecciones, el radicalismo obtuvo entonces su más abrumadora victoria electoral; fue un partido mucho más popular en su electorado de lo que había sido el radicalismo de 1916 el que devolvió a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, el caudillo que gobernaba el movimiento radical desde fines del siglo XIX, y en 1916 había presidido el primer gobierno popularmente elegido. Pero ese partido no se había renovado en ideología, y sólo muy superficialmente lo había hecho en programa: transformado en partido popular, el radicalismo seguía aceptando en lo esencial el orden consolidado por setenta años de expansión bajo la hegemonía de la clase terrateniente.

Ese radicalismo, que no es revolucionario, se encuentra sin embargo peligrosamente aislado de los sectores incorporados desde más antiguo a la vida política: he aquí sin duda una fuente de riesgos para la estabilidad. Riesgos que no convendría exagerar; sin duda ya en 1928 hallamos a una aristocracia terrateniente despechada frente a las soluciones políticas cada vez más alejadas de las suyas que el país va adoptando; poco satisfecha de una evolución económico-social que ya no dirige, en la que sus asociados tradicionales se van transformando en sus amos; hallamos también a una clase media a la que la democracia de sufragio universal parece privar del papel políticamente hegemónico que esperaba del futuro. He aquí otras tantas causas de debilidad del orden vigente; todas ellas no hubiesen sin embargo bastado para provocar el derrumbe de éste. Cualesquiera fuesen las fallas internas del sistema, su muerte le llegó de fuera: en 1929 la economía capitalista comenzó a ser devastada por la más grande de sus crisis;

en 1930, en un país tras otro de Hispanoamérica, gobiernos de democracia representativa o dictaduras militares fueron cayendo los unos tras los otros arrastrados también ellos por el vendaval.

Primera restauración

Esta historia comienza entonces en 1930. La crisis de 1929 ha puesto fin a la prosperidad del período de reconstrucción de posguerra: en una estructura económica como la argentina penetra sin encontrar defensa ni dique. Ante la desaparición de las reservas de oro el gobierno cierra la Caja de Conversión; esta medida, sin duda insuficiente, es duramente censurada por diarios que no dudan de que la culpa de lo que está ocurriendo pertenece por entero al doctor Yrigoyen; es el gobierno el que debe impedir la caída del peso: los críticos prescinden, sin embargo, de indicar de qué manera podría hacerlo. Crisis del valor internacional del peso; crisis de nuestro comercio internacional, especialmente el del cereal (los precios industriales se mantienen mejor por la brusca contracción de la producción). Crisis de nuestra economía productora; crisis financiera del Estado, que (en un país en que no existe impuesto a la renta y en el cual ningún gobierno —cualquiera sea el lenguaje que se complazca en usar— se ha atrevido a cobrar de veras impuestos a la propiedad de la tierra) recibe lo más saneado de sus entradas de la recaudación aduanera. Ello produce dificultad para pagar sueldos y por lo tanto incapacita al Estado para atender a una función que en la Argentina cuenta entre las suyas esenciales: la de proporcionar modo de vivir a todo un amplísimo sector de clase media.

Esas calamidades recaen bruscamente sobre un país que acaba de dejar atrás un período de prosperidad sin precedentes y sobre un gobierno particularmente inhábil para enfren-

tarlas, porque es el de un partido integrado por políticos que —como todos los argentinos— carecen de la experiencia que la hora requiere. Ese partido se contenta con ser expresión de lo que se llamará "el hombre común" y no parece advertir que ello le impone seguir una política radicalmente diversa de la de sus rivales. Su orgullosa ruptura con las fuerzas tradicionalmente dominantes —que ha tenido expresión en la elección que, en 1928, ha llevado a la presidencia por segunda vez al doctor Yrigoyen— no va acompañada de un esfuerzo sistemático por quitar poder, fuera del plano político, a esas fuerzas. ¿Ese esfuerzo era de éxito imposible? En ese caso habría sido necesaria una actitud menos imprudente, que no excitase la cólera de fuerzas que se sabía incontrastables. Pero el partido en el gobierno busca remediar la pérdida de popularidad, acentuando los rasgos que en el pasado le habían procurado una tan amplia: su belicosidad verbal contra los representantes de un pasado que la Nación tenía razones sobradas para recordar sin afecto ni reconocimiento. Es de temer que aun en las medidas menos insustanciales el partido haya visto, sobre todo, lo que tenían de desafío gallardo a un combate para el cual no estaba preparado; así, el proyecto de nacionalización del petróleo, debido a la tenacidad de Diego Luis Molinari, y adoptado con fervor por el doctor Yrigoyen, sin que pueda asegurarse que haya entendido del todo qué había detrás de él; esta duda es tanto más legítima en cuanto a sus seguidores, que en más de un caso habían sostenido en un pasado todavía reciente posiciones muy diferentes de la que ahora querían llevar hasta sus últimas consecuencias. Se trataba, pues, de un partido rodeado del odio tenaz de los grupos privilegiados del país y visto con alarma naciente por las fuerzas económicas internacionales que en el país actuaban. Un partido indefenso contra esos enemigos, cuya seriedad parecía no apreciar con justeza. Un partido, además, deshecho porque su estructura fuertemente autoritaria comenzaba a fallar en su ápice. Como

el prestigio del doctor Yrigoyen era enorme entre quienes lo seguían, sus adversarios los habían designado como *personalistas* (ostentando descubrir sólo en el yrigoyenismo un rasgo muy frecuente —como todos saben— en los movimientos políticos argentinos, aun en los de minoría). Ese prestigio no era injustificado: Yrigoyen no sólo contaba en su favor con una entrega total y desinteresada a la misión que se había fijado, sino también (como difícilmente podrán adivinar quienes de él sólo conozcan su extravagante prosa) con una maestría política muy real, demostrada en forma deslumbrante en su reelección, juzgada imposible por muchos de nuestros políticos. Pero la rápida decadencia de la idoneidad del jefe, aunque era un hecho conocido por muchos de sus partidarios, no podía ser corregida sin transformar la estructura del partido gobernante, transformación imposible si no contaba con la aceptación del propio jefe, que parecía dotado de una gran confianza en sus capacidades, cuyo deterioro parecía ser el único en no advertir.

Frente a ese gran partido popular que se movía a la deriva, la oposición parlamentaria, exasperada por los desplantes de que la hacía víctima un gobierno que sólo podía salvarse excitando la ajena indulgencia, tendió a transformarse en modo de expresión de oposiciones mucho más vastas y complejas. Ese papel fue asumido con particular violencia por un sector desprendido del Partido Socialista bajo la dirección de Antonio de Tommaso, que había ya logrado, a principios de 1930, una resonante victoria en las elecciones parlamentarias de la Capital Federal. El Partido Socialista Independiente tomó la iniciativa de constituir un bloque parlamentario opositor, en el que se contaban los grupos conservadores provinciales, elevados a la inesperada función de vestales de la pureza electoral, y algunos representantes parlamentarios de movimientos desprendidos del radicalismo, como el que en San Juan era guiado con mano poco blanda por la familia Cantoni, también

él acaso poco adecuado a la adusta función de fiscal de las formas republicanas que se disponía a asumir. Al margen de este movimiento, que iba a encontrar expresión en el "manifesto de los 44", y antes en una campaña de actos públicos, a los que el peso creciente de la crisis se encargó de dar público numeroso, otros grupos opositores, como el radical antipersonalista, el socialista y demócrata progresista, no ocultaban su censura a la pasividad del gobierno y a su inclinación a resolver los problemas políticos que le planteaba su creciente impopularidad recurriendo a medios muy conocidos en el país, como la intervención a provincias y el fraude electoral, condenados con energía por el radicalismo en los tiempos en que eran sus adversarios quienes no podían prescindir de ellos.

Todos estos grupos políticos tenían tras de sí la opinión masiva de núcleos sociales muy diversos; desde la oligarquía rural hasta las indignadas clases medias y bajas. ¿Todo el país, entonces? Sería necesario distinguir: aún las elecciones parlamentarias de comienzos de 1930, que tanto el gobierno como la oposición consideraron una catástrofe para el primero, dieron en rigor una victoria electoral —aunque muy ajustada— al partido gobernante. Algunos observadores que poco simpatizaban con él (como por ejemplo, Leopoldo Lugones) juzgaban que electoralmente Yrigoyen seguía siendo imbatible. En todo caso, oposición particularmente viva había en los centros políticos más activos (la capital y las grandes ciudades, donde el oficialismo había sido aplastado). Pero esa oposición no era la única: en el Ejército el paso del poder al radicalismo no había dejado de producir desequilibrios; el nuevo partido dominante debía —por su seguridad misma— provocar desplazamientos de poder en las Fuerzas Armadas, que sin embargo debían ser moderados para no tener las consecuencias catastróficas que se proponían precisamente evitar. Esta tensión interna, grave durante la primera presidencia de Yrigoyen, se aquietó un tanto en la de Alvear. El retorno de Yrigoyen le de-

volvió virulencia en un plano nuevo: las asociaciones secretas que existían ya en las Fuerzas Armadas dejaban de limitar sus inquietudes a los problemas de éstas. Dos jefes gozaban entonces de influencia predominante en los sectores militares descontentos: el general Uriburu y el general Justo. El primero sólo había tenido fugaces contactos con la política activa; el segundo, ministro de Guerra de Alvear, devolvió, mediante una gestión llena de tacto, la paz al Ejército. Político por temperamento, se lo consideraba vinculado a la fracción antipersonalista del radicalismo.

El año 1930 fue entonces de agitación política y conspiración militar; la primera preparaba el éxito de la segunda. Mientras tanto el partido en el poder no parecía advertir demasiado bien qué ocurría; su capacidad de reacción parecía limitadísima. La agitación culminó cuando el ministro de Agricultura fue silbado al inaugurarse la exposición ganadera; ese desahucio del régimen radical por parte de los grupos vinculados con el control de la ganadería fue juzgado por muchos signo decisivo del derrumbe. A ello acompañó una violenta agitación en la calle, con manifestaciones populares y estudiantiles; nuevo malestar en el Ejército, con renuncia del ministro, general Dellepiane, medidas de seguridad —ineficaces— del gobierno, delegación del mando en el vicepresidente Martínez.

Y el 6 de setiembre, revolución. Luego de sesenta y ocho años de vigencia formal del orden constitucional, éste había saltado en pedazos; muy pocos, por cierto, lo deploraban. El general Uriburu, jefe de la revolución, formaba un gabinete integrado predominantemente por políticos de tendencia conservadora; un documento firmado por muy numerosos jefes al incorporarse al movimiento fijaba como finalidad de éste garantizar la vuelta al ejercicio normal de las instituciones republicanas mediante elecciones generales.

Pero no era ése el propósito del jefe de la revolución. El general Uriburu, perteneciente a una ilustre familia de Salta, es-

taba muy ligado en espíritu a las tradiciones aristocráticas de ese sector de nuestro norte. Según un testigo, él mismo poco inclinado a convicciones igualitarias, el doctor Pinedo, el general Uriburu tendía a actuar con prejuicio favorable en cuanto a la capacidad y al mérito de las gentes de su grupo social; en cuanto al resto era en extremo pesimista, y el espectáculo no siempre decoroso de catorce años de improvisada democracia no hizo sino confirmar esta actitud previa. Actitud que no era, por otra parte, únicamente suya: el gobierno de Yrigoyen probaba, para muchos, el fracaso definitivo del sufragio universal. Pero de esa actitud, inducido por recientes contactos con grupos todavía pequeños que en el país recogían la enseñanza del nacionalismo francés y el fascismo italiano, el general Uriburu extraía corolarios que no todos compartían. Era, según él, necesario introducir en el país un régimen corporativo, que hiciera innecesaria la existencia de ese grupo parásito integrado por políticos profesionales que formaban como un diafragma entre el país y el ejercicio del poder político. La conclusión no estaba del todo en las premisas. En efecto, si la falla se encontraba en el país mismo, en la trágica ignorancia de sus mayorías populares (con singular desconocimiento de los hechos, el general asignaba al padrón electoral un 60 % de analfabetos), no se advertía cómo el tránsito de la democracia parlamentaria a la corporativa podía aportar la solución. La objeción fue reiteradamente señalada y el corporativismo muy fríamente recibido, excepto por quienes habían hecho del general Uriburu un brillante catecúmeno. Esa resistencia fue reiteradamente atribuida por el general, que inauguró la costumbre de utilizar las ocasiones más diversas para mantener agridulces polémicas públicas con amigos y adversarios (una costumbre por la cual iba a sufrir más el prestigio de los polemizantes que el de los atacados), a las impaciencias de los propios políticos profesionales, ansiosos de volver a la chata vida parlamentaria, única en la que se sentían cómodos. De tal ma-

nera los últimos meses de 1930 fueron de agitación política muy viva. La posición asumida por el general Uriburu contaba con voceros en varias intervenciones provinciales (particularmente influyente era el interventor en Córdoba, Carlos Ibarguren, comprovinciano del presidente y antes dirigente demócrata progresista) y con el apoyo de movimientos paramilitares y legiones que se juzgaban consagrados por sus hazañas (por otra parte bastante modestas) en los días prerrevolucionarios, y que contribuían a alarmar a otros sectores de opinión oficialista por su literal inspiración en el ejemplo fascista. La posición opuesta tenía en su favor a todos los partidos que habían apoyado a la revolución, agrupados en la Federación Democrática Nacional. Desde el comienzo mismo del proceso, sin embargo, alguno de esos partidos, el Conservador de Buenos Aires, se había mostrado más moderado en su actitud hostil a la reforma corporativa; el ministro del Interior del gobierno revolucionario, doctor Sánchez Sorondo, que pertenecía a ese grupo, intentó conciliar las posiciones opuestas (para ello se había guardado de pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión; había definido sin duda al movimiento del 6 de setiembre como "revolución libertadora" y había colocado a esta fecha junto con las del "25 de Mayo y 3 de Febrero", pero se había abstenido de indicar cuál era el contenido concreto de esa liberación). En enero de 1931 la tensión se aflojó con la ruptura del frente de partidos opositores a Uriburu: los conservadores de Buenos Aires se alejaron de él; a la vez la precaria salud del presidente provisional imponía la búsqueda de un rápido fin para la situación: se hacía cada vez más evidente que la nueva Argentina corporativa quedaría sin nacer.

Mientras tanto la revolución introducía cambios muy hondos en la vida nacional. También ella, como otras que vendrían luego, era, a pesar del favor popular que por un momento la rodeó, la victoria de una clase sobre otra. Nuestros diarios mostraron inventiva especial para marcar con expresiones

siempre renovadas su desprecio, cívico y social a la vez, por la situación dejada atrás, caracterizada por uno de ellos como "el triunfo de la gentualla". Con ese triunfo era condenada también, si no la democracia representativa, sí cualquier interpretación de ella que exigiese innovaciones sociales o económicas considerables. En un país donde, en el pasado, aun quienes eran políticamente conservadores se hubiesen avergonzado de mantener en el plano ideológico lealtad hacia nociones juzgadas arcaicas, la expresión misma de "ideas avanzadas" alcanzó matiz peyorativo. La victoria siempre insegura de la minoría sobre la mayoría hacía nacer además el miedo, y el miedo, las más extrañas suposiciones. El interventor de Córdoba, doctor Ibarguren, sobre la fe de algunos informantes benévolos, es persuadido de que está a punto de ser víctima de una suerte de vísperas sicilianas organizadas por el doctor Sabattini; los telegramas de felicitación llueven a la mesa del interventor salvado de tan grave peligro. Esa actitud, arraigada en los revolucionarios desde antes de setiembre (el general Uriburu había disuadido de actuar a un grupo de bomberos patrióticamente ansiosos de alzarse contra Yrigoyen, en el temor de que el movimiento pudiese desembocar en la revolución social), indujo a una dureza extrema hacia los vencidos, que pudieron conocer, entre otras innovaciones políticas inesperadas, el uso sistemático de la tortura. El miedo inspiró también en otros aspectos la política del gobierno; así, su absurda política universitaria, que le enajenó bien pronto el favor estudiantil. En diciembre la Universidad de Buenos Aires era intervenida; el interventor se apresuraba a expulsar a estudiantes que habían sido sorprendidos *in fraganti* repartiendo volantes poco afectuosos hacia el nuevo funcionario.

Esa restauración del orden moral se desarrollaba por otra parte en medio de una crisis que, lejos de solucionarse, se agravaba. Bajaban las exportaciones, el peso seguía su descenso; el gobierno reducía drásticamente gastos para evitar el aumen-

to del déficit, pero con ello acentuaba en lo inmediato la penuria. Pero la crisis, que no podía seguir siendo totalmente achacada al régimen depuesto, era vista a menudo como un justo castigo a la petulancia mostrada por las clases populares durante su etapa de prosperidad y poder político.

Dados su temple y sus orientaciones, parece difícil entender por qué el gobierno se juzgaba en condiciones de ganar elecciones. Sin embargo, por una extraña (pero no infrecuente) inconsecuencia en las ideas, le parecía que las suyas eran tan justas que no dejarían de ser aceptadas aun por esas mayorías ignaras que gustaba de estigmatizar. Preparó así una serie de elecciones provinciales, que debían anticipar las parlamentarias; la primera se realizó el 5 de abril en la provincia de Buenos Aires. En ella venció el radicalismo, al que había retornado un sector importante de los antipersonalistas y en primer término el doctor Alvear. Este resultado sorprendente para el gobierno lo sumió en una grave crisis; el gabinete fue reorganizado y el plan político reformado: no se harían ya sondeos electorales y se comenzaría con la elección del Congreso. A ella, en un momento posterior, se decidió agregar la de presidente y vice. Sin renunciar al proyecto de reformar la Constitución, se lo dejaba para ser realizado por las nuevas autoridades.

De esta manera la revolución concluyó antes de lo que esperaban sus jefes de una manera que luego se iba a hacer ritual: en una campaña electoral. El "retorno a la normalidad" estaba a la vista, pero lo ocurrido en los escasos meses revolucionarios aseguraba que iba a ser una normalidad muy singular. La revolución, en efecto, había instaurado una dictadura militar, que se había mostrado desde el comienzo muy poco respetuosa de la integridad, vida y bienes de sus gobernados, que había inaugurado un sistema de persecución política llevado adelante con la ferocidad que da la buena conciencia, en medio de reacciones singularmente escasas y apoyos inespe-

radamente cálidos (así, el diario *La Prensa* podía lamentar la lenidad con que el nuevo gobierno actuaba frente a los adictos al caído e invitaba aun al doctor Alvear, pese a que le había sido opuesto, a purgar sus culpas tomando "el camino del silencio y la expiación"). A esa persecución acompañó una política social igualmente propensa a recurrir al auxilio de la represión policíaca, una lucha —proseguida luego sin demasiado éxito durante treinta años— en que el avance comunista era contrarrestado mediante la acción de dependencias policiales pronto famosas por su indiscriminado uso del tormento, y que a falta de comunistas no desdeñaban prodigar sus atenciones a desafectos de otras orientaciones políticas. Esta voluntad de intervenir para fijar no sólo la conducta sino el pensamiento de los gobernados era profundamente innovadora también en cuanto a sus fines: implicaba la instalación de una tutela que, impuesta en nombre de las Fuerzas Armadas, actuaba, aunque no declaradamente, en beneficio de ciertas fuerzas políticas y sociales. El gobierno militar se transformaba entonces en integrante de un sector político: por ello declaraba imposible aceptar ciertas candidaturas, cuyo éxito implicaría el fracaso de la revolución misma. A través de la discriminación entre los candidatos y partidos, la tutela prosigue, entonces, más allá del retorno a la normalidad: el futuro gobierno, que deberá su origen a la aceptación que de su postulación ha hecho el gobierno revolucionario, no podrá invocar ya un origen puramente electoral. Así, la eliminación de candidatos radicales y la decisión radical de no participar, en esas condiciones, de la lucha comicial coloca bajo una luz ambigua a cuantos intervienen en ella, por dura que sea su crítica de la gestión revolucionaria. Todos ellos gozan de los beneficios de una legalidad que sólo es concedida a quienes son juzgados —con muy singulares criterios— dignos de ella.

En estas condiciones se realiza la campaña de 1931; se constituye un grupo electoral opositor tolerado, la Alianza Ci-

vil, integrada por el Partido Socialista, que, adversario de Yrigoyen, no había sido sin embargo revolucionario, y el Demócrata Progresista, que había acompañado al gobierno revolucionario durante las primeras etapas de su gestión. Candidato presidencial de la Alianza era el doctor Lisandro de la Torre. Frente a la Alianza Civil, una coalición en la que volvían a encontrarse los partidos de la Federación Democrática Nacional (dentro de la cual predominaban cada vez más los conservadores) proponía al general Justo, apoyado también por el sector antipersonalista del radicalismo. El gobierno no ocultaba su apoyo a esta última solución, victoriosa en comicios en los que hizo su aparición, todavía discreta, el fraude. El triunfo de Justo no podía satisfacer, sin embargo, sinceramente al presidente provisional (y no por la razón que éste dio, a saber, que era poco edificante que a la etapa revolucionaria sucediera el gobierno constitucional de un jefe militar revolucionario). Por el contrario, para el general Uriburu y sus amigos la solución tenía el defecto de ser escasamente revolucionaria; sólo el hecho de que no pudieron encontrar otra salida mejor, y que no podían retardarse en su búsqueda ante la impaciencia de un Ejército sabiamente maniobrado por el general Justo, los movió a dejar abierto el camino para éste.

Si el gobierno de Justo no expresaba lo que la revolución había creído ser, representaba lo que la revolución en los hechos había sido: el retorno del poder a los grupos dirigentes tradicionales. Apoyaba al presidente una sólida mayoría parlamentaria, menos heterogénea de lo que los rótulos políticos permitían suponer; la coalición oficialista mostró, en los años que siguieron, una solidez muy grande nacida sobre todo de la coincidencia en una política económica. En efecto, el general Justo, al asumir el gobierno el 20 de febrero de 1932, halló al país en crisis; de esta circunstancia que podía aparecer desfavorable hizo la fuente de su fuerza política; su éxito consistió en armar una maquinaria política conservadora, apoyán-

dose para ello en la penuria económica nacional y mundial. Esta hazaña fue realizada por sus colaboradores con un virtuosismo técnico del que no habrían sido capaces, sin duda, los radicales derrocados en 1930; pocas veces tuvo el país tan talentosos dirigentes de su política económica como en este período.

La situación había ya exigido innovaciones esenciales durante el gobierno provisional: a él se debe la instalación del control de cambios. Pero eso era insuficiente frente a la crisis. Esta había afectado a otros sectores de nuestra vida económica y financiera, que era preciso rehabilitar. La crisis había penetrado en el país a través de su comercio exterior; a lo largo de su desarrollo tendía a afectarlo cada vez más. Las naciones de las que dependíamos económicamente —y en primer término Gran Bretaña— tendían a formar sistemas comerciales cerrados; en este sentido fue decisiva la conferencia de Ottawa y la creación de preferencias imperiales. ¿Los resultados de la conferencia afectaban tan seriamente como se decía a la exportación argentina? He aquí un punto algo dudoso: el reemplazo de nuestras carnes con productos equivalentes de los dominios no parecía tan fácil como habría podido suponerse a primera vista. En todo caso, la nueva política británica provocó un pánico acaso demasiado insistentemente ostentado para ser del todo sincero: la Argentina —se decía— debía incorporarse sin reservas al nuevo bloque, en las condiciones que le fijarían quienes lo habían estructurado, o buscar —con pocas esperanzas de hallarlos— nuevos desemboques para su saldo exportador. Estas razones eran la justificación anticipada del pacto Roca-Runciman, concertado en 1933 por un plazo de tres años, por el cual, a cambio de un compromiso de no disminuir la cuota de importación de carne argentina (compromiso cuya fuerza obligatoria estaba limitada por otras cláusulas del tratado), la Argentina se avenía a utilizar el producto de esas exportaciones en el mercado

británico y asumía obligaciones adicionales que significaban una aceptación total de las exigencias inglesas. De esta manera el gobierno de Justo coronaba una política pro británica que lo había caracterizado desde su origen (en tanto que el de Uriburu había mostrado menor fidelidad a nuestra metrópoli económica tradicional). El pacto, que reestructuraba nuestro comercio internacional, debía ser complementado con medidas reguladoras de la producción. Nacieron así las diferentes juntas reguladoras, la subvención interna de los precios agrícolas y una reestructuración del sistema impositivo, que tuvo su punto más importante en la creación del impuesto a la renta. Ella permitió la elaboración de una política anticíclica de gastos públicos, moderada por el temor a la inflación, que tuvo su expresión más válida en la creación de una red caminera. Pero todo el sistema debía encontrar su coronamiento en la reforma monetaria. Esta consistía, en primer término, en una desvalorización del peso, destinada a mejorar los precios internos de nuestros productos de exportación. Para el futuro se creaba una institución reguladora de moneda y crédito, el Banco Central, sociedad mixta cuya paternidad es atribuida por entero, por sus adversarios, al técnico británico Sir Otto Niemeyer, quien según los defensores de la creación bancaria habría elaborado tan sólo un proyecto, modificado en el del Poder Ejecutivo.

Estas creaciones permitieron alcanzar la estabilización económico-financiera, pero tuvieron un segundo propósito, que cumplieron con igual eficacia: incidir en nuestra estructura económico-social acentuando su desigualdades. Como observa el doctor Pinedo, la desvalorización argentina fue la única de la época que no se propuso tan sólo salvar las consecuencias del derrumbe de los precios internacionales de los productos de exportación, sino además mejorar la situación de los productores de esos bienes de exportación respecto de otros grupos internos. Consecuencia de ello, sigue señalando

el doctor Pinedo, fue la baja del nivel de ingresos del sector asalariado, y una baja también sensible para el sector de clase media a sueldo fijo. Estas conclusiones exactísimas parten, sin embargo, de una imagen excesivamente panorámica del sector privilegiado. De esos productores agrícolas y ganaderos para la exportación, no todos iban a beneficiarse con la política económica oficial; por el contrario, ésta estaba orientada de modo tal que también aquí sus beneficios debían recaer en una minoría. En cuanto a la agricultura, el precio mínimo aseguraba la subsistencia de un sistema de arrendamientos y comercialización que dejaba muy poco al trabajador de la tierra; esta situación, que no era nueva, suscitó protestas escasas, salvo en aquellos momentos en los cuales el poder político se ponía abiertamente al servicio de esas estructuras de comercialización (por ejemplo, al oponerse a la difusión de los elevadores cooperativos). En la ganadería, sobre todo, esa situación estaba destinada a provocar vivas protestas, pues era un sector de nuestros grupos dirigentes tradicionales el brutalmente apartado del núcleo privilegiado por la nueva política económica. Esa diferenciación entre los hacendados, comenzada en rigor desde que el frigorífico, constituido en comprador casi único, reestructuró el mercado ganadero, se transformaba ahora en el resultado deliberado de una política económica oficial; el gobierno, que declaraba tener al respecto las manos atadas por las cláusulas del convenio Roca-Runciman, se mostró por otra parte escasamente dispuesto a utilizar el escaso margen de libertad que sus disposiciones le dejaban para llevar algún alivio a los ganaderos no privilegiados.

Esta política de predominio económico de ciertos grupos tuvo manifestación más clara en las leyes de coordinación del transporte urbano; por ellas se hacía imposible la competencia que las grandes empresas debían enfrentar por la difusión del transporte automóvil. Se hizo aquí más evidente un ele-

mento que completaba el cuadro poco edificante de la política argentina: la corrupción, que iba a culminar en el otorgamiento, en circunstancias particularmente escandalosas, de nuevas condiciones a las empresas concesionarias de electricidad de la capital.

Esa política económica se complacía, por otra parte, en herir sentimientos de orgullo nacional, que acaso habían encontrado expresión algo ingenua en el período radical (salvo cuando juzgaba oportuno halagarlos y explotarlos; así, el punto de partida de las innovaciones eléctricas fue una "nacionalización", que de pronto pareció urgente, de las empresas). Eran características al respecto declaraciones como la del vicepresidente de la República, que subrayaba vigorosamente nuestra dependencia económica de Gran Bretaña, comparando nuestra situación con la de territorios incorporados a su imperio (comparación exactísima, aunque era notable que se hallase en ella un motivo de complacencia). Esa política no era, no podía ser, una política popular. Sin embargo, aunque abrumadoramente repudiada, no era intensamente resistida. Encontramos aquí un rasgo permanente de este período: la debilidad de todas las actitudes políticas que no son expresión de las clases privilegiadas tradicionales. Aunque ello se manifiesta, sobre todo, en las vacilaciones de pensamiento y conducta del radicalismo, en rigor excede los límites de ese partido. En otros movimientos no oligárquicos, una lucidez que no siempre era mayor iba acompañada de una energía igualmente escasa. Entre esos movimientos habría que señalar, en primer término, el sindical. La CGT había dejado atrás los compromisos que habían hecho la debilidad de dos anteriores nucleamientos sindicales: no identificada ya ni con el anarquismo ni con el socialismo no reemplazaba, sin embargo, con nuevas orientaciones o tácticas de lucha las que así superaba. De este modo, si fue agrupando a núcleos obreros cada vez más numerosos, la dirección que impuso al movimiento fue de una

cautela extrema. Tal situación facilitó una reconquista de los sindicatos por grupos vinculados a partidos políticos: en este sentido ocuparon el primer lugar el socialista y el comunista. Pero tampoco ello agregó combatividad a la dirección sindical, porque también la de los mismos partidos políticos que tendían a captar en su beneficio al movimiento obrero era cada vez más limitada. El socialismo, artificialmente acrecido en su representación parlamentaria como consecuencia de la abstención radical, era víctima de una perplejidad de la que era incapaz de salir: partido sin vocación revolucionaria, su orgulloso aislamiento dentro de la política nacional le privaba de posibilidades políticas que no fuesen, precisamente, las revolucionarias. Sin duda, sus protestas parlamentarias documentaron paso a paso el avance de una política que consideraba nefasta; dada la gravedad de la misma, cabe dudar que esa fuese la única respuesta adecuada. El comunismo, que siempre había contado mucho menos de lo que gustaba de suponer la derecha, se encontraba al borde de una ilegalidad que prefería seguir orillando; esta circunstancia y la adhesión a políticas planeadas dentro de un contexto europeo, pero carentes de adecuación a la situación local, le restaron posibilidades de expansión.

El radicalismo también enfrentaba su propio laberinto de perplejidades. Partido mayoritario, seguido por la adhesión de enormes masas populares que todavía tuvieron ocasión de manifestar su presencia en ocasión de la muerte de Yrigoyen, a mediados de 1933, había renunciado a utilizar esa situación en la lucha electoral, que conservaba sólo a medias abierta. Pero no había logrado reemplazar con otro ese camino de lucha: las revoluciones de signo radical fracasaron al nacer, la agitación popular encontraba bien pronto un límite, hecho más cercano por una situación de penuria económica que, si acrecentaba el descontento, acentuaba también el temor. En tales condiciones el retorno a la lucha electoral parecía inevitable,

y tuvo lugar por decisión de la convención radical en enero de 1935. Era el retorno de un vencido, dispuesto a aceptar las condiciones que en el reparto del poder legal le fijaría su enemigo vencedor.

Esta ineficacia e incoherencia de la resistencia a la política de las minorías se traduce también en el plano ideológico. Las tentativas de repensar la situación vinieron de movimientos ellos mismos minoritarios, y respondían a dos orientaciones: una, al liberalismo conservador; la otra, al nacionalismo.

En la primera domina Lisandro de la Torre. El recio parlamentario comenzó en 1933 un combate apasionado contra la política oficial de carnes; hablaba, como dijo una vez, en respuesta al ministro de Agricultura, "en defensa de la ganadería argentina". Esa defensa de los hacendados, uno de los actos políticos que tradicionalmente se habían realizado en el país con mayor honra y provecho, se tornaba peligrosa cuando esos hacendados pasaban a ser esclavos de sus antiguos aliados. Hasta qué punto lo era tardó en descubrirlo su nuevo paladín: su defensa de "los señores Grondona y Sansinena", de los ganaderos a los que atribuía una extraña incapacidad para defender sus propios intereses, llevó a una tensión política que concluyó en 1935 con el asesinato del senador Bordabehere en pleno recinto, hecho que las autoridades mostraron escaso deseo de aclarar. A través de esa dura experiencia, De la Torre debía descubrir que había tocado en el centro mismo de la política oficial, orientada en beneficio de inversionistas extranjeros (en este caso las empresas frigoríficas) y los mínimos grupos nacionales admitidos a compartir su prosperidad.

Ese descubrimiento es colocado, por una nueva vertiente nacionalista, en el centro mismo de su problemática. El nacionalismo había surgido en el país como réplica local, no tanto del fascismo, cuanto de las dictaduras conservadoras y militares que surgían abundantemente en Europa invocando una inspiración fascista más o menos directa. Había comenzado,

entonces, por ser una de las soluciones que se abrían a las clases dirigentes tradicionales ante la imposibilidad de gobernar en el marco de un constitucionalismo liberal lealmente practicado. Hostil a las mayorías populares, de cuya pretensión a gobernar esperaba consecuencias catastróficas, ese movimiento era nacionalista en la medida en que fundaba el derecho al monopolio del poder por las minorías no ya en su superioridad cultural, que podía perderse (y que había sido la justificación vigente en la etapa liberal), sino en la participación hereditaria en una suerte de esencia nacional intransferible. Ese nacionalismo ideológico se doblaba, sin duda, de una política internacional también nacionalista, pero sobre todo en este aspecto permanecía estrictamente limitado al plano político. Para una actitud diferente no encontraban nuestros nacionalistas estímulo ni en Italia, que mantenía aún como base no escrita de su política internacional la alianza desigual con Inglaterra heredada del pasado liberal, ni mucho menos en los demás países europeos sometidos al autoritarismo de derecha. En este sentido nuestro nacionalismo revelaba en cada una de sus actitudes su condición de fruto de la evolución interna de la tradición liberal de nuestros grupos dirigentes más arraigados (una condición que puede ir descubriéndose paso a paso, por ejemplo, en el excelente libro de memorias de Carlos Ibarguren).

Pero algunos nacionalistas iban a elaborar nuevas posiciones políticas, que en 1934 encontrarían expresión sistematizada en el estudio sobre *La Argentina y el imperialismo británico*, de Rodolfo y Julio Irazusta. Ahora la actitud pro británica se descubría también en su dimensión económica, pero era interpretada aún, al modo del nacionalismo antes vigente, como el fruto de un abandono de la tradición nacional, sacrificada a preferencias culturales exóticas. El papel de la oligarquía es subrayado vigorosamente en el trabajo de los Irazusta, pero esa oligarquía es, antes que un grupo social, un grupo ideoló-

gico. Este criterio interpretativo, a la vez que lleva a conclusiones históricamente falsas (para los Irazusta la oligarquía nace en la constituyente de 1824, pero de ser esto exacto no puede atribuírsele la paternidad de una política pro británica que viene de más atrás), alimenta las más peligrosas ilusiones. La denuncia de las fallas morales de la clase dirigente, tan insistente en los Irazusta como en De la Torre, se acompaña de la implícita esperanza de que una regeneración interior de ese grupo le permitirá cumplir un papel director que sus críticos internos no se proponen discutirle. Contraprueba de esta actitud la proporciona la posición de Julio Irazusta frente al peronismo, recusado por haber hecho de la que debía ser revolución moral una revolución social. De todas maneras la crítica llevada adelante contra el restaurador régimen conservador era particularmente eficaz en lo inmediato en la medida en que no discutía sus premisas, sino mostraba cómo éste las traicionaba minuciosamente. Una prédica inspirada en puntos de vista análogos comenzó dentro del radicalismo, a partir de 1935, el grupo de FORJA, que iba a encontrar mayor eco en la opinión pública independiente que dentro del partido.

No convendría, sin embargo, exagerar la eficacia de estas protestas. En ningún momento trabaron seriamente la marcha de la política oficial, que hasta 1935 se movió con extrema libertad en la atmósfera enrarecida por la ausencia de las mayorías populares. Esa circunstancia misma mantuvo en cierta corrección formal a la vida política, ya que salirse de ella no era todavía necesario. Los signos premonitorios de lo que vendría luego podían advertirse, sin embargo, en el modo expeditivo que había adoptado la coalición gobernante para resolver sus problemas internos, y señaladamente el creado en la provincia de Buenos Aires por el gobernador Martínez de Hoz, apartado de su cargo en forma violenta con la evidente complicidad del gobierno central. Pero el retorno del radicalismo a la contienda electoral creó un serio problema, cuan-

do el doctor Sabattini alcanzó la gobernación de una provincia de tan arraigada tradición conservadora como Córdoba. A partir de entonces, el gobierno de Justo y sus auxiliares provinciales —entre los cuales se distinguirá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco— se dedican preferentemente a organizar una máquina electoral basada cada vez más descaradamente en la violencia. Intervenciones como la de Santa Fe, y un fraude que llega a extremos desconocidos en un país dotado de una rica tradición al respecto, son cada vez más los rasgos dominantes de la vida política. Este nuevo sesgo va acompañado de una corrupción creciente, que afecta muy rápidamente al radicalismo vuelto a la vida parlamentaria. Violencia y corrupción explican el rápido ascenso político de figuras rodeadas del más justo desprestigio, utilizadas antes en niveles locales para asegurar, con medios que requerían no ser vistos demasiado de cerca, la eficacia de ciertos planes electorales. Al final de este proceso, el señor Barceló podía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, excediendo así en mucho el teatro habitual de sus poco honrosas hazañas...

Desde 1936 la política —en su sórdida cotidianidad— se transforma en la preocupación central del gobierno de Justo. Desprovisto ya de otra finalidad que no sea la de sobrevivir, ese gobierno se muestra cada vez más dispuesto a sumarse a la ola de conformismo y cerrada reacción que es la consecuencia más evidente de la revolución de 1930. Ya desde su ascenso al poder, el general había advertido qué libertad de acción podía nacer para él de emplear a fuerzas no estrictamente partidarias como contrapeso e instrumento de extorsión sobre las organizadas políticamente. Aunque sin simpatizar con las tendencias del nacionalismo filofascista, cuidó de asegurarles en la vida argentina un lugar mayor que el que espontáneamente les otorgaba su real gravitación. Del mismo modo vio con beneplácito y concedió protección activa al ascenso de la Igle-

sia Católica. Ese ascenso tuvo manifestación impresionante en el Congreso Eucarístico de 1934; ya antes de esa fecha venía mostrando signos muy claros en la organización de la Acción Católica, destinada a ganar a sectores numéricamente muy importantes de las clases medias urbanas y a ejercer influjo a veces determinante en ciertos niveles de la administración pública. Fue ocasión ese mismo ascenso de las primeras manifestaciones de un conformismo intelectual capaz de incitar a los más desconcertantes mimetismos: con motivo del Congreso Eucarístico, un muy nutrido grupo de profesores de nuestra Universidad, algunos de ellos rodeados de una antigua y bien fundada reputación de impiedad, confesaron su devoción a Jesús Sacramentado y su propósito de orientar toda su enseñanza según las luces sobrenaturales que de El irradiaban. Esta abdicación del liberalismo conservador, que había sido una de nuestras más arraigadas tradiciones ideológicas, explica el ímpetu con que entraron en nuestra vida ideológico-cultural corrientes defendidas demasiado frecuentemente por expositores mediocres y mediocremente informados: detrás de esa victoria demasiado fácil estaba el miedo de la minoría dominante, el conformismo de las mayorías golpeadas a la vez por una coyuntura económica hostil y una organización política orientada en su daño. En ese clima tan peculiar la adhesión a la Iglesia como elemento aglutinador significa a la vez el disgusto por la realidad presente en sus formas más evidentemente patológicas y desvitalizadas y una resignada aceptación de sus elementos fundamentales. Es por lo tanto injusto ver en ella tan sólo el fruto del apoyo, sin duda muy real, del poder político: la contraprueba se encuentra en lo ocurrido bajo el peronismo, cuando el apoyo gubernativo no impidió a la Iglesia ir perdiendo paulatinamente buena parte del influjo que había ganado en la etapa anterior.

Luego de 1936 esa ola de derechismo impulsa al mismo gobierno, que se había supuesto capaz de utilizarla y controlarla.

La guerra de España acrecienta el temor de los grupos dominantes, que a la noción abstracta de "terror rojo" pueden sustituir la imagen concreta del "gobierno de la chusma", tantas veces melancólicamente profetizado. La proscripción del comunismo, el empleo del vocabulario militante de la derecha española y francesa (hasta la invención del "frente nacional" que debía aglutinar a los partidos situacionistas en respuesta al "frente popular", momentánea veleidad de algunos grupos opositores), tales fueron los preparativos del grupo gobernante para la renovación presidencial de 1938. En ella el oficialismo consagró la fórmula integrada por Roberto Ortiz —radical antipersonalista, ex ministro de Alvear— y Ramón Castillo —conservador de Catamarca—, que se opuso (con la victoria asegurada por una falsificación electoral repetidamente probada) a la radical formada por Alvear y Mosca —otro ex antipersonalista—. La candidatura del doctor Ortiz recibió el primer espaldarazo público en una cena de la Cámara de Comercio Británica, lo que no dejó de suscitar críticas, aunque no violentas protestas, de una opinión pública ya resignada a todo y despojada de las últimas ilusiones que podía haber conservado acerca de la calidad de sus gobernantes.

Si el gobierno de Ortiz era el fruto de la hora más oscura de la administración de Justo, de ninguna manera se mostró totalmente solidario con ella. La evolución de la crisis mundial, que primero parecía empujar a soluciones de extrema derecha, sugería una orientación nueva: los países con los cuales el nuestro acababa de intensificar aún más sus lazos se preparaban para el choque con las potencias fascistas; en ese contexto se ubican los esfuerzos del presidente Ortiz para volver a una práctica sincera de la democracia representativa. Esos esfuerzos, primero cautelosamente insinuados —la cautela era indispensable, porque los primeros perjudicados por la nueva política eran los partidos que habían dado el poder al doctor Ortiz en elecciones masivamente fraudulentas—, se

afirmaron progresivamente, hasta que en 1940 culminaron con la intervención a la provincia de Buenos Aires, que era el bastión más importante de la máquina electoral organizada en la época anterior. Esta política nueva tenía consecuencias también en planos menos estrictamente electorales; nacía de una confianza en las mayorías populares que, aunque acaso esperaba más de sus defectos que de sus virtudes, contribuía a aflojar la tensión que había caracterizado a la etapa anterior. Con un radicalismo domesticado primero por una abstención estéril y luego por la complicidad en los aspectos más turbios de la restauración conservadora, el acuerdo parecía posible, y el radicalismo seguía siendo la expresión política de las mayorías.

Sin embargo, no pudo ser. La enfermedad de Ortiz abrió el paso a la sucesión de su vicepresidente. Este formó primero un gabinete, en el cual la figura dominante era la del doctor Pinedo. A la vez que retornaba a los usos político-electorales consagrados luego de 1930, la nueva administración parecía tomar en cuenta las enseñanzas de la crisis mundial y se acercaba a Estados Unidos, potencia que, según se advertía, iba a heredar la posición hegemónica que Inglaterra iba perdiendo aun en este rincón remoto de Sudamérica. Esta política no era, sin embargo, la del doctor Castillo, que una vez seguro en el poder pasó a mostrar simpatía por las potencias del Eje, en las que veía, un tanto candorosamente, las respuestas de los puntos de vista dominantes entre los conservadores argentinos. Esta posición colocaría a la Argentina en situación de tensión con las demás naciones americanas sólo luego de la entrada en guerra de los Estados Unidos. En la reunión de Río de Janeiro el canciller Ruiz Guiñazú se opuso a toda resolución obligatoria de ruptura con las naciones fascistas. La Argentina, acompañada sólo temporariamente por Chile, mantuvo esas relaciones diplomáticas. Esta actitud que repetía la asumida durante la Primera Guerra Mundial (y como en

aquella ocasión no disgustaba a Gran Bretaña, que no deseaba la consolidación de un frente americano dirigido por la potencia aliada y rival) tuvo repercusiones inmediatas de orden interno.

El gobierno de Castillo utilizó la emergencia bélica llegada a América para decretar el estado de sitio. Al amparo de esta situación excepcional acentuó sus características autoritarias, sin cuidarse (como lo había hecho el presidente Justo) de conservar los necesarios apoyos en el cuerpo social. Si por una parte conservaba intacta su impopularidad entre las mayorías, por otra imponía despóticamente sus puntos de vista a los grupos que, en el pasado, habían apoyado la restauración conservadora. Convencido de que la posesión de gobierno significaba por sí una fuerza inmensa, seguro de contar con el apoyo del Ejército, en el cual su política de neutralidad era extremadamente popular, el presidente Castillo proclamó su ideal de gobierno, definiéndolo como la "unanimidad de uno". Pero lo que el presidente tomaba por firmeza no era sino testarudez de anciano caprichoso: otro testimonio de ella se tuvo en la tenaz presión ejercida por el presidente Castillo para imponer como sucesor en el gobierno al doctor Robustiano Patrón Costas. Esta candidatura, recibida con extrema hostilidad por la opinión mayoritaria, que veía en el doctor Patrón Costas a un representante de las tradiciones feudales de la aristocracia salteña, no contaba tampoco con apoyos serios en el grupo conservador. Para imponerla, Castillo debió intervenir la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, el conservador Rodolfo Moreno, aspiraba también, cada vez con menor disimulo, a la sucesión presidencial. Pero el candidato por cuyo triunfo el presidente estaba dispuesto a ejercer presiones sin precedentes en el país, si era amigo de éste no era de ningún modo partidario de su política; era por el contrario notorio que rectificaría el rumbo de nuestra actitud internacional en favor de Estados Unidos, a cuyo servicio había puesto ya en ocasiones

anteriores su influjo político. Esta seguridad no disuadió al doctor Castillo de comprometer toda su fuerza para lograr el triunfo del doctor Patrón Costas.

Por su parte, desde que fue apartado de su Ministerio de Hacienda, el doctor Pinedo había comenzado a trabajar por una conciliación nacional; a estos esfuerzos, bien pronto fracasados, siguió el resurgimiento político del general Justo, organizado por él mismo con la destreza que le era habitual, al definir sus tendencias internacionales como de adhesión total a las Naciones Unidas. Justo contó en su infatigable aunque discreta campaña con el apoyo de grandes diarios y llegó a causar alguna alarma entre quienes recordaban hasta qué punto su gestión de gobierno había creado los males que ahora se proclamaba dispuesto a combatir. Pero la muerte del general frustró su última aventura política. La fuerza de Justo había residido en ofrecer para el cambio de orientación política su ascendiente en un sector del Ejército; algunos radicales creyeron que en esta función podía ser reemplazado por otro jefe militar, y entraron en conversaciones, que se anunciaban fructíferas, con el ministro de Guerra del doctor Castillo...

Mientras tanto se esbozaba otra táctica, que reeditaba, en un clima diferente, el anunciado frente popular de 1936: la unión de los partidos opositores. Hizo así su primera aparición en la vida política argentina la Unión Democrática, que encontraba sus puntos de coincidencia en política exterior bajo la forma de adhesión a las Naciones Unidas y en la interior bajo la de lucha contra el sistema de fraude. Pero esta Unión Democrática heredaba los esfuerzos de movimientos que, como el de Acción Argentina, se habían organizado primero en torno de la búsqueda de soluciones políticas mediante la adhesión de núcleos conservadores disidentes frente a la política Castillo; esta circunstancia, junto con el clima creado por la Segunda Guerra Mundial (y la masiva propaganda que buscaba persuadir de que todo problema político o social había

pasado a segundo término y lo único verdaderamente importante era ayudar a la victoria aliada), señaló el comienzo de una involución política, de parte de los grupos opositores, que no iba a detenerse ya. Tímida en su acción, la oposición popular a la restauración conservadora concluyó por ser catequizada por ésta y aceptar implícitamente, buscando evitar algo peor, los rasgos esenciales de esa restauración. En tales condiciones, el triunfo de la coalición opositora, en el que no creían ni aun sus organizadores, era cosa imposible; se trataba tan sólo de colocarse en situación más favorable para la redistribución del poder político que necesariamente iba a tener lugar en la Argentina luego de la victoria de las Naciones Unidas, y en la cual se aceptaba ya resignadamente que actuaría como árbitro el candidato que gozaba del favor del doctor Castillo. Ello explica que la candidatura de Patrón Costas, no querida en rigor por nadie, se lanzase con el apoyo ostensible de las figuras más influyentes de nuestra vida económica y de nuestros medios profesionales y universitarios. El manifiesto de adhesión a ella pudo ser utilizado en la etapa siguiente como un medio de hacer callar a opositores demasiado molestos; es acaso el producto más típico de una época en que el pulso de la vida política argentina alcanzó tono insólitamente bajo.

De la revolución militar a la revolución peronista

En este momento reapareció el Ejército. En rigor no había desaparecido nunca: fuerza tutelar de nuestros gobiernos, sólo a su apoyo debían éstos la supervivencia. Ahora lo retiraba al doctor Castillo: un paseo militar por el centro de Buenos Aires concluía, en medio de una indiferencia plomiza, lo que había comenzado trece años antes otro desfile más calurosamente recibido. ¿Concluía realmente? En sus primeras etapas el

gobierno militar repitió, más afiebradamente, las oscilaciones entre las mismas alternativas que había enfrentado el de Castillo. El 4 de junio se producía la Revolución; en la apresurada reunión de gabinete convocada por el presidente Castillo su ministro de Guerra, el general Ramírez, le hizo saber "con la ruda franqueza del soldado" que era uno de los organizadores del movimiento. Dos días después era presidente provisional de la República, en sustitución del general Rawson (jefe visible del movimiento), desplazado no se sabía si por haberse manifestado favorable a las Naciones Unidas o por haber incluido en su gabinete a un ministro de Hacienda que les era demasiado abiertamente hostil. Desaparecido Rawson, no desaparecieron las ambigüedades. Todo el año 1943 se gastó en una lucha interna de tendencias, que tuvo su primera definición con motivo de la carta que el ministro de Relaciones Exteriores del nuevo régimen, representante en el gabinete de la corriente favorable a las Naciones Unidas, dirigió a su colega norteamericano. Cordell Hull repuso al pedido de auxilio en forma por demás hiriente; la publicación de esa insólita correspondencia diplomática provocó la renuncia del ministro Storni (comienzos de setiembre). En octubre hubo un nuevo avance de las tendencias opuestas a las Naciones Unidas: una crisis de gabinete afirma al ministro de Guerra, general Farrell y a su colaborador, el coronel Perón... A comienzos de 1944 el gobierno de Ramírez, ante una maniobra extorsiva angloamericana (que combina la amenaza de revelar los poco claros manejos de ese gobierno en relación con Alemania con otra apenas velada de acción militar) rompe relaciones con lo que resta del Eje. La indignación de la corriente neutralista es utilizada para provocar el alejamiento primero provisional y luego definitivo de Ramírez; lo reemplaza Farrell, y tras de él se acentúa el influjo de Perón. El resultado inmediato de esta definición es la instalación de un régimen clerical-autoritario, que recuerda en muchos aspectos, más que al fascismo, a la cons-

telación ideológica del Estado francés efímeramente erigido sobre las ruinas de la Tercera República. Ese régimen funciona en un aislamiento diplomático casi completo, que dura a lo largo de todo 1944.

Ese régimen que ahora se esboza parece ser la salida legítima del proceso inaugurado en 1930; en él alcanza su punto más alto la ola ultraderechista comenzada con la primera revolución militar. En el plano político y cultural esas tendencias continúan a las dominantes en la etapa anterior (medidas como la disolución de los partidos políticos y la implantación de la enseñanza religiosa son parte de una restauración de la "Argentina raigal", que es llevada adelante, con heroico desprecio del ridículo, por catecúmenos a veces recientes del catolicismo autoritario). Particularmente afectada por esta campaña es la enseñanza oficial, desde la primaria, donde el celo depurador del señor Olmedo hace víctimas numerosas entre los maestros, hasta la universitaria, donde sucesivos interventores dotados de perversas inclinaciones estéticas dan vida a las más variadas mascaradas retrospectivas. La acción de los primeros paladines de la unidad católica en esta etapa de la vida argentina es tan escasamente feliz que sus mismos mandantes deben relevarlos y tratar de poner un poco de orden en el caos que parecen provocar complacidos. Pero si esa restauración exalta un rígido control de la vida nacional por parte de grupos aristocráticos terratenientes, también está dispuesta a condenarlos, apenas se muestran más dispuestos a moverse en la línea de su reciente apostasía liberal que a recordar las largas centurias en que (según algo fantasiosas reconstrucciones históricas) habían ganado honra y provecho al servicio de Dios y del Rey. Los paladines de la restauración (salvo excepciones) no pertenecen en general a esa aristocracia de arraigo secular; sus tradicionalismo forma parte más bien de las fantasías compensatorias de una clase media demasiado reciente, y mal integrada en el cuerpo nacional; su devoción teórica por las cas-

tas del viejo linaje encubre a menudo un resentimiento que no espera sino la oportunidad de manifestarse. En tales circunstancias el desencuentro era inevitable: los grupos dominantes, atemorizados en el pasado por el espectro de la revolución popular, habían podido simpatizar con el fascismo en ascenso, pero no estaban dispuestos a complicarse en su ruina ya evidentemente próxima, ni a intentar una limitación tardía, destinada a ser poco apreciada por nuestros tradicionales interlocutores en el plano internacional. El mismo año 1944, que vio la punta extrema de la restauración, asistió también al espectáculo nuevo de un jefe conservador ortodoxamente oligárquico y fraudulento procesado junto con oscuros militantes comunistas, por acciones conspirativas realizadas en común.

Aislada en el plano internacional, la revolución tendía a aislarse también en el interno: no contaba con el apoyo de ningún grupo influyente, ni tampoco con el de la opinión pública mayoritaria. Su política económica pagaba en parte las limitaciones del nacionalismo moralista, en la incapacidad de comprender el peso y la estructura de las fuerzas que combatía movida de justa indignación, pero que no sabía cómo enfrentar adecuadamente (característico fue el manejo del problema eléctrico, llevado con tales titubeos que abrió el camino a soluciones que respetaban, en lo esencial, las consecuencias de los acuerdos alcanzados en 1936); sin lograr entonces modificaciones tangibles, despertaba sin embargo muy vivos recelos en los grupos económicamente dominantes.

Al cerrarse 1944 parecía enfrentar los mismos problemas ante los cuales había sucumbido el régimen de Castillo, y tendió a buscarles solución por los mismos caminos que presumiblemente iba a recorrer el proyectado sucesor constitucional de éste. Se trataba entonces de insertarse en la realidad nacional e internacional mediante la democratización del régimen y su alineación al lado de las Naciones Unidas. Esta operación fue llevada adelante con rapidez en los primeros

meses de 1945: la decisión de emprenderla correspondió, en primer término, al coronel Perón, que en la etapa anterior había acaudillado a los grupos más decididamente neutralistas del Ejército y gracias a ello había conservado su ascendiente. El tinglado del nuevo orden clerical-fascista fue desarmado con sobria seguridad y muy escaso trabajo; los partidos políticos volvieron a conocer halagos de las esferas gubernativas: a un año de comenzada la Argentina nueva, el coronel Perón gustaba de admitir públicamente que la Argentina seguía siendo la de siempre, que en ella sólo cabían políticamente conservadores y radicales; este reconocimiento era, muy evidentemente, una propuesta de unir fuerzas con alguno de esos partidos para asegurar la sucesión constitucional del movimiento revolucionario. Mientras éste enderezaba así su política interna y desmantelaba la máquina de conquista de la enseñanza pública devolviendo la autonomía a las universidades, corregía también su política internacional, declarando en marzo la guerra a Alemania y Japón. Gracias a ello la Argentina reaparecía en la comunidad internacional y americana. La presencia temprana de divergencias entre los futuros vencedores parecía asegurar alguna posibilidad de juego internacional en el mundo que iba a surgir de la victoria aliada.

He aquí un plan político perfectamente razonable, que contó en sus comienzos con la pasiva benevolencia de más de un jefe político tradicional. Pero que terminó por fracasar ruidosamente: la herencia del ensayo político de 1944 era demasiado pesada como para admitir una liquidación discreta y sin consecuencias. Luego de haber sido atacados, los mitos de la Argentina liberal se revelaron dotados de un vigor inesperado: toda una clase media que se había constituido bajo su signo veía con recelo profundo la tentativa quizá no totalmente abandonada de borrarlo de la memoria nacional. A la luz apocalíptica que proporcionaba la criminosa agonía del fascismo, el evangelio del retorno a la "Argentina raigal" adquiría un sig-

nificado amenazadoramente preciso. Por otra parte, esa clase media veía cuanto ocurría en el país desde una perspectiva mundial; no dudaba que la derrota de las potencias totalitarias iba a dejar la misma huella en la conciencia nacional que en la suya propia. A medida que los ejércitos aliados avanzaban en Europa esa clase media adquirió una seguridad, una confianza crecientes; ya la liberación de París, en agosto de 1944, había provocado la reunión de muchedumbres coléricas e impacientes, que exigían, también para la Argentina, la rendición incondicional de los fascistas, representados por el gobierno revolucionario y sus servidores políticos.

Este ímpetu colérico, fruto de la brusca liberación de los temores del año anterior, hizo que el movimiento de oposición escapase de la prudente dirección de los jefes políticos, por otra parte no muy apreciados en el común de los grupos opositores, y los obligó a seguir el tono cada vez más febril de un movimiento que se pensaba capaz de derribar, con su presión creciente, al gobierno militar.

Ese movimiento, la Resistencia, fue la primera de las grandes oleadas populares que en 1945 barrieron la por tanto tiempo serena superficie de la vida argentina. Surgido de un estado de ánimo muy generalizado, no puede identificarse sin más (como lo iba a hacer la versión canónica vigente en los diez años sucesivos) con la resistencia de un grupo privilegiado temeroso de perder su situación de tal. Sin duda, la resistencia sólo alcanzó eco entre la clase media y alta de las ciudades; dentro de ese ámbito comenzó por ser, sin embargo, un movimiento espontáneo, no provocado ni dirigido. Sólo en un momento posterior, que puede ubicarse hacia mediados de 1945, converge con las más tardías oposiciones a la política social del gobierno, y si no adopta posiciones socialmente conservadoras tampoco las rechaza. No las rechaza porque no advierte la importancia que está teniendo el aspecto nuevo de la gestión gubernativa: su lucha se dirige contra un gobierno militar,

autoritario, esencialmente conservador, inspirado —más libremente de lo que él mismo y sus adversarios creen— en el ejemplo fascista. Y el gobierno contra el cual lucha sigue siendo todo eso, pero a medida que la lucha lo aísla de sus posibles apoyos en el cuerpo social tiende a ser algo nuevo y diferente.

Porque no advierte el cambio, la resistencia cree luchar contra un enemigo acorralado. Con brutal franqueza dirige una lucha frontal a través de las universidades devueltas a su autonomía, de las instituciones profesionales, de sociedades locales de las pequeñas ciudades provincianas; a través de la militancia de esas instituciones dotadas de un pasado menos beligerante es toda la clase media la que se levanta en lucha. ¿En favor de qué? De la vigencia de la Constitución, de una democracia no fraudulenta pero tampoco demagógica, en suma, de su derecho a gobernar el país. No duda que en esta lucha el país entero la acompaña, ¿acaso en el pasado el retorno a la democracia representativa, a la práctica sincera del sufragio universal no había sido la única aspiración común a nuestras mayorías populares? El fracaso político de la oligarquía restaurada, el no menos evidente de los gobiernos militares, parecen no dejar abierta otra solución (la misma adhesión de los grupos económicamente poderosos a sus planteos no es interpretada por la resistencia como una tentativa —bien pronto exitosa— de instrumentar sus esfuerzos, sino como el reconocimiento de un cambio necesario en la dirección política del país). Este optimismo, esta ciega confianza, se apoyan por otra parte en una ola de prosperidad, producto de la guerra que, si acelera el ascenso de ciertos sectores de las clases medias, produce otros cambios más importantes y menos inmediatamente percibidos.

Porque no los advierte, la resistencia se prepara para una solución violenta; en junio recibe con alborozo el apoyo de las fuerzas económicas, disgustadas con la política social del gobierno; hacia esa misma época descubre que la embajada de

los Estados Unidos, desde donde habían surgido en el pasado inspiraciones no siempre favorables a soluciones democráticas, alberga a un hombre lleno de santo celo libertador, cuya ruda franqueza supera en brutalidad a la de los soldados que nos gobernaban; el señor Braden se suma a la resistencia, realiza viajes por el interior, es triunfalmente recibido en sedes universitarias desde donde formula inequívocas invitaciones a derribar al régimen militar. El gobierno, que a comienzos de 1945 ha logrado, gracias a humillaciones resignadamente aceptadas (como la tardía declaración de guerra a Alemania y Japón) volver al sistema interamericano y abrirse camino hacia la organización de las Naciones Unidas, tolera también esa inverosímil campaña revolucionaria. De hecho, tolera todo. Su plan político parece encaminarse a un inevitable fracaso; los partidos que aún se consideran populares creen que perderán todo apoyo si no adoptan una total intransigencia frente al régimen militar. Sin embargo, la marcha a la normalización constitucional prosigue: en agosto es levantado el estado de sitio, los partidos (aun el comunista, proscrito desde la época de Justo) se reorganizan a la luz del día y muestran una petulante combatividad. El 19 de setiembre una gigantesca concentración y marcha —la de la Constitución y la Libertad— desfila por las calles de Buenos Aires; por indicación de sus organizadores, cierra todo el comercio de la ciudad; el gobierno, por su parte, patrocina una huelga de transportes, destinada a restar público al acto opositor. El gobierno, que ha abierto sus filas a antiguos militantes de los partidos tradicionales (en el Ministerio del Interior se encuentra ahora el doctor Quijano, radical correntino) descubre pocos días después una vasta conspiración; dispone la clausura de las universidades y apresa a miles de estudiantes encerrados en ellas; el estado de sitio vuelve a regir…

Pero la crisis llega a la misma base militar del gobierno: el 9 de octubre Perón, el poder detrás del trono, debe abandonar

todos sus cargos. Apresado en el Tigre, trasladado a Martín García, parece desaparecer del escenario político. Durante ocho días se entabla una confusa lucha por la sucesión; el jefe del acantonamiento de Campo de Mayo, general Avalos, que ha derrocado a Perón, auspicia una solución radical centrada en el doctor Sabattini, que se muestra remiso a aceptar una herencia tan fuertemente comprometida como la del gobierno militar. Los grupos de la Resistencia favorecen la entrega del gobierno al presidente de la Corte Suprema; el Ejército no se muestra sin embargo dispuesto a abandonar a Farrell. Este —con dudosa espontaneidad— encarga al procurador general de la Nación, Juan Alvarez, que forme un nuevo gabinete. Este ilustre historiador y jurista encara la crisis con el apacible ritmo de un normal cambio de ministerio; tarda días y días en elaborar una lista de candidatos, tomados de las filas conservadoras, o apolíticos de esa tendencia. Mientras tanto, resortes esenciales permanecen en manos de los adictos a la situación caída; en primer término la Policía, que el 12 de octubre disuelve, causando varias víctimas, una manifestación frente al Círculo Militar.

El 17 de octubre esta confusa situación se resuelve en el retorno triunfal de Perón. En ese vuelco había ya mucho de preparado: así lo sostuvo desde ese momento la oposición; y aun la versión canónica peronista vino a reconocerlo implícitamente al subrayar el papel del ex jefe de policía, general Velasco, del coronel Mercante, y sobre todo de la que aún se llamaba Eva Duarte en los acontecimientos que culminaron ese día: su papel sólo podía ser el de haber facilitado, mediante urgentes contactos no sólo con las organizaciones sindicales sino con los antiguos adictos todavía presentes en la administración y el Ejército, el retorno espectacular del jefe derrocado. Pero el discreto favor con que lo que quedaba del Estado, en esa hora de crisis, vio el regreso triunfal de Perón no basta para explicar ese retorno mismo. Este no habría sido posible sin una mo-

vilización obrera, en especial en el cinturón industrial de Buenos Aires, pero extendida también a las demás zonas industriales del país, que era ella misma una novedad total en nuestra historia. Subrayar que esta movilización se vio suscitada desde el poder político, como elemento de apoyo a fuerzas atrincheradas en él y sólo ocasionalmente acorraladas, no significa que ella no haya sido espontánea, en el sentido de que expresaba muy exactamente la opinión de las mayorías obreras. Significa tan sólo que en un país de estructura social fluida y escasamente consolidada también la aparición masiva de una nueva clase en la vida política estaba marcada por el peso decisivo de una organización estatal que por el contrario posee estructura vigorosa.

Pero al lado de ese elemento que unía a la nueva situación con nuestra tradición política, presentaba ésta otros innegablemente nuevos y originales. El peso de la clase obrera en nuestra vida política había sido siempre limitado: ahora parecía tenerlo decisivo. Ello correspondía a cambios económicos lentamente comenzados, mas aceleradamente continuados. Las crisis, al restringir nuestras posibilidades de importación, aumentaron el campo abierto a la industria nacional; la de 1929, más grave y larga que las anteriores, salvada por otra parte gracias a un sistema de control permanente de las importaciones, tuvo en este sentido consecuencias particularmente intensas y duraderas. La crisis misma de la agricultura aseguraba por otra parte a la industria en expansión una mano de obra nacional escasamente exigente en punto a salarios. La guerra acentuó el proceso de expansión industrial, al mismo tiempo que acumuló en el extranjero las reservas de un comercio que tenía ahora balance positivo; las consecuencias de la guerra misma interrumpían el proceso de deterioro de los términos de intercambio: nuestro grano y nuestra carne recobraban nivel en el mercado mundial. La industrialización de guerra, menos que con la baratura del trabajo, contaba con la

capacidad de consumo de una nación a la que volvía la prosperidad y que no podía consumir sino su propia producción industrial.

Esta situación fue aprovechada desde el comienzo mismo del gobierno militar, para alcanzar una política social que tuvo su punto de partida al instalarse el coronel Perón en el Departamento Nacional del Trabajo, el 27 de octubre de 1943. En dos años ese rincón antes oscuro de nuestra organización burocrática se revela como formidable movilizador de voluntades obreras. Ello es el fruto de una política tenaz, que concede beneficios muy tangibles a los trabajadores (extensión de las jubilaciones, ampliación de los convenios paritarios, garantía eficaz contra el despido) y se dedica además a remodelar el movimiento sindical. Este se hallaba dividido en el momento de estallar la revolución de 1943: la CGT había dado lugar a dos organizaciones, la una más moderada que la otra. A la primera, que contaba entre sus organizaciones a la Unión Ferroviaria, se contraponía la que englobaba a dirigentes prestigiosos como los señores Pérez Leirós y Borlenghi, que se orientaban en lo internacional en la línea de la CTAL dirigida por Lombardo Toledano; las tensiones sindicales encontraban por otra parte su eco en el Partido Socialista, al que pertenecían algunos de los más significados dirigentes de ambas corrientes. El gobierno militar comenzó por perseguir imparcialmente a ambas tendencias, devolviendo toda su vigencia a una tradición represiva inaugurada por su predecesor de 1930; el espectáculo de jefes sindicales torturados y detenidos en condiciones particularmente brutales volvió a ser habitual. La política personal de Perón fue al respecto menos brutal y también menos torpe: favoreció el retorno a posiciones directivas de aquellos militantes (cualquiera fuese su posición política) que en lo inmediato apoyaban su gestión. Bien pronto, la organización de nuevos sindicatos para las industrias en expansión y la entrada masiva de nuevos grupos de trabajadores en los gremios tradicionalmente organi-

zados le permitió controlar a esos dirigentes, que sólo podían seguir siéndolo en la medida en que se orientaran de acuerdo con una masa despertada a la conciencia política y sindical bajo el signo de la Secretaría de Trabajo y su política.

Este movimiento obrero, así acrecido en número y gravitación, comenzó por ser tan sólo, en las intenciones de su principal organizador, un elemento accesorio en su estructura de poder. En un primer momento la política social siguió más o menos fielmente el ejemplo fascista, aunque desprovista de toda rígida ortodoxia ideológica. Su justificación teórica era la necesidad de prevenir la revolución social mediante concesiones menores, destinadas a privar de combatividad a la clase obrera; su orientación en los hechos recordaba bastante de cerca a la de la dictadura española de Primo de Rivera, que pudo contar con la benevolencia no desinteresada de los gremios socialistas para un régimen en otros aspectos marcadamente conservador. Pero la circunstancia argentina hacía poco adecuado el ejemplo de lo realizado en los países fascistas frente a un movimiento obrero arraigado y combatido. Aquí la política oficial, lejos de amenguar su combatividad, parecía querer aumentarla, en la seguridad de poderla controlar luego, de acuerdo con sus propias conveniencias políticas. Ello hizo que la política social fuese vista con alarma creciente por los grupos económicamente dominantes, sobre todo cuando, con el estatuto del peón y la congelación del precio de los arrendamientos rurales, se volvió hacia el sector rural. El recelo llegó a ser tan grande que no faltaron hacendados dispuestos a distribuir entre su peonada la prensa comunista; los drásticos proyectos de reforma agraria allí enunciados tenían la ventaja de ser puros proyectos. Del mismo modo, el dinamismo de la situación económico-social impedía un acuerdo estable con los dirigentes sindicales tradicionales, que eran constantemente superados por las nuevas promociones recientemente sindicalizadas.

Esos problemas desaparecieron cuando, en el curso de la "normalización institucional" comenzada en 1945, Perón pasó a proyectar un nuevo equilibrio político, logrado mediante su alianza con algunos de los partidos tradicionales. Ahora también el movimiento sindical estaba destinado a proporcionar tan sólo un suplemento de poder; las relaciones con él debían repetir, en forma más sistematizada, las establecidas por el gobierno de Yrigoyen, que le demostró una benevolencia algo intermitente, a cambio de menudos favores políticos. Sólo el fracaso de la normalización, la beligerancia activa de la clase media y alta, persuadieron a Perón de la necesidad de hacer del movimiento obrero la base principal de su máquina política; aun entonces, sin embargo, cuidó de limitar su gravitación, atribuyendo gran peso político a los escasos dirigentes radicales que pasaban a apoyarlo.

En todo caso, Perón procuró, en forma cada vez más acelerada, a medida que sus otros proyectos se desvanecían, hacer nacer una conciencia política nueva en la clase obrera acrecida en número. Esta conciencia no tenía por qué ser —y no fue— socialmente revolucionaria. La estructura tradicional de clase se suponía intransformable; era el punto de equilibrio entre las clases el que se desplazaba, gracias a la acción estatal. No como vanguardia de una revolución que está por hacerse, sino como grupo beneficiario de una revolución ya realizada entra la clase obrera en nuestra liza política. Su papel es, entonces, defender lo ya logrado, apoyando a quienes lo han conseguido. Recordar a los obreros lo que habían ganado ya; señalarles lo que tenía de insultante para una clase que era beneficiaria principal de la política gubernativa la tutela ideológica a la que querían aún tenerla sometida los partidos de clase media, que por otra parte no se preocupaban en nada por su bienestar, entregados como estaban a la absorbente tarea de adular a sus inesperados y brillantes reclutas de la oligarquía tradicional: he aquí los breves capítulos de un evangelio

político que Perón se encargó de predicar sin descanso en un clima político cada vez más afiebrado. La misma deliberada trivialidad del lenguaje y los argumentos (que sus adversarios confundían a menudo con la mera tontería), mostraban una actitud nueva desde el poder político. Mientras la pequeña burguesía radical se había acercado a él reverencialmente (en temor y temblor muy bien expresados por su absurdo lenguaje barroco), ese nuevo, desgarrado lenguaje era frente al poder una invitación a la audacia, a la buena conciencia en la posesión de lo conquistado gracias a ella.

Esa audacia no iba a faltar (desde el 17 de octubre, en que su candidatura fue por fin proclamada, desde la Casa de Gobierno, frente a la muchedumbre triunfante) al coronel Perón. Cinco días después se casaba con Eva Duarte ("la mujer Duarte", tal como la llamaba *La Prensa* en sus crónicas anteriores al 17), atrevida decisión que cuenta entre las más sensatas por él tomadas. De esta actriz de radio de voz penetrante, que pocos meses después iba a leer con voz entrecortada por los sollozos las más áridas estadísticas en un sesudo discurso sobre la necesidad del voto femenino, iba a surgir uno de nuestros más arraigados mitos populares, cuyos rasgos esenciales coincidían en definir peronismo y oposición: la mujer fuerte y valiente que expresaba mejor que nadie todo el odio que había podido acumular en largos años de silencio un pueblo acaso demasiado manso.

Pero la ruptura de todo lazo con la Argentina tradicional era más aparente que efectiva. Aparte de los que Perón conservó, como cauteloso político (el apoyo de grupos radicales; la neutralidad benévola de más de un sector conservador; la utilización de núcleos que estaban lejos de ser desposeídos; el apoyo del Ejército y el de la Iglesia, a la que garantizaba la permanencia de la enseñanza religiosa establecida por el régimen militar), estaban los inherentes a su modo de ver el país y sus problemas, que seguía siendo muy escasamente revoluciona-

rio. Acaso la acusación que gustaría de formular a sus opositores, la de no apreciar en todo su significado el cambio aportado al país por sus etapas recientes, fuese aplicable también a él, que se propuso antes que nadie utilizar políticamente esos cambios. Pero, si Perón no se preocupaba de establecer el rumbo último del proceso que estaba dispuesto a aprovechar, la oposición ni parecía entenderlo en sus aspectos más evidentes. La optimista, la petulante resistencia de las clases medias concluyó el 17 de octubre; a partir de entonces imperaría un más sordo tono político, marcado por el retorno de los dirigentes partidarios al primer plano y por el influjo —ahora más discreto, pero no menos decisivo— de los dirigentes económicos.

El gobierno volcó todo su apoyo a la candidatura de Perón, lanzando una serie de innovaciones, como el aguinaldo y un aumento general de salarios, que representaban la continuidad de su política. Frente a esta actitud, descaradamente parcial, la justa irritación de los grupos opositores desembocó en una oposición a las medidas mismas, que a juicio de nuestros partidos de izquierda (mantenidos en su buena conciencia por el descubrimiento de que los secuaces de Perón no formaban sino un *Lumpenproletariat* sólo digno de desprecio) iban a perjudicar a la clase trabajadora al acelerar la inflación. Esta oposición se acompañó de la más beligerante de las organizaciones patronales, organizadoras de un muy exitoso *lock-out*. Esta última medida —tal era el extravío dominante en los grupos opositores— era juzgada además una eficaz forma de propaganda antiperonista.

De tal modo la lucha electoral se definió en primer término en el plano social. La candidatura de Perón fue sostenida por grupos sindicales organizados en el Partido Laborista, aliados a grupos políticos, el más importante de los cuales era el radical disidente, que había dado el candidato a vicepresidente, Quijano. Frente a la coalición peronista se formó nuevamente una Unión Democrática (sólo constituida para la elec-

ción presidencial, en tanto que los partidos que la integraban luchaban entre sí por los cargos parlamentarios). Formaban la unión el radicalismo, el socialismo, el comunismo y el partido demócrata progresista. Todas estas fuerzas, que acostumbraban considerarse de izquierda, se encontraban en una situación cuya extrema dificultad ni siquiera adivinaban, pero que se traducía ya en una atención creciente a los puntos de vista de las capas sociales más prósperas, que encontraban más abiertas a su propaganda. La Unión Democrática, que llevó por candidatos a dos antiguos antipersonalistas, los doctores Tamborini y Mosca, contó con fuerte oposición dentro del radicalismo, donde el predominio del grupo alvearista, consecuencia artificial de la situación política abierta en 1930, comenzaba a aflojar. Se formaban así movimientos primero de alcance regional, reconocibles casi todos ellos por el rótulo de "intransigente", que predicaban posiciones populistas (cuyo contenido variaba muy libremente según los criterios de los diversos dirigentes) y un orgulloso aislamiento, necesario porque el radicalismo no era un mero partido político, sino la representación en este plano de la Nación toda, y no podía por lo tanto entrar en contactos con los representantes de parcialidades y facciones antipopulares. Por otra parte, muchos de los militantes intransigentes sólo aceptaban estos puntos de vista con la reserva de una reelaboración lenta, destinada a darles un sentido más preciso; creían, de todos modos, que constituían el punto de partida necesario para toda acción de emancipación popular, el entronque inevitable con la única tradición así orientada que tenía auténtico arraigo en la conciencia colectiva: la del radicalismo yrigoyenista. El tiempo necesario para esa lenta modernización iba a faltar sin embargo a esos dirigentes, que tuvieron que elaborarla privados del auditorio popular que según habían supuesto iba a estar indefinidamente a su disposición. Por el momento, sus reservas y su malhumorado acatamiento de la disciplina partidaria contri-

buyeron a restar cohesión a la ya maltrecha Unión Democrática. Esta contó, en los últimos días previos a las elecciones del 24 de febrero de 1946, con un nuevo auxilio proporcionado por el celo de Spruille Braden: el *Libro Azul*, editado por el Departamento de Estado norteamericano, publicaba listas de antiguos agentes de Alemania obtenidas en los archivos del derrotado Reich. Estas listas, que constituían una abierta acusación contra Perón y el grupo militar que le era adicto, tenían el confesado defecto de no incluir a todos los culpables; había algunos que, enmendados oportunamente, eran ahora cubiertos por un generoso olvido. En todo caso, el *Libro Azul* permitió a Perón utilizar argumentos nacionalistas que le eran facilitados por la actitud de sus opositores, para quienes no había nada de anormal en la divulgación por un Estado de secretos destinados a influir en la vida política de otro.

El peronismo y su búsqueda vana de un nuevo equilibrio

En tales condiciones ganó Perón las elecciones presidenciales. Su victoria, todavía estrecha, dadas las características de la política argentina, pareció a la oposición abrumadora; hasta tal punto le resultaba inesperada. El vencedor no fue sin duda tan sorprendido por el resultado: las cifras electorales le aseguraban cómodas mayorías parlamentarias y el control de trece de las catorce provincias; se trataba ahora de utilizar esa enorme fuerza política. Ya el gobierno militar, luego de una victoria electoral que era también la suya, iniciaba el camino a las innovaciones que debían integrar una revolución a la vez social y económica.

La reforma bancaria nacionalizaba el Banco Central y le daba un control mucho más minucioso de todo el sistema de crédito; a esta medida, debida al gobierno de Farrell, iban a

agregarse las impulsadas por la acción de Miguel Miranda, el jefe de la política económica de la primera etapa peronista. Al control del crédito se agregaba el del comercio exterior; ahora la agricultura debía financiar la expansión industrial, mediante diferencias acumuladas por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, bajo cuyo control caía todo nuestro comercio exterior. Utilizando los altos precios de nuestros productos de exportación se intentó, en forma desordenada, equipar a la industria crecida (aunque en condiciones precarias) gracias al aislamiento de guerra. Para ello se gastaron buena parte de las divisas acumuladas en la etapa anterior; el primer plan quinquenal, solemnemente expuesto por el gobierno en 1947, preveía cambios más profundos en la estructura económica, pero en este punto las realizaciones siguieron sólo muy lejos a las previsiones. En particular, en cuanto a comunicaciones y fuentes de energía la acción del nuevo régimen fue débil y escasamente coherente. A esta política de importaciones en gran escala se agregó la nacionalización, concluida en 1947, de los ferrocarriles británicos, que formaban parte de un conjunto de acuerdos angloargentinos en los cuales nuestro país no había obtenido posición tan ventajosa como gustaba de imaginar el señor Miranda. Completó esta política económica nacionalista la nacionalización de los teléfonos y la repatriación de la deuda externa. Todas estas medidas venían a satisfacer aspiraciones largamente sostenidas por grupos muy numerosos dentro del país, y no es casual que la ceremonia de toma de posesión de los ferrocarriles nacionalizados haya sido, al decir de espectadores, el acto público que reunió a una más abundante y fervorosa multitud adicta. Pero sus modalidades eran a menudo más discutibles; así fue muy censurada la negociación con los teléfonos, que a través de dos etapas sucesivas (empresa mixta y nacionalización) aseguraba privilegios difíciles de entender a la antigua empresa concesionaria.

En todo caso esta política se caracterizaba por ser sólo parcialmente innovadora y aún más escasamente previsora. Entregaba al Estado medios sin precedentes de gobierno de nuestra vida económica; esos medios ya no eran utilizados —como los más modestos del primer ensayo de dirigismo bajo signo conservador— en beneficio principal de los grupos ganaderos y terratenientes. Pero se beneficiaban —por medio de agentes económicos desdichadamente menos capaces que la década anterior— sobre todo los nuevos grupos industriales, que tenían un representante muy característico en el propio señor Miranda, el súbitamente enriquecido zar de la hojalata.

La prosperidad permitía asegurar esos beneficios sin perjudicar decisivamente a otros grupos sociales (mientras el ganadero era cuidadosamente respetado, los agricultores, de peso electoral relativamente reducido, sólo aparecían despojados del lucro excepcional que podrían haber obtenido). El nivel real de salario continuó en ascenso: la prosperidad peronista parecía extenderse a todos los niveles sociales. Este resultado de una política económica mucho menos activa e innovadora de lo que había podido esperarse, tenía un solo defecto: no tenía garantía alguna de durar. La revolución peronista encontraba todavía otro punto de contacto con el pasado: su imagen de la economía (de acuerdo con la observación que André Siegfried formuló sobre las políticas económicas de las oligarquías hispanoamericanas) imaginaba un futuro en que sólo habría años buenos. Pero, vuelto el clima económico mundial a una cierta normalidad, el deterioro de los términos de intercambio prosiguió su interrumpido avance: la Argentina se encontró con un stock de productos exportables disminuido por el aumento del nivel de vida y el de la población (los doce millones de 1930 eran 16 en 1947, iban a ser 20 en 1956) y de valor decreciente. Frente a esta situación, el gobierno peronista se convirtió súbitamente a la sensatez: apartó al señor Miranda, cuyo nombre por otra parte tenía ya cierto contexto escan-

daloso, se agenció de un equipo económico que había renunciado de antemano a la genialidad y se propuso retardar en lo posible el momento en que sería preciso tomar resueltamente un nuevo rumbo; hacia esta política de contención fue orientado sobre todo por la cautela extrema del presidente Perón, que advertía muy bien que para hallar solución menos provisional sólo le quedaban dos caminos: o provocar cambios sociales radicales o reconocer que la prosperidad peronista era un fruto de la coyuntura de posguerra y se había evaporado con ella, dirigiendo entonces la liquidación de su propia obra. Ambos caminos estaban llenos de riesgos, que la solución de dejar las cosas como estaban, manejando con prudencia los restos de la prosperidad pasada, evitaba por el momento.

Mientras tanto, el gobierno peronista hacía más firme su control político del país, que iba a llevarlo, en un proceso cada vez más acelerado, a establecer un régimen de semidictadura. De 1947 fue la depuración de la Suprema Corte y la clausura de los semanarios de opinión, que tanta parte habían tenido en la gestación de la resistencia; del mismo año la adquisición pacífica del sistema radial del país por grupos económicos afectos al régimen; de 1951 la expropiación de *La Prensa* y su reaparición como órgano de la Confederación General del Trabajo. Más discretamente se realizaba el aumento del control sobre la propia prensa adicta, que se prolongaba a todos los medios de comunicación de masas: la labor de la Secretaría de Prensa, bien pronto identificada con la de su jefe, el señor Apold, contribuyó a dar al periodismo argentino un tono de pétrea uniformidad, apenas rota por los escasos órganos independientes, que sabían demasiado bien que sólo sobrevivirían gracias a su prudencia, y cultivaban con ahínco esa salvadora virtud. De la misma manera utilizó el gobierno todos los medios de proselitismo que la máquina estatal le ofrecía, y en primer término los de la enseñanza. En la Universidad, depurada tras de la expulsión de miles de docentes desafectos

(operación en la que participaron al parecer con espontáneo celo antiguos universitarios embelesados ante la posibilidad de ejercer venganza contra sus colegas), reinó también un conformismo gris. En la enseñanza secundaria y la primaria la acción fue más decidida: el rostro angélico de la señora Eva Perón comenzó a mostrarse, envuelto en nubes delicadamente rosadas, a la devoción de las promociones infantiles, en las viñetas de los libros de lectura.

Esta utilización sistemática de la máquina estatal estaba destinada a defender la estabilidad del régimen no sólo de las tentativas de sus adversarios sino también de las impaciencias de sus partidarios. La burocratización del peronismo en el plano político y sindical fue llevada adelante sistemáticamente por su jefe: la formación del Partido Unico de la Revolución, la del Partido Peronista; la expulsión del secretario general de la CGT, el viejo sindicalista Gay, y su reemplazo por figuras cada vez más insignificantes (el señor Espejo primero, los señores Vuletich y De Pietro luego) son etapas de una obra de destrucción desde lo alto que permitió a Perón elegir libremente soluciones políticas, sin ser urgido por las fuerzas sociales que lo apoyaban. Pero si esta obra fatal para el régimen pudo llevarse adelante casi sin obstáculos fue porque desde su origen mismo el peronismo mostraba una dependencia del jefe y del Estado que no era sino la confirmación de que en él mantenían vigencia rasgos muy antiguos y duraderos de nuestra vida política.

En estas direcciones se movió, durante casi diez años, el régimen. Su afirmación creciente llevó a la reforma constitucional de 1949: ésta recogía en el texto constitucional las postulaciones del nuevo régimen, a través de un *Decálogo del Trabajador* emanado del general Perón y uno de la ancianidad que era obra de su esposa. Al mismo tiempo suprimía la prohibición de reelección presidencial inmediata, lo que era, según terminó por confesar un poco hábil convencional peronista, el

objetivo principal de la convocatoria. A la reforma siguió una campaña destinada a persuadir al presidente de la necesidad de su reelección, en la que elocuentes petitorios eran unánimemente suscritos por centenares de miles de empleados públicos. En 1951 se realizaron las elecciones de renovación presidencial; pese a una situación económica muy difícil el general venció en proporción de dos a uno a la fórmula opositora, integrada por los radicales intransigentes Balbín y Frondizi. Antes de ello se había dado un grave signo de tensión dentro de las fuerzas que apoyaban al régimen: la señora Eva Perón, que en un primer momento había mostrado una versátil actividad política prohijando con éxito el voto femenino y emprendiendo, con menos éxito de lo que esperaba, un viaje que debía ser triunfal por la Europa miserable de la posguerra (del cual volvió proclamando que en todas partes había sido perseguida por la saña de la oligarquía, lo que era parcialmente exacto), orientó luego su actividad hacia la ayuda social. Creó una Fundación que volcó los aportes dudosamente espontáneos de empleados públicos e industriales necesitados de comprensión en sus problemas laborales en una serie de obras asistenciales y hospitalarias y un flujo bienhechor de máquinas de coser, bicicletas y pelotas de fútbol que inundó el país. Realizó así un ingenioso proselitismo y corrigió, con una arbitrariedad que era signo del carácter providencial de sus intervenciones, el tono excesivamente adusto que suelen tener en la Argentina las relaciones entre el Estado y sus administrados. Pero no se detuvo allí: el voto femenino la hizo jefa natural de una nueva masa electoral, para la cual abrió "unidades básicas" bien pronto omnipresentes. Finalmente, tendió sin embargo a acentuar aquellos rasgos de su personalidad que la hacían vocero particularmente fiel de las masas peronistas. Su oratoria voluntariamente brutal fue estimada por sus partidarios, a la vez que la hizo objeto del odio intenso de sus adversarios (sólo el monopolio oficial de los medios de expresión

y el clima de intimidación vigente impidió acaso a las masas peronistas enterarse de que la aborrecida oligarquía era capaz de expresar sus rencores políticos en términos tan brutalmente directos y plenos de savia plebeya como los más violentos expositores del rencor popular). La "abanderada de los trabajadores" tendió a dejar en segundo plano al "hada buena", a la "dama de la esperanza", y fue esa abanderada la que la CGT propuso para ocupar el segundo puesto de la fórmula presidencial oficialista, en un gigantesco "Cabildo Abierto del Justicialismo" (tal era el nombre, inventado por el señor Carmelo Pucciarelli, de la doctrina que hacía del peronismo algo más que un mero movimiento político de adhesión a un jefe. Entre los principios de esa doctrina se contaba el de que "para un peronista no hay nada mejor que otro peronista" y aquel otro según el cual "los empleados públicos deben tratar cortésmente al público"; este último delicado punto de doctrina era el fruto del personal esfuerzo ideológico del general Perón). La candidatura de la señora Perón fue vetada por el Ejército y su esposo se inclinó ante ese veto, mientras el Congreso desagraviaba de mil maneras a la frustrada vicepresidenta, que debió presentar también ella, según un uso común durante el régimen, una renuncia de espontaneidad más que dudosa. El lugar donde, según la versión canónica, totalmente mentirosa, la señora Perón había rechazado la oferta multitudinaria (que sólo rechazó días después) fue declarado monumento nacional; la propia Eva Perón fue proclamada "Jefa Espiritual de la Nación"... Tal apoteosis anticipaba en poco tiempo su ya prevista desaparición: la mujer de rostro tenso y afilado, que había surgido de la alegre y exuberante Evita de los primeros tiempos de grandeza, era en parte el producto de una enfermedad implacable, que fue resistida con temple admirable, en el que se mostraba una recia autenticidad. Ese valor y esa consagración figuraron, junto con la devoción tan firme de las grandes masas populares, entre las pocas cosas serias de una

época que no pareció advertir del todo que la obra de transformación social que le estaba históricamente fijada era digna de ser tomada en serio.

La muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, fue ocasión de que se expresara un muy hondo dolor popular; el régimen rodeó a ese núcleo de herida sinceridad de un contorno algo farandulesco: el señor Borlenghi, ministro del Interior por el cual la difunta esposa del presidente había mostrado un tenaz aborrecimiento, leyó el principal discurso de homenaje a su enemiga vencida por la muerte; gracias al celo del señor Apold todos los faroles públicos de la ciudad tuvieron su crespón negro; los relojes fueron parados a las 20 y 25, hora en que según la fórmula consagrada "Eva Perón había entrado en la inmortalidad". El general Perón sustituyó a su esposa en la dirección del Partido Peronista Femenino y en la Obra Social, mientras que un testamento muy oportunamente descubierto lo hizo heredero universal de su fortuna, integrada, según afirmó con campechana expresión, por "cuatro cosas locas".

Pero nada parecía ya capaz de introducir innovación real en un régimen que, seguro de su solidez, se entregaba sin recelo a gozar de las ventajas del poder. En torno de él se creaba un sistema cada vez menos disimulado de enriquecimiento rápido; algunos de sus más caracterizados representantes caían víctimas del celo intermitente del gobierno.

Así, al caer en desgracia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mercante, el brillante equipo de ex teóricos de FORJA que lo acompañó en su gestión económica debió conocer en algún caso la cárcel por delitos acaso menos irreales que la indignación de quienes los acusaban de ellos; o todavía el diputado Visca, que había pasado de una militancia conservadora ya rodeada de ribetes escandalosos a una diputación peronista, desde la cual se había constituido en inquisidor mayor del régimen como presidente de una "Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas", pasó de esa es-

pectable posición a la cárcel, debido a las modalidades de su ascenso a la prosperidad.

Pero en 1953 la situación se hizo ya insostenible: el gobierno se entregó a intensificar la inflación, y mientras la abundancia se desvanecía, desde muy cerca de la Presidencia se traficaba ilícitamente con productos esenciales, en primer término la carne, desviada hacia mataderos clandestinos. Una agitación que parecía encontrar por primera vez algún eco popular iba a manifestarse en actos de terrorismo ejecutados por distinguidos miembros de nuestras familias patricias. La reacción de Perón fue rápida: anunció, en dramático discurso, que "estaba dispuesto a matar a su propio padre" en caso de que éste fuese sorprendido en negocios poco limpios. En lugar del progenitor del presidente, fue su cuñado, Juan Duarte, quien apareció sin vida, en circunstancias por demás curiosas: tenía a su lado una carta en que anunciaba su decisión de marcharse "con Eva Perón". La muerte de Duarte significaba una voluntad seria de hacer cesar los más escandalosos negociados. Perón iba a encontrar bien pronto en el señor Jorge Antonio un más discreto aliado financiero, cuyo rápido ascenso, menos vistoso que el del difunto Duarte, no dejó sin embargo de provocar asombro.

Al mismo tiempo, el general descubrió vastísimas conspiraciones, utilizadas para apresar a los que real o imaginariamente amenazaban su poder; el instrumento legal para esa dura represión lo tenía el gobierno desde que, en setiembre de 1951, y en respuesta a una fracasada revolución encabezada por el general Menéndez, el Congreso proclamó el "Estado de Guerra Interno", que derogaba las garantías constitucionales en medida mucho más amplia que el de sitio. Acompañó a esta acción policíaca una explosión sabiamente orquestada de cólera popular, con incendios de las sedes del partido conservador, del radical y el socialista y la del Jockey Club. Pero a la vez que frenaba la cada vez más levantisca acción opositora,

Perón comenzó a advertir que ya no bastaba el mero mantenimiento del *statu quo:* su régimen debía buscar una salida política y una salida económica; parecía además que ambas debían ser solidarias.

No resultaba fácil modificar la constelación política surgida de las definiciones de 1945. El enemigo declarado del régimen era la oligarquía, es decir, los grupos dirigentes de la Argentina tradicional. En teoría, el nuevo sector dirigente industrial debía ser menos hostil, pero el hecho de que la más activa base política peronista se encontrase en los obreros sindicalizados hacía que la tensión entre éstos y sus patrones repercutiese en el campo político. A su vez esa tensión política era mantenida por la oposición enconada de las clases medias urbanas, que en 1945 se habían visto bruscamente frustradas de su al parecer cercana hegemonía y tendían cada vez más a adoptar, no sin algún esnobismo, actitudes de protesta aristocrática frente al tono plebeyo del nuevo régimen.

¿Era ésta una defección de las clases medias argentinas frente a su más evidente función histórica? Basta comparar lo que ocurría en la Argentina con lo acontecido en esos años en otros países de Hispanoamérica para advertir que este reproche tendría bastante fundamento: en disculpa de esa actitud renunciataria es preciso señalar que nuestras clases medias no encontraron estímulo alguno para apartarse de su cerrada hostilidad; por el contrario, el régimen parecía complacerse en ofender innecesariamente —y con muy escasa previsión de sus necesidades futuras— a este sector al que ningún motivo fundamental de oposición separaba de la nueva situación.

Las clases medias fueron la constante masa de maniobra de la oposición conservadora pero sus partidos (el radical, el socialista) vivían también las consecuencias de la nueva relación entre las clases que habían encontrado expresión política en el peronismo. En especial la Intransigencia, adueñada del control de la UCR, se lanzó a programar reformas cada vez

más audaces, desde la agraria, que debía ser "inmediata y profunda" hasta las que —en caso de aplicarse— iban a dar a la economía argentina una ordenación no capitalista. Ello no privó al radicalismo de una clientela electoral decididamente conservadora; el electorado opositor no tomaba en cuenta tales audacias; dispuesto a aplaudir a los candidatos radicales, mostraba una disposición mucho menor a escucharlos. Entre tanto, el régimen buscaba nuevos apoyos.

Si la exasperada clase media obligaba a su partido a una férrea disciplina opositora, los dirigentes del conservadorismo tradicional se mostraron más receptivos con respecto a las muy claras insinuaciones llegadas desde la Casa Rosada. El primero en señalar vigorosamente la posibilidad de entendimientos con un peronismo dispuesto a rever su política económico-social fue Federico Pinedo; la posibilidad de una "institucionalización" del peronismo fue, para esa misma época, el objeto principal de la prédica de un sector de la otra derecha, la nacionalista, que mediante el periódico *Quincena* parecía retornar al punto de vista de nuestro conservadorismo constitucionalista y liberal (en el plano político). Pero quien mostró entender de manera muy especial el acuerdo buscado fue el propio Perón. Dispuesto a orientar a su régimen hacia la derecha, parecía creer que ello era suficiente para entregarle el apoyo de las organizaciones políticas conservadoras, con las que no estaba dispuesto a compartir en nada las posiciones claves de gobierno del país. Así encaradas, las negociaciones estaban destinadas a un seguro fracaso. En lugar de entenderse con organizaciones políticas conservadoras sobrevivientes, el régimen prefirió entonces suscitar la creación de organismos corporativos de industriales y hacendados mantenidos políticamente bajo su control. Ello no era sino un aspecto de una reorientación más general del peronismo.

En lo internacional, el peronismo había lanzado una tercera posición que debía, a la vez, ganarle simpatía entre las ma-

sas hispano-americanas hostiles a los Estados Unidos y permitir la negociación constante del apoyo a la política norteamericana, que solía terminar haciendo suya. A partir de 1953 la tercera posición fue cada vez más decididamente relegada al olvido; ello se acompañó de una política nueva frente al capital extranjero, que tuvo expresión en la ley de radicación de capitales, también ella de 1953. El punto extremo de esta nueva orientación se alcanzó cuando el gobierno, rompiendo una tradición hostil a la intervención de las grandes compañías en la explotación petrolera, entró en tratos (por otra parte bastante turbios) con una filial de la Standard Oil para activar la producción de petróleo patagónico. Esta negociación encontró la condena no siempre sincera de nuestros líderes opositores; de 1954 es el estudio sobre *Petróleo y política* de Arturo Frondizi, en el que la nacionalización del petróleo era mostrada como parte esencial de un programa de gobierno "nacional y popular" antiimperialista.

La reorientación de nuestra política frente al resto del mundo se acompañaba con la adopción de una nueva actitud del Estado frente a las relaciones de trabajo; se erigía como árbitro neutro y no ya como expresión política de una de esas fuerzas en lucha. Grandes huelgas —como la de metalúrgicos de 1954— mostraron al gobierno dispuesto a sacar consecuencias precisas de esa actitud nueva. Ella culminó en el Congreso de la Productividad, destinado a hacerse eco de la preocupación del general Perón por el escaso rendimiento de nuestra mano de obra industrial. El Congreso mostró, sin embargo, que aun la domesticada CGT dirigida por el señor Vuletich no estaba dispuesta a seguir al líder de los trabajadores en su nueva política: el Congreso se clausuró señalando las dificultades técnicas de un aumento de producción basado en el esfuerzo de los trabajadores, y no en el reequipamiento industrial. Pero este último, cuya urgencia era evidente, no podía hacerse sin confiscar las ganancias industria-

les o sin contar con importaciones de capital. El primer camino, el régimen no parecía dispuesto a recorrerlo; beneficiario y organizador de la prosperidad popular traída por la coyuntura de posguerra, se negaba a dirigir cambios revolucionarios de estructura. Prefirió organizar la liquidación de su propia obra. Pero al mismo tiempo buscaba asegurar su supervivencia.

El abandono de las posiciones originarias se acompañó —se ha dicho ya— de la creación de nuevas estructuras cada vez más ortodoxamente corporativas; la CGT estaba ahora flanqueada por la CGE patronal y por la CGP profesional. Al mismo tiempo el régimen buscaba aumentar su control del país utilizando al máximo su aparato político-estatal: la captación de las voluntades infantiles y juveniles debía asegurarse mediante organizaciones como la U.E.S. secundaria y la C.G.U. universitaria. De este modo el peronismo, en la medida en que se veía forzado a renegar de su trayectoria popular, parecía orientarse cada vez más decididamente hacia un fascismo corporativista.

Sin embargo, tampoco esta salida fue adoptada sin reservas por el peronismo. ¿Por qué en su hora de conservadorismo económico-social se lanzaba el régimen a las más extravagantes aventuras políticas? Para esta conducta aparentemente inexplicable, los argentinos, y ya no sólo los opositores, tenían una explicación: también el peronismo empezaba a pudrirse por la cabeza. Luego de la muerte de Eva Perón, su esposo, lejos de mostrar la reserva dolorida que hubiese sido decente, se lanzó con frenesí a actividades que hacían de él una suerte de Calígula bonachón. Esas etapas finales del régimen que mostraron al jefe del Estado capitaneando por las calles céntricas de la capital a una alegre muchedumbre de morrudas adolescentes, esas etapas que rodearon a la silueta deliciosamente absurda de la motoneta de un equívoco aire erótico, esas etapas en que el "Líder de los Trabajadores" agregaba a sus múl-

tiples y sonoros apelativos el extrañamente familiar de Pocho, esas etapas acaso no pueden explicarse sin tomar en cuenta el hecho, más patético que grotesco, de que el general estaba atravesando, en posición demasiado expuesta a la curiosidad pública, el delicioso y angustioso verano de San Juan de su vida erótico-sentimental. Pero —vistas las cosas desde otras perspectivas— no parece que aun en ese momento haya perdido del todo la virtud tan suya de saber lo que políticamente le convenía.

En efecto, para hacer una política conservadora, y sobrevivir a ella, el peronismo debía destruir las fuerzas a la vez aliadas y rivales a las que esa política debía conceder poder creciente. Fruto del equilibrio inestable entre un Ejército nada revolucionario y un movimiento obrero crecido bajo su signo político, el peronismo no podía sacrificar al segundo sin previamente debilitar al primero. Es ese acaso el núcleo serio del conflicto con la Iglesia Católica, en cuyo apoyo político al régimen veía el Ejército el signo más evidente del carácter esencialmente conservador de éste.

El conflicto con la Iglesia, estallado en forma violenta a fines de 1954, tenía sin duda raíces anteriores a esa fecha. Luego del apoyo electoral de 1946, las autoridades eclesiásticas adoptaron actitudes cada vez más frías, en la medida misma en que la obra del régimen invadía el campo asistencial, y sin privarlo totalmente del sello católico que tradicionalmente había tenido en el país, lo marcaba, sin embargo, aún más vigorosamente con su signo político. Esas reticencias se advirtieron ya cuando la señora Perón viajó a Europa y alcanzó en el Vaticano una recepción que no la satisfizo, y de nuevo se hicieron evidentes durante la campaña electoral de 1951. Para contrarrestar esa frialdad creciente, el gobierno amenazó —con actos inequívocos— inaugurar una nueva política religiosa: el espiritismo pasó a contar con el favor oficial; un edecán presidencial asistió en representación de Perón al acto en

que iba a proclamarse que Jesús no era Dios, y la muchedumbre de educandas movilizadas por el clero para proclamar subversivamente lo contrario fue víctima de una gigantesca redada policial que alborotó los alrededores del estadio Luna Park, donde los discípulos de Kardec habían levantado su tribuna.

Hubo un nuevo choque cuando el peronismo estableció un sistema de censura cinematográfica menos pudibundo que el anterior. *Bárbara atómica* se llamaba el filme sobre el cual se libró la batalla, y las "mulatas de fuego" que en él actuaban recorrieron luego el país, en gira triunfal, protegidas (por aguerridos policías dispuestos a todo) de la cólera popular inútilmente convocada por los obispos. Pero estas escaramuzas se cerraban bien pronto, y renacía una paz inestable. En la segunda mitad de 1954, en cambio, el gobierno mostró claramente que quería guerra. Decidido a resolver de una vez por todas el problema de la higiene sexual, lanzó una campaña en favor de la reapertura de los prostíbulos, única alternativa a una difusión de la homosexualidad que, según afirmaba, era vista con buenos ojos por algunos de nuestros prelados. Reformó la organización legal de la familia, suprimiendo diferencias entre hijos legítimos y extramatrimoniales, y concluyó por autorizar el nuevo casamiento de los divorciados. Esta serie de reformas —algunas de las cuales estaban lejos de ser innecesarias— eran declaradamente un desafío a la Iglesia, y las asistía una campaña de prensa que no desdeñaba retomar los más desgastados temas de la tradición anticlerical (por ejemplo, el que atribuía a los eclesiásticos poder de atraer la mala suerte, sobre lo cual tejió la prensa oficial las más regocijadas variaciones).

El choque con la Iglesia —pese a la actitud prudente, duramente juzgada por su grey, que adoptó el Primado— adquirió caracteres cada vez más dramáticos en la primera mitad de 1955. La reforma constitucional, destinada a separar la Iglesia del Estado, fue anunciada reiteradamente; las autoridades

eclesiásticas, en previsión de las presiones que se ejercerían para allegar firmas a los petitorios populares reformistas, declararon que era lícito a los católicos firmarlos, guardando adecuadas reservas mentales en cuanto a la interpretación que cabía dar a sus términos.

Se hizo evidente que la ruptura con la Iglesia iba a ser ocasión de una nueva prueba de fuerza entre el gobierno y la oposición. Esta advertía que no iba a dársele luego otra ocasión igualmente buena: aplastadas en lo interior las fuerzas que no derivaban su poder del gobierno, reconciliado éste con el gran capitalismo y sólidamente integrado en la órbita norteamericana, las penurias que aportaría el futuro podrían crear un vasto descontento, pero no habría ya núcleo alguno capaz de utilizarlo políticamente. No sólo subsistiría el peronismo, sino que por primera vez luego de diez años podría moverse libre de ataduras internas, y no era seguro que las internacionales no gravitarían más allá de lo económico, para imponer prudencia en el campo político. Esa inquietante seguridad, la sensación de que luego de diez años de equilibrio político la situación se había de nuevo (pero previsiblemente por plazo breve) hecho plástica, explica la afiebrada actividad de las fuerzas opositoras. Estas recibían ahora en sus filas a algunos que habían apoyado el régimen del catolicismo nacionalista (al cabo el sector más politizado de nuestro catolicismo), y hubo asimismo estímulos para movimientos militares. Mientras tanto, también el cambio de rumbo internacional del régimen fue objeto de duros ataques, centrados en el contrato con la Standard Oil y acompañados de hábiles campañas de propaganda, como la que iba a iniciar el diputado radical Alende en torno a la misteriosa presencia de no menos misteriosas naves de guerra extranjeras en nuestros mares.

La agitación popular culminó en una gigantesca y belicosa procesión de Corpus Christi el 11 de junio. La multitud que la

integraba fue acusada por el gobierno de haber quemado la bandera izada en el Congreso, en vana tentativa de apagar la "Llama de la Argentinidad", encendida en el mismo edificio. La ultrajada insignia fue objeto de los más profusos desagravios y el incidente sirvió para intensificar el conflicto con la Iglesia: el gobierno expulsó a dos prelados de la curia porteña, monseñores Tato y Novoa, acusados de dirigir la agitación opositora. El 16 de junio a la protesta desarmada siguió la tentativa de golpe militar: una parte de la Marina y la Aviación se alzó contra el gobierno, bombardeando y ametrallando lugares céntricos de Buenos Aires. Esa noche, sofocado el movimiento, ardieron las iglesias del centro de la ciudad, saqueadas por la muchedumbre e incendiadas por equipos especializados que actuaron con rapidez y eficacia: en San Francisco, en Santo Domingo, el fuego se llevó todo, hasta dejar tan sólo el ladrillo calcinado de los muros; las cúpulas, levantadas y rotas por la presión de los gases de combustión, dejaron paso a llamaradas gigantescas.

Al día siguiente todos parecieron despertar a una más precisa consideración de lo ocurrido. El primer asustado por la índole de su triunfo pareció ser el gobierno peronista. Este se había salvado gracias al apoyo de un sector del Ejército, que —según se decía— lo controlaba. En todo caso ya no tenía libertad de movimientos para realizar los cambios políticos largamente planeados. Por el contrario, amenguó la intensidad de la campaña anticlerical, separó al señor Borlenghi, ministro del Interior al que se atribuía gran responsabilidad en la misma (y en particular la invención del episodio vinculado con la quema de la bandera) y reconoció, por boca del presidente Perón, la perfecta lealtad constitucional de "nuestros grandes partidos populares", resistiéndose así a advertir el hecho demasiado notorio de que la participación de ellos en el movimiento del 16 de junio había ido, en varios casos, más allá de desear pasivamente su triunfo.

Tal fue el punto de partida del intento de conciliación, que llenó el mes de julio y fue perdiendo fuerza en agosto. Por primera vez en su gobierno, el general Perón llamaba al diálogo a unos adversarios leales en los que se resistía a ver enemigos. Advertía que ello no debía tomarse como signo de debilidad; naturalmente, no fue interpretado sino de ese modo. Uno tras otro, los interlocutores del gobierno mostraron su escasa disposición a conceder tregua. Particular importancia tuvo el discurso radial pronunciado por Arturo Frondizi en nombre del radicalismo: con la fría seguridad del vencedor, prometía a los atónitos peronistas un generoso perdón. El fracaso ya indisimulable de la conciliación obligó a Perón a volver a actitudes políticas en él menos insólitas. El 31 de agosto presentaba su renuncia, en beneficio de la paz argentina; al mismo tiempo, la CGT movilizaba manifestantes, a cuyo ruego el presidente la retiraba y con volubilidad sólo aparente proclamaba una guerra de exterminio.

A este belicoso discurso no siguió nada, sea porque el temple revolucionario del movimiento peronista, luego de diez años de domesticación desde lo alto, había ido decayendo; sea —como se dijo entonces insistentemente— porque la parte del Ejército que seguía apoyando a Perón había prohibido nuevas aventuras políticas. Esa extraña inactividad era también interpretada, sin embargo, como la preparación para innovaciones audaces: se decía que Perón iba a contrarrestar el poder del Ejército mediante la creación de milicias obreras, fuerza armada de un Estado sindicalista con el que se proponía reemplazar la ya bastante vacía estructura constitucional vigente. Si ésos eran verdaderamente sus propósitos no pudo cumplirlos. Aprovechando la crisis de los apoyos obreros y militares del peronismo, un movimiento que abarcó a un sector relativamente reducido de las Fuerzas Armadas se hizo, en cinco días —del 16 al 21 de setiembre—, dueño de la situación. El 23 una muchedumbre cubría nuevamente la Plaza de Mayo. En

lugar de la voz tan conocida iba a escuchar la voz quebrada por la fatiga del vencedor, del general Eduardo Lonardi, jefe de la Revolución Libertadora en Córdoba y presidente provisional de la Nación.

El difícil camino de la segunda restauración

Era unánime la opinión de que una mera restauración resultaría imposible. El decenio peronista había traído consigo cambios demasiado vastos: la toma de conciencia de una Argentina industrial poco dispuesta a volver a la tutela de los dueños de vacas; la desvalorización cada vez más acelerada de los valores tradicionalmente respetados en el país, que, comenzada con la alegre irreverencia de nuestros nacionalistas hacia los más solemnes mitos de la Argentina liberal, remató en las reiteradas invitaciones formuladas por el presidente de la República a niños y adolescentes para que no perdiesen tiempo escuchando las anticuadas tonterías que pretendían inculcarles sus padres y maestros. Esta desvalorización justamente alarmante, en cuanto no reemplazaba las viejas lealtades por otras más valederas, era en sí demasiado justa para dejar huellas fácilmente eliminables: la malicia un poco gruesa que durante diez años predicó Perón fue, al cabo, una forma de acceso a cierta lucidez política para grandes masas argentinas, que no parecían dispuestas ahora a perderla.

El peronismo, entonces, había introducido cambios destinados a perdurar. Esta convicción fue, al principio, común a todos sus vencedores, que, sin embargo, no sabían demasiado bien cómo harían compatible la perduración de esos rasgos nuevos con la eliminación del movimiento políticamente identificado con ellos. Los vencedores, por otra parte, habían acudido a la lucha desde los más variados cuadrantes políticos y, lograda la victoria, se llevaban cada vez peor entre sí. Esta in-

terna división, y la conciencia muy viva de la fuerza enorme que seguía teniendo el peronismo en la vida nacional, explican las primeras dificultades que tuvo el gobierno revolucionario.

Este incluía a hombres orientados hacia los partidos tradicionales (así, el contraalmirante Rojas, vicepresidente, y el doctor Busso, ministro del Interior y Justicia y hombre de consejo del general Lonardi), y otros representativos de grupos nacionalistas (como el doctor Amadeo, ministro de Relaciones Exteriores, y el doctor Goyeneche, secretario de Prensa) y aun elementos de extracción peronista dispuestos a alinearse con el segundo grupo (así, el doctor Cerrutti Costa, ministro de Trabajo y Previsión). Detrás de esa esbozada formación política se insinuaba la influencia del secretario del presidente, doctor Clemente Villada Achával, que no había ocultado en el pasado su simpatía hacia la extrema derecha católica. No faltaban tampoco quienes creían percibir alguna relación entre este grupo y el ministro de Guerra, general Bengoa, favorable él mismo a un acercamiento con la estructura sindical heredada del peronismo. Este alineamiento se presentaba con signo católico, pero no era el único que pretendía recoger tal inspiración en el campo político. Aparte del Partido Demócrata Cristiano, fundado en las etapas finales del peronismo, y hostil a los grupos de inspiración nacionalista o integralista, descollaron también figuras no partidarias consideradas muy cercanas a la Iglesia (como el doctor Del'Oro Maini, ministro de Educación del gobierno revolucionario).

Pero si los revolucionarios no estaban de acuerdo en casi nada, por lo menos coincidían en la necesidad de un cambio de rumbo económico. El gobierno de Lonardi —continuando una gestión iniciada por Perón— solicitó de la CEPAL el envío del señor Prebisch, que debía elaborar un informe acerca de la situación económica argentina y los modos mejores de solucionar sus problemas. El informe mostraba —en cuanto a las

perspectivas a largo plazo— una actitud distinta de la que había caracterizado a Prebisch en su actuación argentina de la década del 30. La necesidad de una industrialización mejor encarada que la peronista era subrayada vigorosamente; sólo mediante ella la Argentina escaparía al destino común de los países de economía colonial. Pero, para lograr ese objetivo de largo plazo, se proponía aumentar nuestra disponibilidad de capitales, acreciendo las exportaciones agrícolo-ganaderas. Una redistribución de los ingresos nacionales de signo opuesto a la realizada por el peronismo era entonces indispensable para estimular al sector rural. Esa redistribución debía ser lograda mediante una reforma del complicado sistema de cambios y retenciones heredado del peronismo. Si la perspectiva final era, entonces, la de una Argentina industrializada, ocupaba el plano más inmediato el retorno temporario al predominio de la Argentina rural.

El informe de Prebisch declaraba reiteradamente no tomar en cuenta los aspectos políticos de las reformas propuestas; que éste los tenía era, sin embargo, evidente: de hecho, la adopción de los consejos contenidos en el plan implicaba una toma de posición global frente al futuro argentino. No lo advirtieron sin embargo así los grupos que compartían el poder: la adopción del plan de Prebisch, anunciada por el general Lonardi en tono melancólico pero decidido, no les impidió seguir proyectando políticas incompatibles con las decisiones que habían aprobado.

Ello se hizo particularmente visible en el grupo nacionalista, precisamente porque éste se había trazado un programa de acción más elaborado que el grupo rival. Para los nacionalistas la solución debía hallarse en una peregrinación a las fuentes del peronismo: en el retorno a un régimen clérico-militar que concediese lugar en sus estructuras a las fuerzas del trabajo. La estabilidad de esta solución debía buscarse mediante una firme institucionalización de sus rasgos, dentro de las lí-

neas maestras del constitucionalismo liberal, en el que ahora reconocían nuestros nacionalistas un precioso factor de orden. Este régimen iba a contar —se esperaba— con el apoyo de la masa obrera, que lo preferiría al desmantelamiento liso y llano de las estructuras elaboradas en el decenio peronista.

¿El plan era realizable? No parecía que —llevado adelante en medio del derrumbe del nivel de vida obrero— pudiese ir más allá de una gigantesca operación de soborno político a dirigentes sindicales, cuyo ascendiente era por otra parte problemático, dadas las características de centralización del peronismo. En todo caso, no pudo siquiera comenzar a realizarse. Las primeras etapas del gobierno revolucionario fueron de sorda lucha interna y los nacionalistas estuvieron desde el comienzo a la defensiva. Por primera vez en su no extensa trayectoria política su ascendiente sobre las Fuerzas Armadas no era muy seguro. En éstas la experiencia peronista —al revelar qué extrañas metamorfosis podían sobrevenir a movimientos políticos colocados bajo el signo del orden y la autoridad— había creado una fatiga de las innovaciones, una estima nueva por la sabiduría de nuestro constitucionalismo liberal, bajo cuya vigencia el país había estado libre de tormentas demasiado intensas. Sin duda, los nacionalistas habían extraído la misma moraleja de lo ocurrido en el último decenio, pero —si así estaban las cosas— no se advertía por qué debían ser ellos los dirigentes más adecuados para la nueva hora y no los que habían mantenido a lo largo de treinta años tormentosos una fe sin reservas en nuestra tradición constitucional. Por otra parte había motivos sobrados para dudar, si no acaso de la sinceridad, sí de la firmeza de las convicciones constitucionalistas de pronto surgidas en nuestro nacionalismo. El mismo propósito de seguir utilizando conexiones establecidas antes de esa reciente conversión, de reagrupar en beneficios propios las fuerzas que habían apoyado a Perón, parecía autorizar todas las desconfianzas. Ante ellas, los nacionalistas lucharon en algún caso con

habilidad (así, el doctor Amadeo), en otros sin ella, pero lucharon en situación desventajosa. Frente a su política sindical, basada en el reconocimiento de que la opinión mayoritaria entre los trabajadores seguía siendo peronista, de que era ilusorio buscar, fuera de los cuadros sindicales sobrevivientes al derrumbe, a quienes pudiesen hablar en nombre de las masas obreras, se opuso la impaciencia de los dirigentes sindicales preperonistas, ligados por una parte con los partidos tradicionales y por otra con grupos militares a los que los unían años de fraterna conspiración. Frente a ellos la política del ministro Cerrutti Costa podía bastante poco: los acuerdos laboriosamente conseguidos con la C.G.T. peronista (que bajo la dirección de Framini y Natalini llegó a dar instrucciones contrarias a todo acto de protesta obrera el 17 de octubre, que había vuelto a ser día laborable) eran privados de buena parte de su eficacia por los "sindicalistas libres", que tomaban por la fuerza sedes sindicales, con el apoyo no siempre discreto de elementos militares. Mientras cedía así posiciones en el campo obrero, el nacionalismo libraba una batalla aún más desesperada en torno a las posiciones políticas que había adquirido.

La presencia del doctor Amadeo, y sobre todo del doctor Goyeneche en cargos de altísima importancia no dejaba, en efecto, de suscitar muy extendidas alarmas. Era notorio que este último había sido uno de los dirigentes nacionalistas más cercanos a la embajada alemana, que había viajado al Reich durante la guerra y había obtenido —según se decía— el reconocimiento de un papel director luego de la en ese momento problemática victoria del Eje. Verlo en el cargo que había ilustrado Apold daba derecho a cierta inquietud, que Goyeneche intentó disipar declarando que esas actitudes poco compatibles con una rigurosa ortodoxia democrática pertenecían al pasado.

Si no es seguro que al doctor Goyeneche faltasen los deseos de emular al doctor Goebbels, bien pronto se hizo evidente que

le faltaba para ello el indispensable talento. Por otra parte, su control de la prensa era algo problemático: el doctor Busso, ministro de Justicia, había distribuido los órganos antes peronistas entre interventores adictos a los partidos tradicionales y el doctor Goyeneche cometió la tontería de lanzarse a una guerra de comunicados con un travieso periodista radical puesto al frente de uno de esos diarios. Con ello rodeó de la más desaforada publicidad a un conflicto que su grupo tenía interés vital en resolver discretamente.

Otra batalla perdieron los nacionalistas en la Junta Consultiva. La creación de ese cuerpo asesor fue lentamente tramitada. La decisión de integrarla, no con meros hombres de consejo sino con representantes de los distintos partidos políticos, significó una victoria de la que se definía como línea democrática: el contraalmirante Rojas, presidente de la nueva Junta, la colocó con clara intención polémica, bajo el signo de Mayo y Caseros.

A principios de noviembre la creación del cuerpo consultivo, la renuncia de Goyeneche y la del general Bengoa parecían, entonces, haber resuelto el conflicto. Pero ya los términos con que el general Lonardi aceptaba la renuncia de su ministro de Guerra revelaba que no aceptaba sin reservas la solución alcanzada; advertía demasiado bien los peligros de una política de mera restauración; no advertía acaso con igual claridad que para hacer la política de conciliación —que era la suya— hubiese sido necesario que los vencedores tuviesen una fuerza y sobre todo una cohesión de la que carecían. En todo caso el general Lonardi terminó por prestar su consentimiento a una audaz operación política vagamente anunciada en un mensaje presidencial dado a conocer en la madrugada del 12 de noviembre. El Ministerio del Interior y Justicia era desdoblado: en la cartera política por excelencia se instalaba al doctor De Pablo Pardo, del todo identificado con la línea nacionalista. A partir de aquí los acontecimientos se precipitaron: mientras

los funcionarios leales al doctor Busso se hacían fuertes en el Ministerio del Interior y agentes del sistema de comisiones investigadoras detenían al doctor Goyeneche, por cuestiones vinculadas con viajes por él realizados y subvencionados por el gobierno peronista, la Junta Consultiva (excepto dos miembros que en ella representaban a la Unión Federal Demócrata Cristiana, nueva organización política de orientación católico-nacionalista) presentaba su renuncia colectiva y crecía la agitación militar.

Al día siguiente se daba por aceptada una renuncia que, según algunos, había presentado verbalmente el general Lonardi. Lo reemplazaba el general Aramburu, acompañado por la Junta Militar integrada por los ministros de las tres armas. El doctor Busso y los ancianos políticos de la Junta Consultiva retornaban en triunfo de su Aventino motorizado. Este espectáculo novedoso sembró el estupor y el desconsuelo entre nuestros nacionalistas; de prodigar lecciones en la difícil técnica del golpe de Estado, habían encontrado tras de cinco décadas finalmente discípulos que les hacían honor. El 13 de noviembre es, en efecto, una fecha de sentido ambiguo: por una parte significa el fin de nuestro nacionalismo como fuerza política independiente, por otra revela que ciertas actitudes introducidas por los nacionalistas pasaban a ser patrimonio común de movimientos políticos de muy variado signo.

El sector triunfante, en efecto, comprendía a partidos políticos que en el pasado se habían tenido por populares y que acompañaban ahora una gestión gubernativa que debía ser necesariamente impopular: una política económica hostil a las clases trabajadoras se agregaba a la persecución más intensa del movimiento por el que éstas se habían sentido representadas. Se acentuaban así rasgos ya mostrados por el gobierno revolucionario antes del 13 de noviembre, y que acaso hubieran debido afirmarse progresivamente (cualquiera hubiese sido el desenlace del conflicto interno) como respuesta

ineludible al retorno del peronismo a posiciones combativas. En todo caso, esos rasgos acentuaban su aspecto violentamente represivo bajo el signo de una victoria de las ideas democráticas, que venían a identificarse así con la hostilidad implacable a cuanto había cambiado en el decenio pasado, con una nostalgia cada vez más confesada de la Argentina pre-peronista, a la que esos mismos grupos habían, sin embargo, condenado a veces con energía. Llevadas a sus últimas consecuencias, estas actitudes deberían conducir a un fascismo espontáneamente reinventado, y compatible por lo tanto con la condena de la anterior tradición política fascista. Pero pocos siguieron este camino hasta el fin: los más, entre los militares y los políticos revolucionarios, se mantuvieron en un perplejo equilibrio entre las soluciones autoritarias que su situación imponía y las tradiciones democráticas en cuyo nombre decían actuar.

En un primer momento pareció que la solución consistía en una sustitución de equipos dirigentes: a los comprometidos con el régimen anterior se los reemplazaría con otros probadamente democráticos. Esta ola depuradora cubrió el país entero, llegó hasta la Iglesia (donde un prelado "democrático" fue encargado de la Arquidiócesis de Buenos Aires) y afectó completamente el organismo sindical: la CGT era gobernada por oficiales de las tres armas, con el asesoramiento de sindicalistas libres. En el país entero ya no se oía más que a los vencedores; la Junta Consultiva representaba adecuadamente a todos los sectores de la opinión pública que se juzgaba dignos de ser escuchados.

Todo ello no aseguraba, sin embargo, una marcha firme al gobierno revolucionario. Las luchas internas se libraban, sobre todo, en torno al papel de la Iglesia y tuvieron su manifestación más violenta entre el ministro Dell'Oro Maini (que había logrado, con más habilidad que franqueza de procederes, introducir en el decreto de organización de las universidades

nacionales un artículo que autorizaba la instalación de las privadas) y sectores muy amplios de opinión, que fueron movilizados por las federaciones de estudiantes universitarios y secundarios. Pero el problema fue eludido, con acuerdo de ambas partes, mediante el alejamiento del ministro y del interventor de la Universidad de Buenos Aires, doctor José Luis Romero, que había tomado posición contra la política ministerial. Sin derogar el artículo en cuestión, el gobierno se comprometía a no aplicarlo: de tal modo se aceptaba, una vez más, que la solidaridad revolucionaria iba antes que cualquier lealtad ideológica y que la revolución sólo podía salir adelante a fuerza de no optar frente a los dilemas que las circunstancias le iban planteando.

Sin embargo, la aplicación de la política económica ya descrita, junto con la acentuación de la represión policíaca, debía fortalecer cada vez más los rasgos conservadores del gobierno revolucionario y hacer menos fácil la solución mediante elecciones que ese gobierno buscaba... Frente a ese futuro que se anunciaba sombrío no faltaban quienes solicitaban una rectificación de rumbos. Anotemos en esta actitud a nacionalistas y comunistas: los primeros se dedicaban a inacabables elogios póstumos de la política de conciliación que había sido la suya; los segundos, que habían oscilado a lo largo del decenio peronista entre el apoyo y la oposición, se dedicaban ahora a proclamar la necesidad de un amplio frente democrático, que incluyese a los vencidos en setiembre... Más importantes que estas posiciones marginales, del todo previsibles, fue la actitud asumida por la corriente mayoritaria dentro de la intransigencia radical, la que había puesto al frente del Comité Nacional de la UCR a Arturo Frondizi. Este condenó con vigor la política económica propuesta por Prebisch, y a la vez esbozó —ya en los primeros días posteriores a la caída del peronismo— posiciones hostiles a todo régimen de excepción contra los vencidos, que debían —según Frondizi— mantener sus or-

ganizaciones políticas. Esta actitud parecía nacer de la convicción de que el peronismo había clausurado su ciclo, de que las masas populares argentinas seguirían ahora la orientación menos ambiguamente revolucionaria que le proporcionaba la Intransigencia. Pero esa orientación era cada vez menos fácil de discernir: sin completo control del partido, con una oposición interna que contaba con fuertes apoyos en el gobierno revolucionario (uno de los dirigentes unionistas, el doctor Zavala Ortiz, era a juicio de muchos el hombre destinado a continuar como presidente constitucional la línea política de la Revolución), el doctor Frondizi debió apelar a toda su cautela para conservar las posiciones partidarias ganadas gracias a un esfuerzo tenaz.

El año 1956 transcurrió así con un rumbo político impreciso. En el plano económico pudo advertirse bien pronto que, por lo menos en un aspecto, las prescripciones de Prebisch no iban a cumplirse: el ritmo de la inflación, frenada durante las últimas etapas del peronismo, volvió a acelerarse. Por otra parte, también en este aspecto el gobierno se veía obligado a innovar menos de lo que acaso hubiese deseado: la solución a nuestros problemas económicos planteaba el problema político por excelencia, aquel frente al cual había sucumbido el peronismo. Es natural que la Revolución haya preferido eludir una prueba tan grave y pasar la carga de la decisión al régimen constitucional que había de seguirla. No se privó, sin embargo, de asumir actitudes que, en cierta medida anticipaban esa toma de posición global. Aparte las vinculadas con la política de precios rurales, es necesario tomar en cuenta las que introducían a la Argentina en organizaciones financieras internacionales y las negociaciones sobre nuestras deudas acumuladas con los distintos países europeos. Esa política económica encontraba ahora censuras provenientes no únicamente de sectores políticos: de 1956 es la reaparición de la revista *Qué*, orientada en un sentido favorable al radicalismo intransigen-

te, pero particularmente sensible a los intereses de los grupos industriales, en los que su director, el señor Frigerio, veía la clase-guía en la lucha por lo que, algo panorámicamente, llamaba la emancipación nacional.

Pero los problemas económicos gravitaban en segundo plano; en el primero se decidía, mediante sordas pujas, el futuro político del país. Mientras una serie de fracasados golpes militares llevaba a la eliminación progresiva de los jefes nacionalistas del Ejército, en junio un alzamiento peronista era reprimido con inusitada dureza: después de un siglo, volvía a pagarse la insurrección con la vida. Los fusilamientos de junio, si ensancharon el abismo entre los dos bandos en que se dividía el país, aceleraron, sin embargo, el reingreso clandestino del peronismo a la vida política al revelar con brutal claridad los riesgos del camino revolucionario. Al mismo tiempo, las primeras elecciones celebradas en los gremios normalizados comenzaban a probar —pese a los amaños no siempre ausentes— que la tendencia vencida en setiembre conservaba enorme ascendiente entre los trabajadores; el peronismo volvía a gravitar, entonces, en la política argentina, en forma tanto más imperiosa cuanto más se acercaba la consulta electoral. Esta fue anunciada en julio por el general Aramburu: a mediados de 1957 se convocaría una constituyente (el gobierno había derogado por decreto la reforma constitucional de 1949) y a fines del mismo año se elegirían las autoridades constitucionales. Pero, en rigor, los problemas más urgentes eran otros. En primer término, se debatía el estatuto que debía darse a los partidos políticos. La oposición radical al doctor Frondizi utilizaba las abundantes pruebas que éste daba de un espíritu autoritario en el gobierno del partido para urgir que se declarase a todos ellos en estado de asamblea, de modo tal que —según la entonces tan repetida frase— la Revolución llegase hasta ellos. El gobierno (orientado en este punto por el ministro Landaburu) no se allanó a estas reiteradas

exigencias: este estatuto vino a consolidar las situaciones ya existentes dentro de los partidos, a la vez que puso dificultades menores que las deseadas por los más intransigentes revolucionarios para crear agrupaciones nuevas. El otro punto en vivo debate era el del régimen electoral: el radicalismo, que se consideraba mayoritario, apoyaba el retorno al establecido por la Ley Sáenz Peña; los partidos menores aspiraban al proporcional. En noviembre, Aramburu anunció el apoyo del gobierno a esta última solución, en cuanto a la elección de constituyentes.

Mientras estas decisiones fijaban el futuro rumbo político de la Revolución, acontecimientos igualmente decisivos ocurrían dentro del radicalismo. La batalla se daba en torno a la elección de la fórmula presidencial; sin duda en la convención partidaria el sector interno al que pertenecía el doctor Frondizi (Movimiento de Intransigencia y Renovación) tenía mayoría sobre la Intransigencia Nacional que respondía al doctor Sabattini y el unionismo, cuyo dirigente más significativo había llegado a ser —gracias a sus contactos gubernativos— el doctor Zavala Ortiz. Pero dentro del MIR había otros hombres que no consideraban excesivo el cargo presidencial: el doctor Balbín, ya candidato en 1952, no parecía ver razón alguna para ceder el primer término a quien entonces lo había acompañado en segundo lugar. Luego de meses de tensiones, la convención reunida en Tucumán votó, a fines de 1956, la fórmula Frondizi-Gómez; pese a la ausencia de los convencionales hostiles a ella, el quórum necesario pudo ser alcanzado.

Se hacía así inevitable la fragmentación del radicalismo. Todos los grupos ausentes en Tucumán juntaron fuerzas para formar, a principios de 1957, la Unión Cívica Radical del Pueblo; poco después, por exigencia del nuevo estatuto, el sector que había resultado mayoritario tomó el nombre de Unión Cívica Radical Intransigente. El doctor Frondizi, en un discurso radial de tono sobriamente patético, mostró en la división ya

irrevocable el momento final de un proceso de diferenciación que había durado décadas: liberado de sectores ideológicamente poco seguros, el radicalismo reiniciaba su lucha frontal contra la oligarquía y el imperialismo, por un programa de realizaciones nacionales y populares. En esa lucha el orador prometía no cejar: no abandonaría el país, no se suicidaría; combatiría hasta el fin, sin dar ni pedir cuartel. ¿Por qué esta admirable pieza oratoria, que retomaba con elocuente dignidad temas bien conocidos y apreciados por nuestro público, fue recibida con tanta frialdad? Anotemos simplemente el hecho. Si en el plano de la mera habilidad política el doctor Frondizi había mostrado una extrema eficacia, le bastaba ubicarse en niveles menos modestos para ofrecer el espectáculo algo penoso de quien se acalora por cosas cuya importancia vital no logra hacer comprender a su público. Dejando de lado los aspectos enigmáticos de esta personalidad por tantas razones notable, acaso esa frialdad se vinculara, en parte, con el hecho demasiado notorio de que el doctor Frondizi había utilizado, y seguía utilizando, cuanto contacto le quedaba abierto con el gobierno. Por otra parte, su hostilidad implacable contra la oligarquía y el imperialismo iba acompañada de una deliberada vaguedad en cuanto a los representantes concretos de esas fuerzas nefastas, excepción hecha de los ex correligionarios del propio doctor Frondizi.

La crisis radical tuvo inmediatas consecuencias en la estructura gubernativa: el Ministerio del Interior, el de Educación, el de Comunicaciones fueron confiados a hombres de los sectores intransigentes antifrondizistas. Era una abierta toma de posición por la candidatura de Balbín, y una confesión implícita de que la Revolución no podía enfrentar con sus propias fuerzas una prueba electoral. En efecto, con Balbín pasaban a primer plano los aspectos exteriores de la tradición yrigoyenista: su oratoria floridamente sentimental, sus párrafos sinuosos, a los que hubiese sido excesivamente cruel

buscar un sentido, sus apelaciones reiteradas a ese "muchacho argentino" (a quien ofrecía —es de suponer que sólo simbólicamente— recorrer, la mano en la mano, los caminos de la patria), eran rasgos bastante repugnantes a los hombres de la revolución para que éstos los juzgaran capaces de captar la benevolencia de un pueblo al que comenzaban a creer políticamente irredimible. Mientras el gobierno se preparaba para la lucha electoral, la Intransigencia se presentaba como su adversario más serio. El doctor Frondizi había sostenido posiciones de izquierda; liberado del obstáculo de los sectores más moderados del partido, parecía en condiciones de imponer en él esa actitud. En cambio de ello, comenzó a reinterpretar su llamado a la lucha por la emancipación nacional y popular. En ella tendrían sin duda su papel las clases populares, pero a su lado lo había también para la burguesía nacional, para el Ejército, que en el pasado había impulsado nuestro progreso industrial, para la Iglesia, elemento de cohesión espiritual con el que era preciso contar si se quería que todas las fuerzas de la Nación se uniesen para la lucha contra los factores de atraso, hijos de la deliberada deformación de la economía nacional por parte del imperialismo y de la oligarquía.

Ese "frente nacional y popular" se acercaba cada vez más al proyectado por el señor Frigerio, que desde su revista hacía ya abiertamente recluta en favor del candidato intransigente. ¿Pero cuál era el aporte preciso del radicalismo intransigente a esa coalición política? En un principio pareció que —en la mente del candidato presidencial— ese aporte debía ser precisamente el de los elementos populares de la proyectada coalición, que habrían sido ganados a la Intransigencia por el revolucionario programa de ésta. Los hechos no confirmaban, sin embargo, esta hipótesis excesivamente optimista: ese apoyo popular faltaba todavía ganarlo... El doctor Frondizi se lanzó sin desmayo a la tarea de dar a su candidatura un aspecto

grato al electorado peronista: repudió la "constituyente-trampa", declaró que si su partido ganaba la mayoría se negaría a sesionar. Afirmó que los grandes problemas nacionales eran otros y en primer término la restauración del nivel de vida de las clases populares. Se esforzó en expresar estos puntos de vista, en su mismo tono de siempre, al nuevo público a que ahora se dirigía. La radio se transformaba, en los días anteriores a la elección de constituyentes, en una caja de sorpresas. De ella surgía la voz sepulcral de Arturo Frondizi repitiendo aplicadamente los párrafos de las "órdenes generales" que Perón solía proclamar en vísperas electorales. Para una masa de votantes más fervorosa que experta, el Líder leía uno a uno los nombres de los candidatos que debía elegir, a la vez que la prevenía contra las prepotencias y las mañas del patrón. Ahora otra voz impartía, en tono más fríamente autoritario, las mismas órdenes tantas veces escuchadas. De la radio surgía también la voz blanca de Elenita Frondizi, buscando sin éxito el timbre de otra voz inolvidable, para proclamar su humilde origen popular y a la vez su orgullo de ser hija del nuevo guía de nuestras masas trabajadoras.

Si la Intransigencia tendía a esperarlo todo del electorado peronista, tampoco el gobierno lo descuidaba: la propaganda en favor del voto en blanco, única protesta adecuada a la "dictadura militar", a la "revolución fusiladora", contó curiosamente con la benévola tolerancia de esa dictadura, de esa Revolución tan duramente atacada.

Se llegó así a la elección, en la cual los votos en blanco ocuparon el primer lugar, por muy escasa mayoría sobre el Radicalismo del Pueblo (con algo más de 2.100.000); la Intransigencia ocupaba el tercer puesto con 1.800.000; conservadores y socialistas excedían en poco el medio millón; tras de ellos venían los demás partidos. El resultado electoral mostraba el fracaso de la Intransigencia en su tentativa de captación del peronismo; mostraba también que, pese a la introducción del

sistema proporcional, el radicalismo seguía atrayendo a la mayoría de la opinión antiperonista.

En tales circunstancias se reunió en Santa Fe la Asamblea: los intransigentes, que formaban en ella el bloque más numeroso (77 en 202) se retiraron de inmediato. Bien pronto los siguieron los representantes de la Unión Federal y de pequeños partidos de orientación neoperonista. Estrechó más el quórum el retiro de una parte de la Unión Cívica Radical del Pueblo formada por adictos del doctor Sabattini. Mientras tanto, la convención seguía sin demasiado fruto sus deliberaciones. Las recriminaciones recíprocas entre radicales y conservadores ocupaban la mayor parte de su tiempo. Cuando se iba a comenzar la tarea reformadora, votado ya un artículo (el 14 bis) que actualizaba la enumeración de derechos individuales, el llamado bloque del centro (conservador) se retiró de la Asamblea despojándola del quórum necesario para sesionar. Lo hacía para evitar que los representantes radicales inscribieran en la Constitución innovaciones juzgadas excesivamente audaces (como nacionalización de servicios públicos, sentido social de la propiedad, carácter exclusivamente oficial de la enseñanza universitaria, etc.). Aparte estos motivos, había otro fundamental para que los pequeños partidos se desinteresasen de la constituyente: la demasiado amplia victoria del Radicalismo del Pueblo hacía inútil esperar que triunfase un sistema electoral menos hostil a las fuerzas minoritarias. En definitiva, la constituyente parecía probar el relativo acierto del gobierno (al confiar la conducción de su futuro político a una fracción radical), pero mostraba el fracaso de las líneas más generales del plan oficial, que eran lograr la alianza de los diversos partidos revolucionarios.

Mediante su gestión en la constituyente, el Radicalismo del Pueblo buscó acentuar los rasgos populares y progresistas de su fisonomía. También en este intento contó con el benévolo auxilio del gobierno, que había escogido las vísperas electora-

les para anular las demasiado célebres concesiones eléctricas de 1936. La Intransigencia, por su parte, moderó decididamente el tono de su propaganda. Para ello tenía razones sobradas: el electorado peronista se mostraba insensible a sus llamados y el no peronista tendía a tomarlos demasiado en serio. Las elecciones de junio habían demostrado que la sucesión del peronismo no estaba aún abierta: quien quisiese contar con su electorado debía negociar con los dirigentes. A esa negociación se dispuso el doctor Frondizi. Pese a las concesiones a los nacionalistas (que esperaba lo apoyarían *faute de mieux* y le brindarían una base en el Ejército), a patronos industriales y a la Iglesia, el programa que proponía al país seguiría siendo declaradamente hostil a las fuerzas económicas internas e internacionales que conformaban la realidad argentina (o, para decirlo en el lenguaje que aún usaba el doctor Frondizi, hostil al imperialismo y a la oligarquía). Este programa de duro esfuerzo sólo era factible con un sólido apoyo popular: en lugar de él el doctor Frondizi tenía la esperanza más modesta de ganar una elección con votos prestados luego de un duro regateo. Las publicaciones peronistas-frondizistas se complacían en ofrecer la idílica imagen de un Perón, apaciguado por su exilio en el trópico, embelesado ante la aparición de un nuevo e inesperado paladín de la Revolución Nacional y ansioso por legarle su manto... Pero esta inverosímil imagen no podía ser tomada en serio. El doctor Frondizi se limitó, por el momento, a subrayar con énfasis especial los puntos de su programa que llenaban aspiraciones del peronismo: libertad constitucional para todos, fin de las proscripciones políticas: ley sindical favorable a la unidad obrera, con un jefe sindical en el Ministerio de Trabajo.

En torno de este programa, el doctor Frondizi llamaba a una gigantesca conjunción de voluntades, que en buena medida logró realizar: a la adhesión del peronismo, de sectores importantes del nacionalismo, del comunismo (que frente al go-

bierno revolucionario osciló, como antes frente al peronismo, entre la oposición y el apoyo y cuyos representantes en la constituyente pudieron sorprender a sus colegas por la constante moderación de sus actitudes), se agregó la muy considerable masa de opinión independiente que vio facilitada su decisión por el espectáculo que brindaba el principal rival del doctor Frondizi, el doctor Balbín, quien repetía incansablemente su discurso al muchacho argentino por ciudades y campañas... Para ese electorado, el doctor Frondizi acentuó los aspectos austeramente intelectuales de su personalidad; para él el señor Frigerio montó un Centro de Estudios Nacionales, cuyos impresionantes ficheros reaparecían cíclicamente en los noticiosos cinematográficos; eran los complicados instrumentos de trabajo de un equipo técnico que planeaba cuidadosamente la gestión del futuro gobierno. ¿Hasta qué punto la transformación del austero líder revolucionario en no menos austero tecnócrata era una maniobra destinada a evitar el brusco paso de las tajantes afirmaciones del pasado a las aún más tajantes retractaciones del futuro? Es difícil decidirlo; acaso quepa una explicación más inocente, acaso el doctor Frondizi haya creído con el mismo obstinado candor de su público, en la existencia y eficacia de esos equipos. En todo caso seguía, por su parte, utilizando técnicas políticas menos innovadoras, pero asombrosamente eficaces: como antes el lenguaje preciso del revolucionario, ahora el aún más precavidamente exacto del tecnócrata era utilizado por él para cubrir los demasiado duros contornos de la realidad política argentina de una vaga penumbra, propicia para todos los provechosos movimientos estratégicos que su mente fértil planeaba...

El 23 de febrero de 1958 tanto virtuosismo tuvo su premio: armado pedazo a pedazo por un sabio arte combinatorio, el espectro de la gran avalancha popular de doce años antes volvía a erguirse en el horizonte nacional. Esa noche, mientras las barriadas fabriles volvían a llenarse de gritos y canciones

prohibidos, pero no olvidados, llegó la respuesta del país: en la Capital, en todas las provincias ganaba la Intransigencia Radical. Esa misma noche, el general Aramburu invitaba al vencedor a hablar por radio desde la casa de gobierno: el régimen revolucionario, acallando las voces de protesta que no dejaron de oírse entre quienes lo habían apoyado, se mostraba dispuesto a dejar el poder al Elegido del Pueblo.

Cuatro millones de votos contra dos y medio de su rival más inmediato, una nítida benevolencia universal hacia su figura antes abominada (que no era, por otra parte, sino un aspecto del clima benévolamente festivo que el resultado de la elección había lanzado sobre el país), eran sin embargo garantías de estabilidad más aparente que real.

En efecto, el resultado electoral estaba lejos de resolver todos los problemas para el candidato triunfante. Antes que a los llamados a la lucha, su victoria se debía a la utilización adecuada de las situaciones mismas contra las cuales el doctor Frondizi convocaba a la batalla. Lo que había custodiado celosamente durante dos años, aun a riesgo de callar cuando ese silencio parecía condenarlo ante quienes debían elegirlo, aun a riesgo de desconcertar a sus seguidores más fieles, era su carta de triunfo: la de constituir una salida legal. El papel de oposición tolerada que en 1931 había obtenido la Alianza Civil, el doctor Frondizi tuvo que conquistarlo para su partido mediante los más complejos equilibrios. Si lo defendió tan tenazmente era porque advertía muy bien que su electorado, si acaso gustaba de imaginar que votándolo ejecutaba una arriesgada acción revolucionaria, era en cambio incapaz de actos menos ambiguamente audaces. El último servicio que de él podía esperar lo había recibido entonces el 23 de febrero, ahora debía de nuevo componérselas solo.

Esto era menos fácil de lo que el mismo electorado creía. Para el país todo, la decisión del 23 de febrero significaba el fin de la absurda tentativa de devolverle su estructura prepe-

ronista: con alivio veía que podía volver a ser como espontáneamente lo había ido plasmando el caótico decenio. En este sentido, al pronunciarse contra la vuelta atrás con que identificaban la política de la Revolución, quienes así lo hacían creían pronunciarse por el presente contra el pasado, por la realidad viviente contra actitudes históricamente condenadas. De allí la impaciencia creciente contra las posiciones revolucionarias, que penetró uno a uno en los partidos políticos antiperonistas, y llevó a la escisión del socialismo y del conservadorismo, y no dejó de crear en otros grupos malestar muy vivo. Era esa seguridad acerca del rumbo de la historia lo que contribuía a quitar también todo espíritu de lucha a la muchedumbre de vencedores del 23: para ellos como para los triunfantes hacía doce años, más que de combatir, se trataba de recoger los frutos de la victoria.

Pero las cosas no estaban tan claras: si el camino que según se decía había escogido la Revolución (el retorno al pasado preperonista), podía ser errado, ello no absolvía de la urgencia de tomar uno, ante la imposibilidad de mantener una estructura nacional cuyas fallas el régimen peronista había terminado por advertir demasiado bien, aunque sucumbió en las primeras tentativas de corregirlas. Cualquiera fuera el camino elegido para salvar esas fallas, éste implicaba transiciones muy duras. Por otra parte, la libertad de elección no era total: el doctor Frondizi no podía ignorar que si había llegado a ser presidente era porque, antes de ser votado con dudoso entusiasmo por el pueblo, había sido aceptado como candidato con entusiasmo aún menor por las Fuerzas Armadas. Ese lazo de origen signaba el poder que recibía y parecía supeditarlo a la tutela del poder militar del que en parte derivaba. ¿Lo advirtió desde el comienzo el doctor Frondizi? Parece que no. En todo caso mostró comprender que el programa que le había servido para ganar la presidencia ya no era un buen auxilio para conservarla.

Y aquí ocurre algo que parece exigir algún comentario, aunque en rigor lo haga imposible: la imperturbable serenidad con que el doctor Frondizi abandonó su prédica de veinticinco años, se proveyó de una vestimenta de elegancia algo anticuada, adoptó la personalidad del político conservador y comenzó a predicar, con su afilada voz de siempre, el evangelio de la libertad económica, a modular el himno, tantas veces repetido por nuestros políticos de hace cincuenta años, en loor del fecundo capital extranjero. Mezcló todo ello con cantos al desarrollo económico, tema lleno aún de la áspera poesía de los planes quinquenales soviéticos, y proporcionó así al país (y hubiese proporcionado al mundo, si no hubiera estado ocupado en cosas más serias) un espectáculo en verdad singular. La indignación que produjo este ejemplo de impávida contramarcha (más notable por ir acompañado de un torrente de inspiradas consideraciones sobre la conciencia moral de nuestro pueblo y de no menos deslumbrantes manifestaciones de súbita fe religiosa), esa indignación, que ganó al país entero, no debe hacer olvidar dos circunstancias dignas de ser notadas: la escasa resistencia encontrada por la nueva política fue signo claro de que el apoyo de quienes adherían al programa originario hubiese ofrecido una base de sustentación claramente insuficiente; esa conversión de una política a otra no fue, de ninguna manera, tan brusca como pudo haberlo parecido.

En un primer momento, el gobierno de Frondizi creyó acaso que el sacrificio del nacionalismo económico debía ser la única corrección importante a su programa. Dotado de un gabinete formado por desteñidos políticos de la UCRI, excepto un ministro de Relaciones Exteriores de orientación nacionalista que respondía al señor Frigerio, el gobierno de Frondizi creó además un complicado sistema de secretarías paralelas a los ministerios en que el influjo del señor Frigerio era también dominante.

Mientras el propio presidente reorientaba desde YPF la política petrolera del país, en un sentido que él mismo se había encargado de estigmatizar en circunstancias difícilmente olvidables, el señor Frigerio llevaba su colaboración hasta emprender viajes al extranjero en recluta de inversores. Con ese aporte se lograría el autoabastecimiento de combustibles, se pondrían las bases de una industria pesada y se corregiría finalmente, gracias a ello, la estructura deficitaria de nuestra balanza de comercio. Mientras llegaba ese momento, Frondizi (que podía invocar el doble precedente del régimen peronista y el libertador, pero prefería recordar el de la política brasileña de desarrollo) no temería recurrir a la inflación, sea como medio de financiación de obras, sea para alivio momentáneo del descontento frente al inevitable descenso del nivel de vida.

Esta política tuvo su primera manifestación en el aumento del 60% de sueldos y salarios, decretado por el doctor Frondizi al tomar el gobierno (y no acompañado de recaudo alguno destinado a disimular su repercusión en los precios) y siguió manifestándose en una emisión vertiginosa, con caída del peso. Esta conducción económica, que enfrentaba serenamente sus consecuencias negativas, en la esperanza de los cambios estructurales que iban a terminar con ellas, iba acompañada en el plano político del cumplimiento por lo menos parcial de las promesas formuladas al peronismo. A la derogación de la legislación represiva acompañó un cambio en la intervención de la C.G.T. que auguraba su normalización pronta, en condiciones favorables a esa tendencia. Por su parte, la nueva ley de Asociaciones Profesionales afirmaba vigorosamente el principio de unidad sindical, a la vez que concedía al Estado un control de la vida gremial que los peronistas suponían destinado a favorecerlos. En respuesta a todo ello, el peronismo guardó actitud comprensiva frente al abandono de puntos esenciales del programa "nacional y popular", que eran

precisamente los que Perón había intentado abandonar en las últimas etapas de su gobierno.

En las Fuerzas Armadas, el gobierno de Frondizi se empeñó en introducir un inseguro equilibrio político, capaz de tenerlas permanentemente ocupadas en sus asuntos, para librarse así de su celosa vigilancia: mejoró para ello la situación de los grupos nacionalistas en el Ejército y la Aeronáutica y reconoció en la Marina el bastión inexpugnable de la tendencia "democrática".

Esta política parecía muy razonable. Su apelación al gran capital internacional, y en especial al norteamericano, era su punto principal. Flanqueado por dos fuerzas —la peronista y la setembrina— dispuestas ambas a buscar el apoyo económico y político extranjero, el gobierno triunfaba sobre ellas al anticipárseles en este punto, con una audacia de la que habían carecido sus rivales, cuando habían intentado desde el poder entenderse con esas fuerzas no exclusivamente económicas. Al apoyo de éstas se debía agregar el eclesiástico. Para alcanzarlo, el doctor Frondizi se apresuró a cumplir, también aquí, sus promesas electorales. La reglamentación del artículo que autorizaba la instalación de universidades privadas debía ser el primer paso para la concesión de esa "libertad de enseñanza" solicitada por los obispos y prometida por el candidato intransigente. La realización de esa promesa provocó violenta lucha en setiembre de 1958: a una manifestación católica respondió otra dos veces mayor en contra de la innovación propuesta; mientras muchos diputados intransigentes luchaban sin éxito con su conciencia, no pocos senadores la vencían gallardamente, y con la aprobación unánime de la alta Cámara el proyecto caro al presidente recibía existencia legal. En las calles se llegó a levantar barricadas. Muy curiosamente, la defensa de la tradición laica, que según comentaristas benévolos de la política presidencial sólo podía interesar a muy reducidas minorías, pues no figuraba entre los "grandes problemas naciona-

les y populares", logró sin embargo reunir coléricas muchedumbres; otras innovaciones acaso más graves encontrarían menos resistencia.

En todo caso, el Parlamento utilizó la agitación estudiantil para prohibir todos los actos públicos: la medida —completada poco después con el estado de sitio, que volvía para quedarse— iba muy evidentemente dirigida contra los peronistas. ¿Qué había pasado? Para octubre, esa apenas esbozada política estaba ya en quiebra. Había fracasado en lo esencial la recluta de capitales; tampoco la política sindical había sido un éxito: los grupos no peronistas se defendían mejor de lo previsto, y la tentativa de eliminar a los dirigentes ferroviarios "libres" provocó una huelga frente a la cual el Ministerio de Trabajo debió ceder. Por otra parte, la misma aceptación por parte del peronismo de una política como la del gobierno de Frondizi facilitaba la posición de sus rivales sindicales: en este sentido fue revelador lo ocurrido en el gremio petrolero, en el cual los peronistas, primero hostiles, debieron adherir finalmente a la huelga inspirada por sus rivales comunistas. Antes de volver a controlar, con apoyo oficial, el movimiento obrero, el peronismo era lanzado, es verdad que sin entusiasmo, a la oposición. El resultado era una fragmentación política de los sindicatos, debida (más que a divergencias en la base) a la insuficiente capacidad de los dirigentes peronistas, que en los gremios ya organizados antes de 1943 no podían competir con los libres o los comunistas. Así pudo verse a los talleres ferroviarios, cuya zona de influencia electoral había dado apoyo casi unánime al voto en blanco, seguir disciplinadamente las órdenes de huelga de las directivas instaladas por la intervención revolucionaria. Esta fragmentación, si aseguraba una resistencia menos organizada a la política oficial, imponía a todos los rivales una unánime oposición a esa política. El sector sindical podía no provocar alarmas demasiado serias, pero no serviría ya para equilibrar con su apoyo el que el gobierno debía

necesariamente buscar en las Fuerzas Armadas. En éstas, la política gubernativa se reveló particularmente ineficaz. La lucha contra las tentativas oficiales de cambiar el equilibrio de fuerzas legado por la Revolución se manifestó ya en 1958 en la Aeronáutica: frente a una rebelión pacífica de toda el arma, el secretario devoto al doctor Frondizi debió abandonar su cargo. En el Ejército y en la Marina se preparaban conflictos análogos. En todas partes se hacía evidente que la estabilidad presidencial dependía del respeto por las situaciones heredadas. El presidente tendría siempre sobre sí la vigilancia celosa de una oficialidad justamente desconfiada, y no contaba con ninguna otra fuerza capaz de equilibrar la que, siéndole en el fondo hostil, hacía sin embargo posible la supervivencia de su harto problemático poder.

Sacando rápidamente la lección de los hechos, el doctor Frondizi decidió cambiar más radicalmente su política: de ahora en adelante iría aceptando en dosis crecientes los puntos de vista que el gobierno militar había proclamado, pero no se había atrevido a llevar a los hechos, y a la vez aceptaría las condiciones inesperadamente duras que el capital norteamericano imponía.

Pero antes de ese solemne cambio de rumbo el doctor Frondizi procedió a quemar no precisamente sus naves sino las de sus rivales. En noviembre de 1958, el ministro del Interior, doctor Vítolo, acusó al vicepresidente, doctor Gómez, de haberle anunciado la proximidad de un movimiento militar, y de haberle hecho saber que, como salida constitucional, el propio doctor Gómez estaba dispuesto a organizar un gobierno de unión nacional. De inmediato el doctor Gómez, en quien, en efecto, algunos veían la figura clave para una deposición semilegal del presidente Frondizi, adoptó el tono de la inocencia sorprendida. Luego de varios días de conferencias de prensa, ricas en recuerdos centrados en la escuela de Berabevú, donde había enseñado algunos meses hacía un cuarto de siglo,

Gómez prefirió sin embargo renunciar a afrontar un juicio político. Lograda esta dimisión, la única salida legal (y nuestras Fuerzas Armadas muestran creciente afición a las salidas legales), en caso de apartamiento del presidente, era llamar a nuevas elecciones inmediatas: una aventura que ni aun el más gallardo de nuestros conspiradores desearía correr. Así, amparado por un mayor margen de tolerancia, el doctor Frondizi anunció una nueva política de austeridad, aconsejada por expertos del Fondo Monetario Internacional. Los resultados de análogos consejos, para economías como la chilena, el propio doctor Frondizi gustaba de recordarlos sarcásticamente en el pasado.

El plan era una suerte de extrapolación del de Prebisch. El gobierno buscaba sobre todo la estabilización, mediante una política monetaria antiinflacionista y el estímulo de nuestras fuentes tradicionales de divisas extranjeras: en pocos meses el precio de tierras y ganados iba a multiplicarse por cuatro. Mientras tanto, el aumento del costo de la vida no podía compensarse con mejores salarios, en los que se denunciaba otra causa de inflación; la disminución del poder adquisitivo del mercado interno, condenada en el pasado como nefasta, era ahora mostrada por el doctor Frondizi como fuente de una saludable competencia, y si las industrias artificiales sufrían por ello, el conjunto de la economía nacional salía ganancioso, al orientar mejor sus esfuerzos. En la serena contemplación de ese brillante futuro el doctor Frondizi partió hacia los Estados Unidos.

Allí tuvo ocasión de exponer sus nuevas ideas a un público más dispuesto a apreciarlas. ¿Obtuvo otros resultados? Es difícil responder a esta pregunta; en todo caso, cuando volvió al país debió enfrentar un año pródigo de tormentas. La más grave ocurrió en julio: la publicación de un supuesto pacto político tramitado por el señor Frigerio y concertado por Perón y Frondizi (publicación debida al malhumorado ex presidente)

provocó una gigantesca tormenta político-militar, que el presidente logró atravesar gracias al sacrificio de Frigerio y a una reorganización ministerial que ponía la ejecución del plan de estabilización en manos del señor Alsogaray.

Este notable funcionario contaba, en efecto, con la confianza de las Fuerzas Armadas. Ingeniero militar, ministro en las primeras etapas revolucionarias, había fundado luego un partido —el Cívico Independiente— que contó con excepcionales medios de propaganda y se lanzó a una campaña contra nacionalismo y dirigismo económico, eficaz y colorida, que demostró que no sólo nuestras clases populares eran sensibles a los halagos demagógicos. Los discursos en que el señor Alsogaray prometía que "el gran cambio", consistente en la eliminación súbita de todos los controles, devolvería en pocos meses una sólida prosperidad al país eran seguidos con embeleso por grupos mucho más amplios de lo que harían suponer los clamorosos fracasos electorales de su partido. Ahora estaba en condiciones de realizar sus promesas, lo que no dejaba de alarmar a los que advertían hasta qué punto era sumario su bagaje de economista. Afortunadamente, iba a contar con la colaboración de un equipo ya probado en su mayor parte en la década del 30. Gracias a ello su acción económica, si menos innovadora, fue también menos devastadora de lo que podía esperarse. Esta elegante solución permitió también que varios de los que introdujeron en el país el dirigismo retomaran su gestión sumándose —sin la enfadosa publicidad que dan las primeras filas— a una línea basada en los remozados mitos del liberalismo económico. En tales condiciones, el señor Alsogaray es, más bien que jefe del equipo económico, su jefe de propaganda. Pero su inquieta persona no cumple tan sólo esa función, sirve además para dejar en la penumbra la figura del presidente, cada vez que éste advierte que está a punto de hacer crisis la impaciencia de algunas fuerzas a las que debe su mantenimiento en el poder.

Así, cuando en setiembre de 1959 la disputa por el cargo de comandante en jefe del Ejército estuvo a punto de provocar una batalla en el centro de Buenos Aires, fue el señor Alsogaray quien llamó a las Fuerzas Armadas a recuperar el sentido de las proporciones y el de su deber. Llamamiento infructuoso: a partir de ese episodio se afirma cada vez con más vigor una suerte de doctrina sobre el papel tutelar de esas fuerzas que no hace sino recoger —y con ello confirmar— lo esencial de la situación vigente. Gracias a ello las Fuerzas Armadas afirman, con igual vigor, su derecho a vetar ciertas soluciones políticas y su perfecto apoliticismo. Esta posición las muestra, entonces, afincadas en el mismo equívoco en que se enredaron hace treinta años. Pero de esa doctrina autocontradictoria se muestran ahora dispuestas a sacar corolarios cada vez más amplios: si la revolución, legítima en derecho, es de hecho evitada, no es evitada en cambio una supervisión constante de las actividades gubernativas, con públicas expresiones de deseos, extrañamente parecidas a órdenes, que interfieren en todos los niveles de esa actividad, desde las leyes que deben ser votadas hasta los funcionarios subalternos que deben ser designados o removidos. Esta tutela del poder militar sobre el político va acompañada de cambios en la estructura institucional castrense; para evitar la sospecha de complicidad en una siempre posible tentativa de retorno al control de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno, los altos mandos militares deben actuar, cada vez más, de acuerdo con directivas que les llegan de sus subordinados. Mientras el gobierno representativo desaparece como realidad de nuestra vida política, sus principios triunfan en las Fuerzas Armadas...

Estas tienen así, en el régimen de hecho que se dibuja con creciente claridad, un papel importantísimo. La resistencia misma contra la nueva política de Frondizi lo aumenta: la oposición peronista, adicta a un terrorismo más aparatoso que eficaz, motivó, a comienzos de 1960, la instauración de jurisdic-

ciones militares para delitos políticos. Pero esta solución tampoco era del agrado de nuestros hombres de armas, que preferían que la impopular tarea de represión estuviese a cargo del poder civil. De todas maneras, ellos aceptan e imponen un estilo de lucha política cada vez más duro. Al lado del peronismo, viejo y poderoso adversario, ven con alarma un peligro comunista que, evocado primero por el gobierno de Frondizi para provocar inquieta generosidad en el extranjero, es ahora empleado para justificar retrospectivamente sus evoluciones políticas, para dibujar, a los lados de la estrecha y empinada senda tomada por el gobierno, abismos de subversión caótica, de tiranía proletaria. Son las Fuerzas Armadas el sector más sinceramente adicto a esta imagen apocalíptica del actual momento argentino, que es, a la vez que fruto necesario de una demasiado prolongada tensión política, factor poderoso para su perduración.

Esta invocación del peligro urgente que amenazaría al entero orden social sirve para justificar la preferencia oficial por un conformismo ideológico fomentado con un espíritu sistemático sin precedentes en el país. El conformismo es —en cierta medida— indispensable a todo régimen político, garantía de la estabilidad que un demasiado aguzado espíritu crítico de parte de sus gobernados podría amenazar, pero es aún más necesario (en una situación como la actual, que da pocos motivos para la conformidad sincera), para un régimen que sobrevive gracias a la minuciosa traición a sus propios ideales y pretende hacer olvidar este hecho evidente.

Este conformismo, exigido por el gobierno, comenzó antes por ser exigido al gobierno: ante la presión de aquellos a cuyo desdeñoso apoyo debía su supervivencia, el doctor Frondizi debió sacrificar a colaboradores cuya única culpa consistía en haber hecho eco con excesivo entusiasmo a cuanto el doctor Frondizi iba predicando hace unos años. A esos colaboradores se achacaba un solapado marxismo; el marxismo se ha

constituido, en efecto, en el ídolo polémico que engloba a cuanto excede de los límites de la ortodoxia política en que coinciden el doctor Frondizi y muchos de sus aparentes adversarios. Así entendido constituye un siempre renovado peligro: no sólo ese viejo caudillo radical de Banfield, el doctor Alende, es marxista porque pretendió aumentar los impuestos a los terratenientes; no sólo los ya no jóvenes jefes de la masonería son marxistas, porque defienden esa "idea totalitaria" que es el laicismo; no sólo son marxistas los profesores de filosofía que —sin conciencia de la magnitud de su crimen— siguen explicando a Kant, que como bien sabía Paul Bourget es un maestro de hipócrita inmoralidad; es marxista el doctor Zavala Ortiz, que duda de la justeza de la política petrolera; el Partido Demócrata Cristiano, cuando niega que el juego de las leyes económicas produzca siempre resultados moralmente aceptables; el general Aramburu, que muestra indulgencia culpable por el dirigismo económico, una de las más siniestras encarnaciones del Mal; el doctor Cueto Rúa, dirigente conservador que habría mostrado, durante su gestión ministerial, algo más que proclividades teóricas por esa perversa doctrina. Pero —respondiendo a este ataque— el señor Cueto Rúa dirá que es marxista el señor Alsogaray, demasiado atento —debido a su asiduo comercio con los clásicos del materialismo dialéctico— al factor económico, e indiferente a ese reino del espíritu hacia cuya conquista ha orientado siempre su acción nuestro partido conservador. Y otros dirán que es marxista el doctor Frondizi, dispuesto a resumir en su gestión gubernativa los aspectos más repulsivos de la servidumbre capitalista, para provocar esa reacción de la que será a la vez el remoto causante y la víctima...

En esta recíproca vigilancia ideológica hay mucho de pasiva imitación de lo que se ve hacer al prójimo, hay también un conjunto de tentativas destinadas a utilizar en favor de ciertos intereses particulares (en lo cultural, de los católicos contra

los liberales; en lo político, de los conservadores contra los radicales del pueblo o los demócratas cristianos) una tendencia generalizada. Pero hay también otras razones menos fútiles para este vasto y algo penoso espectáculo de militante estupidez a la vez espontánea e inducida. ¿Acaso un real avance de puntos de vista marxistas? Sería demasiado decir: en todo caso sí una actitud nueva frente a lealtades políticas, cuyo sentido se descubre condicionado a ciertos datos de la realidad, no porque se hayan leído persuasivas descripciones de esa relación condicionante, sí porque los cambios mismos de esa realidad se encargan de poner de relieve hasta qué punto son suficientes para tornar anticuados los sistemas ideológicos a los que solíamos ofrecer nuestra devoción. De allí un relativismo político, que puede ir desde las más autodestructoras búsquedas de una implacable lucidez hasta la mera pérdida de la vergüenza. El surgimiento de esta actitud nueva, hija necesaria de una época de cambios vertiginosos, se vinculó para algunos con las enseñanzas de autores marxistas. Pero ese influjo ideológico es más consecuencia que causa, y por otra parte someterse a él en este aspecto no implica en modo alguno aceptar ni los principios ni mucho menos la vocación revolucionaria del marxismo; esta concepción nueva de lo político inspira también por ejemplo los comentarios políticos de nuestros periódicos conservadores o nacionalistas. Y por otra parte, aun quienes hacían más explícita profesión de fe revolucionaria parece que incurrían a menudo en exageración bravucona: basta pensar que entre quienes votan hoy disciplinadamente los pasos sucesivos de la política de Alsogaray figuran algunos que hace sólo dos años no se conformaban con nada que no fuese la revolución social.

La causa real y más profunda de la vigilancia ideológica antes apuntada es menos el peligro de una oposición revolucionaria armada de un instrumento conceptual temible que la desazón ante lo que tiene de facticio y de ficticio el orden moral

restaurado: la presencia del doctor Frondizi al frente de esa cruzada de regeneración en el orden, el trabajo, los valores tradicionales, no es sino el símbolo particularmente escandaloso de una quiebra mucho más grave: una cierta pérdida de la inocencia, de la buena conciencia, que hace de toda restauración un régimen a la defensiva, alerta frente a peligros que no parecen en sí mismos demasiado inquietantes, vistos sin embargo con alarma porque anuncian un desenlace que no podrá evitarse.

Es entonces la conciencia de la propia flaqueza la que crea ese clima de inseguridad entre los grupos que dominan la Argentina de hoy. En efecto, la acción opositora no justificaría tanta inquietud: el gobierno ha hecho descender vertiginosamente los salarios reales; ha creado la penuria —por primera vez real y universalmente sentida— en los sectores medios y populares urbanos; ha ofrecido a ese público, tan escasamente preparado para la benevolencia, el espectáculo de una política que había llamado antes de entrega, que en cada una de sus etapas ha venido a revivir episodios que no sólo el grupo gobernante sino la entera opinión pública había juzgado propios de etapas extremadamente corrompidas de nuestra política; ha llevado adelante esa política en un renovado clima de corrupción revelado clamorosamente en varios *affaires* particularmente escandalosos, bien conocidos, por otra parte, por cuanto no se obstinan en no ver lo evidente. Y todo ello lo ha podido hacer enfrentando una resistencia que sorprende por lo exigua.

Esa resistencia viene, en primer término, del bloque vencedor el 23 de febrero. Anotemos la presencia en él de algunos que no olvidaron en nombre de qué se los reunió en esa fecha: intransigentes o independientes tienden a engrosar las filas de esa izquierda que en nuestro país se expresa sobre todo mediante la firma de innumerables manifiestos que los grandes diarios prescinden de publicar. Están además los comunistas,

que llevan adelante su lucha tenaz y obstinada por copar sindicatos (sin demasiado éxito) y siguen ofreciendo la misma solución que presentaron para todo cuanto ocurrió de notable en el país, desde la Campaña de 60 días hasta la epidemia de poliomielitis: la formación de miles de asociaciones de barrio, fundadas y bien pronto allanadas, que sirven para documentar el carácter proteico del peligro rojo.

Está, finalmente, el peronismo. Este vacila entre una política de oposición revolucionaria, que últimamente ha encontrado en Cuba un modelo preciso, y una de retorno al orden legal, aceptando en sus rasgos esenciales la situación dominante o —para decirlo en forma menos ingrata a oídos peronistas— "rehaciendo el frente de 1945" con la Iglesia, el Ejército y las fuerzas económicas. Esta última solución es intermitentemente apoyada desde el gobierno; luego del socialcristianismo, predicado a lo largo de 1959 por el arzobispo de La Plata, las tentativas menos indirectas en las que parece empeñado el señor Frigerio se realizan sin duda con vistas a facilitarla. Es difícil, sin embargo, encontrar una solución que cuente con la adhesión del conjunto del peronismo. Esa dificultad parece ser claramente advertida por el jefe del movimiento, que lo gobierna desde sus sucesivos lugares de destierro en forma menos enérgica que en el pasado, y parece resuelto —de acuerdo con sus viejas inclinaciones— a no escoger solución alguna. Esa dirección incoherente, que reparte las rehabilitaciones con mano tan liberal como las excomuniones, y proporciona benévolamente —desdeñando los peligros de la contradicción— las instrucciones que cada emisario espera recibir, puede acaso impedir la fragmentación del peronismo, pero no hay duda de que le resta en lo inmediato eficacia.

Y compromete su gravitación electoral. Las elecciones parciales de la Cámara de Diputados, en marzo de 1960, si revelaron una cifra de votos en blanco que repite la de 1957, mostraron también el retroceso del voto en blanco en las zonas

rurales, donde el peronismo repetía la estructura de los partidos tradicionales y sus caudillos parecen fatigarse de la oposición. El avance del voto en blanco en la capital y zonas fabriles —donde superó las cifras ya impresionantes de 1957— no puede en cambio identificarse totalmente con un avance peronista. Aun dejando de lado el aporte comunista, es preciso tomar en cuenta la intensa propaganda destinada a dar al voto en blanco un carácter de genérica protesta antigubernamental. Esta, en efecto, no encuentra en el voto por los partidos tradicionales situados en la oposición una expresión totalmente desprovista de ambigüedades. Porque estos partidos aceptaron —aún antes que la Intransigencia— los rasgos esenciales de la situación actual. Porque —sean cuales fueran sus declaraciones programáticas— siguen aceptándolos. Sin duda esta aceptación es más explícita en unos grupos que en otros: basta examinar la concreta conducta de todos esos sectores para comprobar, sin embargo, que tales diferencias no son esenciales. Ese bloque de oposición constitucional mantiene todavía en 1960 su caudal electoral de 1957, y dentro de él la redistribución de fuerzas —menor de la esperada— tiende a favorecer a los conservadores, en perjuicio de otros partidos pequeños (demócrata-cristiano, Unión Federal). El caudal del mayor partido opositor, la Unión Cívica Radical del Pueblo, permanece —por el contrario— constante. Este partido no cumple, sin embargo, las tareas políticas a que su gravitación electoral lo habilita; enfrenta un laberinto de perplejidades no menos enmarañado que el del peronismo; también él vacila entre una actitud subversiva y una oposición leal...

Este cuadro no da cuenta sin duda de todas las fuerzas actuantes en el país: así, habría que mencionar, desprendido del segundo grupo, pero con tendencia creciente a identificarse con el primero, el Partido Socialista Argentino; habría que mencionar también a los llamados trotskistas (marxistas revolucionarios no comunistas). Habría que anotar también a na-

cionalistas de oposición y nostálgicos del setembrismo, hermanos ya no siempre enemigos, que siguen su búsqueda del "general cristiano" cuya espada ponga fin a tanta abominación. Todos ellos pueden tener influencia ocasional pero no bastan para cambiar los aspectos esenciales del cuadro político argentino.

Esta oposición desorientada, que advierte muy bien la insuficiencia —y aun la ambigüedad moral— de una política respetuosa del orden llamado constitucional, pero advierte también que una resistencia más enérgica la aislaría del cuerpo nacional, no es —en sus mismas perplejidades— sino la expresión de un país sin duda insatisfecho, pero sobre todo fatigado de aventuras, ansioso por llegar a puerto. Si el doctor Frondizi lograra conducirlo a uno, por estrecho e incómodo que fuera, mucho le sería perdonado. El y sus seguidores lo saben; sin duda esperan apasionadamente la segunda etapa de su plan de rehabilitación: la del desarrollo. Saben que gracias a ella el país volverá a ser estructurado para complementar el sistema económico de nuestra nueva metrópoli; saben y esperan que esa deformación se transmitirá del cuerpo al alma del país, que la prosperidad futura tendrá el mismo sabor humillado y amargo que la penuria presente: se dará en la mansedumbre, en la aceptación resignada de un lugar no elegido por nosotros en ese mundo occidental que el doctor Frondizi sigue viendo (ahora que busca integrarse en él como cuando lo examinaba con mirada hostil) como gobernado a la vez por el Vaticano y por los Estados Unidos. En esa humillada prosperidad ven la salida para el problema político de su grupo, que es también el del país. ¿La encontrarán allí? ¿El camino de la entrega, más empinado y doloroso que el de la virtud, nos conducirá a algún estable punto de llegada? ¿Estos treinta años no serán sino la penosa transición de una servidumbre económica a otra? ¿Concluido el proceso, terminará el país por aceptar lo que en su nombre, pero sin su consentimiento, se ha he-

cho para cambiarlo? No hay en estas perspectivas nada de improbable, pero para corregir lo que tienen de excesivamente estático habría, sin embargo, que tener presente que el mundo en el cual esta política busca integrarnos es un mundo en lucha a la vez exterior e interna. El puerto que se busca será entonces previsiblemente tan tormentoso como la navegación que a él nos conduce: la zozobra, el sobresalto de una lucha que no es totalmente la nuestra seguirá siendo rasgo propio de la vida argentina, aun si una nueva ola de prosperidad logra cerrar las heridas de treinta años de pacífico desgarramiento interior, fundar un equilibrio político menos amenazado de súbitas rupturas.

Argentina en el callejón

Cuando se escribían estas páginas la Argentina vivía con intensidad sin precedentes el conflicto que en rigor venía arrastrando desde hacía treinta años: a través de desarrollos excesivamente complejos, de los que podrá darse aquí una imagen necesariamente esquemática, esa intensidad parece atenuarse en el presente; nada autoriza a pensar, sin embargo, que con ello hayan perdido vigencia los rasgos esenciales de ese conflicto mismo, y no es difícil profetizar que éste volverá a conocer en el futuro nuevos períodos agudos. Un elemento de agudización ha perdido sin embargo la gravitación que una vez tuvo: si ese conflicto fue vivido entre 1958 y 1962 con intensidad tan viva, ello se debió en buena parte al influjo que alcanzó el doctor Frondizi y la interpretación que él dio del proceso que creía orientar: hemos visto ya cómo el doctor Frondizi creyó necesario cambiar en el gobierno mucho de su bagaje ideológico; lo que no quiso ni pudo cambiar era la actitud misma con que enfrentaba la lucha política; una actitud llena de fría pasión, que necesariamente simplificaba las posiciones contrapuestas y cargaba a esa contraposición de tensiones que sólo se hubiese justificado si el doctor Frondizi hubiera sido en efecto un revolucionario; en medio de una ges-

tión de gobierno que sólo tenía de novedoso acentuar los rasgos que el doctor Frondizi había juzgado negativos en las de sus predecesores, la insistencia en esos usos polémicos tenía algo de absurdo.

Pero la presencia de ese clima perturbado estaba lejos de provocar en lo inmediato sólo perjuicios a la estabilidad política; en la medida en que el doctor Frondizi había logrado persuadir a estratos cada vez más amplios de opinión pública de que la única alternativa a su permanencia en el gobierno era la guerra social, encontraba menos difícil superar las periódicas presiones de sus sostenes militares. Ese manejo del dramatismo como recurso político estaba lejos de ser una artificiosa maniobra del doctor Frondizi; era por el contrario el aspecto más sincero de su compleja actitud, correspondía muy evidentemente a la imagen que el doctor Frondizi se hacía de su lugar en el país; correspondía también a una imagen del país cultivada durante décadas en los grupos en los que el doctor Frondizi había actuado, en la cual se combinaba el reproche contra el temperamento apacible con que la Argentina suele enfrentar sus problemas políticos con una audaz decisión de ignorar ese dato y proclamar que por debajo del orden sólo aparente estaban constantemente preparándose las violencias clarificadoras. Esa imagen servía ahora para gobernar al país; era presentada a éste desde la más alta tribuna para que se reconociera en ella... No tiene nada de extraño que cada vez más la Nación haya comenzado a tenerla por válida. Esto es aún menos extraño porque en efecto parecía haber cada vez más razones para aceptarla, y no todas esas razones eran proporcionadas por la política del gobierno de Frondizi y las reacciones que ella provocaba.

Fue ante todo la instalación de un régimen socialista en Cuba la que vino a dar una confirmación impresionante al pesimismo del doctor Frondizi y sus adversarios sobre la estabilidad del orden social vigente en Latinoamérica, y que al

acentuar ese pesimismo, preparó el clima político que puso fin a la experiencia Frondizi.

La revolución cubana fue vista primero con alborozo por los sectores más ortodoxamente antiperonistas, con repugnancia por los peronistas y con indiferencia por el resto del cuerpo político: Cuba había eliminado a una dictadura corrompida y terrorista; la había reemplazado con un gobierno de inexpertos jóvenes universitarios de los que se podría esperar que repitiesen la gestión tan insuficiente de los que treinta años antes habían eliminado a Machado para caer bien pronto bajo la tutela entonces menos dura de Batista. Esa versión más audaz de lo que había sido la resistencia estudiantil argentina contra el peronismo podía despertar el legítimo embeleso de *La Prensa* y el recelo de la opinión peronista, que no olvidaba las excelentes relaciones que su líder había mantenido desde el gobierno con la entonces completa constelación de dictadores de la América tropical. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente en Cuba; el eco argentino del proceso fue aún más lento. Hubiese sido acaso menos intenso si el proceso revolucionario cubano no hubiese tenido frente a sí a una administración inexperta como era la de Kennedy en los primeros meses de su gestión: ansiosa de superar al inmovilismo de la era Eisenhower, gustaba entonces de imaginarse a la cabeza de un movimiento revolucionario de alcance mundial; sobre la base de esas fantasías preparó la lucha contra Cuba como una suerte de guerra santa que debía ser combatida en primer término en la conciencia latinoamericana. Los gobiernos de los países latinoamericanos menores, resignados a todo, siguieron disciplinadamente el nuevo capricho de su metrópoli; sus delegados aprendieron laboriosamente y repetían sin cansarse el nuevo evangelio elaborado en Harvard por los profesores Schlesinger y Rostow; sin duda tenían sus reservas —como todos los observadores sensatos— sobre el desenlace de un conflicto así encarado; acaso la administración Eisen-

hower, con todas sus limitaciones, habría sabido enfrentar a una opinión latinoamericana irremediablemente suspicaz con hechos consumados —tal como lo había hecho en el caso de Guatemala— antes que con una combinación de razones escasamente convincentes y fracasados golpes de mano sobre la isla revolucionaria, que inspiraban por su parte dudas sobre el vigor de la potencia que en el pasado había impuesto con tanta insolencia su voluntad sobre las Antillas (y no sólo sobre ellas). La Argentina, junto con las otras naciones hispanoamericanas que se juzgaban demasiado importantes para seguir en todos sus vericuetos la política de los Estados Unidos, trató de guardar una actitud sensata frente al conflicto: es mérito del presidente Frondizi haber perseverado, casi hasta las últimas consecuencias, en esa línea; es acaso su culpa no haber advertido que toda su gestión anterior le vedaba tomar ahora ese camino; gracias a ella las fuerzas que necesariamente debían oponerse a su política cubana habían adquirido suficiente fuerza para imponerle brutalmente el retorno a la estricta ortodoxia occidental y cristiana.

En todo caso el problema cubano comenzó a hacerse candente sólo en 1961: a comienzos de ese año el Partido Socialista Argentino ganaba para su candidato, el doctor Alfredo Palacios, una banca de senador por la capital: antes que el ilustre veterano de nuestro Parlamento (que un año antes no había logrado atraer la atención de los electores) fue sin duda el jefe de la revolución cubana el victorioso en esa contienda electoral. El peronismo había vuelto esta vez al voto en blanco; sólo sectores limitados de él habían apoyado la candidatura victoriosa, que parecía crear entonces el camino para la formación de una izquierda no peronista, pero a la vez no antiperonista.

Las posibilidades de maniobra que la situación creaba fueron advertidas de inmediato por los jefes del proscrito movimiento; ahora podían exhibir a los alarmados dueños del po-

der el comienzo de la realización de sus profecías: cerrado el desemboque compatible con el orden vigente que era el peronismo, la clase obrera comenzaba a orientarse hacia soluciones revolucionarias. La amenaza encerraba otra aún más inmediata: el peronismo estaba dispuesto, si lo lanzaban a la desesperación, a encabezar esa radicalización de nuestras clases populares (por entonces comenzó a afirmarse que el general Perón no excluía —con su eclecticismo habitual— la posibilidad de trocar su condición de huésped del generalísimo Franco por la hospitalidad más definitoria de algún balneario de Crimea). Con intenciones demostrativas, el apoyo masivo del peronismo fue otorgado a los candidatos socialistas argentinos en la elección municipal de Añatuya, en el Chaco santiagueño; aún allí, donde los ecos del Caribe llegaban atenuados, era por lo menos innegable que el electorado peronista no mostraba repugnancia alguna a votar a un partido que —situado en la oposición total— no podía ofrecerle a cambio de ese apoyo ventajas inmediatas.

Esa maniobra calculaba mal el efecto que provocaría en aquellos a quienes iba dirigida; mientras el doctor Frondizi no pareció preocuparse demasiado por ella (no creía que el peronismo pudiera ser orientado masivamente hacia la izquierda revolucionaria, y por otra parte no le desagradaba que aparentase por un tiempo tomar esa nueva orientación) las fuerzas que tan tibiamente lo apoyaban sintieron en cambio una alarma excesiva: con sólo esgrimir como amenaza una posible reorientación revolucionaria, el peronismo mostraba que no era suficientemente leal al orden vigente; lo más seguro era limitar aún más el área de la legalidad, y proscribir a las todavía minoritarias corrientes revolucionarias, tal como había podido hacerse ya con el propio peronismo, que contaba con arraigo popular mucho mayor.

Esa acentuación de la política represiva no fue en rigor necesaria. El Partido Socialista Argentino, que ofrecía a la salida

de izquierda no sólo una etiqueta legalizada sino también un conjunto de figuras de primer plano a las que resultaba difícil tachar de advenedizas en la política, se dividió como consecuencia de las perspectivas grandiosas y algo sobrecogedoras que veía abrirse ante él. Al parecer sus veteranos dirigentes sentían alguna alarma ante la posibilidad de ocupar sus años últimos en empresas menos apacibles que los debates parlamentarios: una vez elegido, el doctor Palacios creyó necesario aclarar que él seguía siendo el de siempre y se consagró a evocar con memoria feliz a los grandes parlamentarios conservadores cuya estima había ganado durante la *belle époque*. Nada más tranquilizador para quienes no habían sido sus electores; nada más inquietante para los que lo habían votado... Pero la conjunción de opiniones que en la Capital había logrado vencer tanto a la lista oficialista como a la temible máquina electoral de la oposición radical del pueblo no estaba destinada a rehacerse: el Partido Socialista Argentino de Vanguardia, sector de izquierda surgido de la división del Argentino que quiso seguir en la línea cubana, y aún acentuarla (iba a proclamar su lealtad incondicionada a la URSS y a su adhesión los principios marxista-leninistas), que quiso mantener una lealtad igualmente incondicionada a la clase obrera argentina, tal como lo expresaba el movimiento peronista (y adoptó rápidamente y sin temor a contradicciones la mitología política de éste, e incorporó en el panteón de sus precursores a casi todos los que —a veces con igual arbitrariedad— habían recibido el mismo trato de nuestros movimientos fascistas), no pudo pese a tanta ductilidad pasar de ser un grupo de minoría que rivalizaba sin demasiada ventaja con otros que también buscaban mediante el manejo indiscriminado de la adulación persuadir al movimiento peronista de que, aun sin advertirlo, había sido siempre abanderado de la revolución social.

De todos modos ahora este término inquietante no sólo era esgrimido por quienes convocaban a la lucha por el orden

amenazado; había quienes se identificaban abiertamente con la revolución socialista, y para ellos y sus adversarios esa revolución había dejado de ser una perspectiva remota. Eso explica en parte que las presiones exteriores para una política más decididamente anticubana (que en verdad fueron relativamente discretas, sobre todo si se las compara con las que en ocasiones análogas habían solido ejercerse) encontraran auxiliares tan llenos de celo en ciertos sectores de la oposición interna al doctor Frondizi: revelador fue en la segunda mitad de 1961 el episodio de los supuestos documentos sustraídos de la embajada cubana en Buenos Aires, que habrían probado la intervención del gobierno de La Habana en nuestra política interna.

El doctor Frondizi y su ministro de Relaciones Exteriores —el doctor Miguel Angel Cárcano, veterano dirigente conservador del todo identificado con la política cubana del presidente— mostraron en esta ocasión, pese a la intensidad de la campaña de prensa y opinión desatada en torno del incidente, una sangre fría admirable: la falsedad de los supuestos documentos pudo ser demostrada gracias a ello en forma indubitable. Animado por este triunfo, el presidente perseveró en una política esbozada ya antes que de que el señor Quadros pasara a gobernar efímeramente el Brasil: un acercamiento argentino-brasileño serviría de base para una política más independiente, que se esperaba sería seguida por los países hispanoamericanos más importantes. Esta innovación no tenía tan sólo alcances relacionados con la política internacional; marcaba un retorno en favor de la noción de burguesía nacional independiente: a juicio del doctor Frondizi estaba llegando el momento en que esta clase cosecharía el fruto de los sacrificios populares de los tres primeros años de gobierno intransigente; a la cabeza de una reacción nacionalista en lo político (y mucho más moderadamente orientada en este sentido en lo económico) este grupo social podría captar el favor de la cla-

se media y sectores muy importantes de la popular en favor de una alternativa política nueva, distinta tanto de la hegemonía oligárquica cuanto del régimen sin duda popular, pero básicamente partidario del *statu quo* económico, que había sido el peronismo. Contra la una, la propaganda oficial volvería a utilizar la consignas favorables a la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo, contra el otro emplearía tanto más fácilmente la acusación de no tener más solución que la guerra civil en la medida en que los peronistas (y sobre todo sus ruidosos intérpretes de izquierda) invocasen el ejemplo cubano.

Para esta política faltaba sin embargo al gobierno de Frondizi la base necesaria: ya antes de su esperada consagración electoral en los comicios de renovación parcial de la Cámara de Diputados y de situaciones provinciales, en marzo de 1962, ella estaba en ruinas en su aspecto internacional. Aun en la segunda reunión de Punta del Este, de enero de ese año, al canciller Cárcano pudo expresar el punto de vista argentino y oponerse a los proyectos que, abiertamente o no, propiciaban una intervención en Cuba. Después de la conferencia, el doctor Ernesto Guevara pudo visitar la Argentina y entrevistar al doctor Frondizi: se afirmaba que éste, no satisfecho con resolver sus propios y no sencillos problemas, tenía el propósito de negociar un *modus vivendi* entre los Estados Unidos y la Cuba que pocos días antes se había proclamado parte del mundo socialista. Uno y otro hecho provocaron la desmedida ira de nuestras Fuerzas Armadas; liberales y nacionalistas se hallaban ahora de acuerdo en movilizarse contra las concomitancias de un presidente que aún no había dejado de ser sospechoso de marxismo con la primera revolución socialista de América, con ese peligroso demagogo que era el doctor Quadros, y con su inquietante sucesor, el señor Goulart. Si el inventor brasileño de la "cuarta posición" había sido ya barrido por la oposición militar, el argentino tuvo aún tiempo, en Paraná, de lanzar un gallardo desafío a los adversarios de su política

internacional, pero pocos días después se rendía a discreción: sacrificaba al doctor Cárcano y disponía la ruptura de relaciones con Cuba. La prueba de fuerza quedaba sin embargo tan sólo postergada: luego de su triunfo en las elecciones de marzo el doctor Frondizi se disponía a intervenir más activamente en las Fuerzas Armadas para dar la supremacía a quienes, por haberlo defendido con excesivo celo, estaban hasta ese momento postergados por los legalistas condicionales y los golpistas dispuestos a suspender su vocación revolucionaria. A partir de ese momento el presidente podría comenzar a realizar su modesta aspiración alcanzando alguna autonomía respecto de sus no solicitados tutores de las Fuerzas Armadas.

De este modo las elecciones de renovación parcial de 1962 fueron concebidas por el gobierno Frondizi como la hora de la verdad en que se mediría finalmente el éxito de su política. A prepararlas se orientó toda la gestión interna del gobierno a lo largo de 1961. El señor Alsogaray fue separado sin explicaciones de la dirección de la economía; lo reemplazó en ella el doctor Alemann. ¿La eliminación de Alsogaray estaba destinada —como iba a sostener reiteradamente el ministro cesante— a interrumpir la búsqueda del equilibrio presupuestario y de la balanza de pagos, a lanzar una nueva ola de "desarrollo" frenéticamente ritmada con el propósito de provocar euforia preelectoral? Si bien no puede decirse que esta interpretación de la política económica que comenzaba a practicarse fuese totalmente errada, sí puede reprochársele que dejara sin explicar algunos de sus aspectos esenciales: la necesidad de atender a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los inversionistas extranjeros no fue ignorada; en la medida compatible con ella se dejó sin embargo de lado la preocupación dominante durante la gestión Alsogaray por el equilibrio financiero, monetario y comercial. Y aun esta caracterización esquemática es insuficiente: esta política económica íntimamente contradictoria era interpretada por cada mi-

nistro del modo que más le agradaba, y en este período en que el rigor de la austeridad era en general atemperado por consideraciones electorales se asistió a una política ferroviaria más dura que la preconizada por Alsogaray: el secretario Acevedo, en efecto invocando defectos bien conocidos de la administración de nuestros ferrocarriles, intentó llevar adelante un plan que cumplido hasta sus últimas consecuencias hubiese significado la disminución del déficit ferroviario por la supresión de la mitad de la red ferroviaria.

Esta política encontró la oposición frontal de las organizaciones sindicales del riel, ante la cual, y luego de una huelga que duró más de un mes, el gobierno de Frondizi debió inclinarse, disimulando su rendición tras de una gestión mediadora encargada por ambas partes en litigio al arzobispo de Buenos Aires.

De todos modos, aunque antes de las elecciones de marzo de 1962 arreciaron las inauguraciones de obras públicas y plantas industriales (algunas de ellas existentes sólo en proyecto, otras en cambio concluidas hacía ya tiempo) para esas fechas la euforia oficial no lograba disimular que el desarrollo debido a la gestión económica Frondizi-Frigerio-Alsogaray, si alguna vez había existido, había encontrado ya sus límites infranqueables. La producción industrial tendía a estancarse; la demanda de mano de obra disminuía, y con ella el volumen del consumo, ya afectado por la austeridad anterior. A estos contratiempos económicos se agregaban los causados por la política monetaria: debido a una falta de emisión que no había tenido los efectos deflatorios que de ella se esperaba, el circulante se hacía insuficiente y las empresas se manejaban en esa hora difícil utilizando papeles de crédito cuya solidez era más que dudosa. Ambas situaciones repercutían en las finanzas estatales: si el gobierno nacional y los provinciales podían aún atender al pago de sueldos y emprender gastos importantes en obras públicas, ello se debía en parte a la despreocupa-

ción con que habían recurrido a los fondos de las cajas jubilatorias: las más de éstas ya no se hallaban, antes de marzo de 1962, en situación de atender sus pagos, y ese inquietante signo de penuria no pudo ser disimulado antes de la fecha electoral.

Esos contratiempos económico-financieros eran sin duda graves. A pesar de ellos el gobierno Frondizi decidió dar su batalla decisiva en un momento no excesivamente favorable. ¿Por qué tomó esta decisión sin duda errónea pero no totalmente injustificable? Porque contaba precisamente con la ambigüedad del signo económico de la hora para ganar apoyos a su causa política. En efecto, si bien el gobierno Frondizi había aplicado una ya fracasada política de austeridad era bien sabido que su corazón no estaba en ella; las oposiciones —salvo la peronista— le habían reprochado, más que esa política, la tardanza en adoptarla. El doctor Frondizi estaba entonces dispuesto a explotar en este punto su condición demasiado notoria de gobernante casi totalmente privado de libertad de movimientos; las insuficiencias de su gestión en los primeros cuatro años de gobierno podían ser —en sólo aparente paradoja— subrayadas más insistentemente por quienes invitaban a votar en su favor que por sus adversarios. Por otra parte, éstos comenzaban a estar de vuelta de su ortodoxia económico-financiera; no podían seguir apoyando una línea que en caso de fracasar los arrastraría en ese fracaso y en el caso opuesto no les permitiría recoger los frutos políticos de su éxito. Pero esa reorientación sólo comenzada privaba a la oposición —y en primer término a la del radicalismo del pueblo— de la posibilidad de ofrecer una alternativa a la política oficial. Por otra parte esa oposición había debido expresar reiteradas protestas contra las limitaciones a la libertad política impuestas por el gobierno Frondizi; esto era visto con alguna alarma por parte de su clientela electoral, menos democrática que antiperonista.

Se daba así un deslizamiento de la opinión no peronista hacia el partido de gobierno, acelerada por la conciencia de que las tensiones sociales se hacían más fuertes: el gobierno Frondizi encontró —se ha dicho ya— que grupos cada vez más amplios estaban dispuestos a creer que sólo su perduración salvaría al país de una inmediata revolución social. La tentación de utilizar esta corriente de opinión pública era muy comprensible; el gobierno Frondizi buscó además aumentar su caudal autorizando el retorno del peronismo a la lucha electoral. Si el Partido Justicialista, expresión ortodoxa del movimiento, seguía teniendo cerrado ese camino, los pequeños partidos neoperonistas fundados o reorganizados durante la gestión de Aramburu seguían actuando en la legalidad, y se transformaron —levantada la excomunión que sobre sus fundadores habría fulminado el jefe del movimiento— en medio de manifestación electoral del entero peronismo. El gobierno asistió a este desarrollo (que no dejaba de causar alarma en sectores importantes de las Fuerzas Armadas) sin hacer nada para impedirlo: gracias a él podría transformar a las elecciones en un plebiscito en torno a la vigencia del orden occidental y cristiano; la victoria de la causa del orden traería consigo la transformación de la UCRI en el primer partido argentino: un partido conservador no identificado con la clase alta terrateniente, capaz por lo tanto de ganar la adhesión masiva de la clase media y la de algunos sectores populares. Las primeras víctimas de ese desarrollo serían los otros partidos de clase media; fracasados los propósitos del presidente Frondizi, no es difícil entender por qué éste no encontró compasión entre los dirigentes de esos partidos, ahora unánimes en propiciar abierta o discretamente la destitución del gobernante que había estado a punto de expulsarlos de la vida política.

Porque este sabio plan, cuyo éxito habría justificado retrospectivamente cuatro años de humillaciones resignadamente sufridas, fracasó. ¿Por qué fracasó? Según una versión al pa-

recer no totalmente infundada, porque el peronismo no tuvo la actitud que el presidente Frondizi esperaba de él; en efecto, mientras lo utilizaba como espantajo para la alarmada clase media y alta, al parecer negociaba con el jefe del movimiento, que por esos meses había abandonado sus proclamaciones revolucionarias y parecía dispuesto a asumir su personalidad alternativa de pilar del orden establecido, un retiro (espontáneo o provocado) de las listas peronistas, destinado a ser recompensado en las elecciones presidenciales de 1964 con la alianza más íntima del partido oficial y el perseguido en torno a una candidatura común, que debía ser la del señor Frigerio.

¿Esta versión es exacta? Parece sobre todo destinada a hacer inteligible la conducta del doctor Frondizi, incomprensible si éste hubiese sido en efecto el deslumbrante estratego político que por entonces el país veía en él. En todo caso, si existieron compromisos asumidos por el desterrado ex presidente, éste no pudo o no quiso cumplirlos, lo que no podría serle reprochado habida cuenta del modo con que su sucesor, adversario y aliado había a su vez cumplido los aceptados cuatro años antes. Pero la presentación electoral del peronismo no fue la única causa del fracaso último del plan, y sobre todo no fue la que hizo que ese fracaso, que estaba lejos de ser total, fuese tenido unánimemente por aplastante.

Junto con ese error estratégico el partido de gobierno acumuló en efecto errores tácticos, más modestos pero quizá de consecuencias más graves. El gobierno había preparado las elecciones de marzo con una serie de elecciones piloto destinadas a convencer a la opinión pública de que la UCRI era el único partido capaz de rivalizar con el peronismo. Esas elecciones, llevadas adelante en provincias casi todas ellas dotadas de un electorado peronista muy nutrido, parecieron probar todavía algo más: que la UCRI podía ganar al peronismo. Venció en La Pampa, transformada en su feudo electoral; venció en Catamarca, gracias a un derroche preelectoral de ayu-

das sociales y sobornos individuales que superó cuanto se conocía en esa austera provincia. Venció —hecho más significativo— en una provincia de estructura moderna como Santa Fe, donde la posesión del gobierno no bastaba para transformar al electorado en clientela, donde la UCRI tenía escaso arraigo y tanto el peronismo como los partidos de oposición constitucional lo tenían en cambio muy grande.

Ninguna de esas victorias había sido abrumadora; su acumulación persuadió sin embargo a la opinión pública antiperonista de que la UCRI no necesitaba de apoyos excepcionales para vencer al adversario principal. Esta conclusión era infundada: cuando se dieron esas elecciones piloto el peronismo no se había movilizado aún en nivel nacional, no había resuelto globalmente su política frente a la nueva coyuntura electoral, no había recurrido por lo tanto plenamente al instrumento que las organizaciones sindicales por él controladas le proporcionan para orientar rápidamente a su electorado. Por otra parte, pese a que la izquierda comunista y socialista cuenta poco, fue su decisión de presentarse como alternativa al peronismo —que iba a ser revisada antes de marzo— la que permitió a la UCRI ganar en Santa Fe la diferencia suficiente sobre el Partido Laborista (representante local del movimiento peronista) para imponer su candidato a gobernador.

En todo caso sólo días antes de las elecciones de marzo el peronismo pareció orientarse sin reservas hacia la concurrencia. Su jefe ausente aprobaba ostensiblemente esta decisión; no dejaba sin embargo de asumir actitudes que debían irritar al celo antiperonista de las Fuerzas Armadas, como la de postular personalmente el cargo de vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobierno se manejó frente a estas provocaciones deliberadas (y —según algunos— previamente convenidas) con extrema circunspección; la justicia se negó a registrar el nombre del comprometedor candidato, invocando que había omitido reinscribirse en los padrones electorales en

1957, pero el partido que había propiciado esa candidatura no fue arrojado a la ilegalidad. Lo que era más alarmante para el gobierno: de las Fuerzas Armadas no llegaba ahora la esperada presión que permitiría proscribirlo; por el contrario, también éstas esperaban de las elecciones un plebiscito popular en favor no sólo del presidente Frondizi sino también de los cuatro años de imperiosos asesoramientos de los que ellas mismas eran responsables.

Se llegó así a las elecciones, precedidas de laboriosas gestiones para la confección de listas peronistas: los candidatos obreros, que durante el gobierno del general Perón habían ocupado lugar muy reducido en las bancadas legislativas y no habían alcanzado cargos ejecutivos, eran colocados ahora en primer plano por decisión arbitral del líder; el señor Framini, dirigente textil, era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El 18 de marzo era candidato triunfante, con la UCRI (que había gastado sumas sin precedentes en una campaña electoral para la cual había reclutado el costoso auxilio de expertos en propaganda psicológica) en segundo término. Si el peronismo obtenía en la provincia de Buenos Aires más votos de lo que él mismo esperaba, los partidos tradicionales salían menos maltrechos de lo que habían temido: la UCRI había fracasado allí en su proyecto de transformarse en partido conservador mayoritario dentro de un sistema bipartidista. Los resultados de casi todas las provincias menores agravaban los rasgos del panorama bonaerense: la Patagonia en el sur, Salta, Tucumán y Santiago del Estero en el norte daban apoyo masivo al peronismo. Los resultados de Córdoba eran apenas menos decepcionantes para la UCRI: el radicalismo popular vencía allí laboriosamente al peronismo. Sólo en Entre Ríos y la Capital Federal los resultados confirmaban las previsiones oficiales.

Ante estos resultados, el presidente se apresuró a intervenir todas las provincias necesarias para impedir la llegada al

poder de los candidatos peronistas triunfantes; la iniciativa, presentada como una imposición de las Fuerzas Armadas, agravó la irritación de éstas; en efecto, por una vez el presidente se había anticipado, según parece, a sus deseos. Luego de diez días de penosas gestiones en que el doctor Frondizi aceptó formar un nuevo gabinete integrado por sus públicos adversarios, y de infructuosos pedidos de renuncia, fue finalmente destituido y enviado en cautiverio a Martín García. Ya antes de este previsto desenlace una suerte de testamento político lo devolvía a sus temas usuales antes de 1958: invitaba allí a constituir un frente nacional y popular, para luchar en todos los campos por la causa emancipadora momentáneamente vencida. Atribuía la derrota a los malentendidos que circunstancias adversas habían introducido entre los integrantes necesarios de ese frente de liberación. En esta nueva actitud encontró el apoyo entusiasta del doctor Vítolo, que había sido su ministro del Interior y una semana antes había convocado en tono igualmente marcial a la ciudadanía democrática a librar la batalla decisiva contra los herederos políticos del peronismo...

Pero no era el doctor Frondizi y la reaparición de su personalidad de revolucionario soterrada durante cuatro años el problema principal de quienes lo habían derrocado. En efecto, era ya demasiado sabido que en su pluma los llamados a la guerra, si podían utilizar las mismas palabras, tenían un sentido menos desapacible que en sus modelos de estilo. Pero si no tenían demasiado que temer de su víctima, los representantes de las Fuerzas Armadas no sabían muy bien qué hacer con el poder vacante. La instalación de un régimen militar era solución favorecida sólo por algunos grupos; se atribuía al general Poggi, comandante en jefe del Ejército, una viva inclinación por ella (se sostuvo, al parecer no sin motivo, que luego de la deposición de Frondizi llegó a jurar el cargo de presidente provisional de la República). Ese problema fue resuelto por la audaz decisión del presidente del senado para caso de ace-

falía: el doctor José María Guido se presentó a prestar juramento ante la Corte Suprema, que lo reconoció como ocupante legítimo de la presidencia; al día siguiente reiteraba el juramento ante los secretarios militares. Esta salida legal se apoyaba sin embargo sobre bases extremadamente débiles. Desde el punto de vista jurídico en primer término: la ley de acefalía obligaba a convocar a elecciones en un plazo de noventa días, y —dadas las causas inmediatas de la caída de Frondizi— esta solución parecía extremadamente inoportuna; la deposición del presidente había debilitado a la UCRI, que dejaba a la vez de ser partido oficial y rival del peronismo, cuya alianza estaba ya solicitando; ningún otro partido podría cumplir mejor la función de dique antiperonista en la cual el de gobierno se había revelado ya tan insuficiente. Se pensó primero obtener del Congreso una reforma de la ley de acefalía; para ello se esperaba ganar la benevolencia del partido de Frondizi (que había sido también el de Guido); pocos días después de su deposición, el presidente destituido podía comenzar sus complejas negociaciones con las Fuerzas Armadas desde posiciones acaso menos débiles que antes de su caída; desde su cautiverio de Martín García, el doctor Frondizi retomaba entonces actitudes más concordes con su estilo habitual de actuar que con la acerada prosa de su último llamado a la guerra de liberación.

Esas negociaciones no llegaron sin embargo a nada: el gobierno Guido, totalmente dominado en ese momento por sectores militares adictos al recuerdo de la revolución de 1955 y fuertemente hostiles al del gobierno que acababan de derrocar, prefirió anular las últimas elecciones legislativas, constatar que por lo tanto el Congreso no se hallaba en condiciones de funcionar y suspender sus reuniones. A la vez, extendió las intervenciones aun a aquellas provincias en que las fuerzas peronistas no habían obtenido triunfos electorales y anunció sanciones inspiradas en un moralismo algo genérico contra los

responsables de la corrupción y de las desviaciones ideológicas en que el gobierno depuesto habría incurrido en su política internacional.

Ese moralismo era uno de los elementos inspiradores de la política económica adoptada al comenzar la gestión del gobierno Guido: su efímero ministro de Hacienda, el doctor Pinedo, resolvió emprender una política de austeridad y verdad que era una nueva profundización de la adoptada por el régimen revolucionario e intensificada por Frondizi: el peso era devaluado, sin aumento del circulante y una serie de medidas complementarias (sobreprecios de combustibles y eliminación de privilegios a industrias nuevas) debía acentuar a partir de entonces la recesión; tal como había ocurrido con los últimos tiempos peronistas, también los de agonía de la era Frondizi suelen ser recordados con colores más brillantes de lo que sería justo; es el agravamiento posterior el que hace olvidar los muy graves problemas económicos que ya entonces se planteaban. La política Pinedo tenía por lo menos el mérito de la sinceridad: sus medidas eran presentadas, antes que como soluciones de emergencia, como correctivos destinados a devolver definitivamente a su vocación rural a una Argentina extraviada por las engañosas esperanzas de la industrialización. Otros méritos sería sin embargo difícil encontrarle, y por otra parte las modalidades de la devaluación (la decisión de retirar el sostén al valor del peso fue mantenida en reserva hasta el instante en que se aplicó, pero al parecer algunos grupos financieros procedieron en la circunstancia como si la hubiesen conocido de antemano) sirvieron para recordar oportunamente que no sólo la nueva clase de especuladores surgidos de la industria, cuya prosperidad en tiempos de Perón y Frondizi tanto irritaba a la empobrecida clase media, era vulnerable a ataques de inspiración moral.

A los pocos días el doctor Pinedo, que en tono cada vez más desafiante se dedicaba a proclamar su intención de llevar a la

ruina a actividades de las que dependía el pan cotidiano de más de la mitad del país, debió ser alejado: su gestión cumplió la hazaña de otorgar al señor Alsogaray una popularidad que no había logrado conquistar por vía menos indirecta. Cuando éste volvió a ocupar su Ministerio, es probable que aun los más decididos enemigos de su política hayan sentido algún alivio. Un alivio injustificado, por otra parte: el señor Alsogaray se limitó a presidir, al parecer con serenidad, la paralización progresiva de los pagos del Estado a sus funcionarios y acreedores; las medidas que ensayó para enfrentar la situación fueron tan aparatosas como inútiles (entre ellas se cuenta el lanzamiento de un empréstito con garantía oro, que fracasó ruidosamente). Aparte las dificultades objetivas de la situación, su gestión estaba ahora limitada en su eficacia por la existencia de compromisos estrictos con el Fondo Monetario Internacional, que prohibían la expansión de moneda y crédito. En estas condiciones las consecuencias de la política Pinedo pudieron ser apreciadas en su integridad: la crisis financiera se dobló de crisis económica; año y medio después de su breve gestión la industria sobrevivía sin duda, pero la desocupación alcanzaba cifras sobre cuya estimación cabían sin duda fuertes discrepancias pero que volvían a ser alarmantes.

El señor Alsogaray tenía acaso razón en no considerarse responsable de esta degradación al parecer irrefrenable de la situación económico-financiera; desinteresándose casi totalmente de ella dedicó buena parte de su tiempo a divulgar una nueva imagen de sí mismo más favorable a sus aspiraciones: ahora buscaba una nueva clientela política en la castigada clase obrera. Cuando debió alejarse nuevamente del cargo lo anunció en una circunstancia muy característica de su nuevo estilo: en la sede de la asociación de camioneros declaró su aversión a la oligarquía que, negándose egoístamente a participar en el sacrificio de la entera Nación, había frustrado su gestión ministerial y ahora se aprestaba a aplastarlo. Esta cu-

riosa peripecia hubiese sido una muestra relativamente inocente del grado de confusión al que las cosas habían llegado en el país si no fuese que el señor Alsogaray estaba poniendo además al servicio de sus extravagantes proyectos políticos su influencia sobre ciertos sectores militares, que estaba lejos de ser escasa: a lo largo de toda esta etapa, ella no dejó de gravitar en las sucesivas crisis que los grupos dominantes atravesaron y su gravitación estuvo lejos de ser siempre clarificadora.

En efecto, el gobierno Guido vivió constantemente atormentado por los conflictos de los múltiples poderes detrás del trono. Si esos conflictos pudieron madurar, agudizarse y por fin resolverse a lo largo de no pocos meses ello se debió sin duda a la pasividad con que la nueva coyuntura fue enfrentada. Esa pasividad era penosamente evidente en el peronismo: sus apoyos de la izquierda juzgaban que si el triunfo electoral peronista alcanzaba magnitud tal que obligara al gobierno Frondizi a desconocerlo, el movimiento proscrito, tonificado por esa nueva toma de conciencia de su fuerza, se lanzaría a un alzamiento armado popular destinado a desembocar en revolución social. Esto último estuvo lejos de ocurrir: sin duda los candidatos triunfantes no dejaron de expresar al cardenal primado, a quien escogieron como mediador ante el gobierno Guido, que no se responsabilizaban de lo que podría suceder en caso de ser desconocida su victoria; lo que ocurrió fue que oportunamente se presentaron acompañados de escribano público para labrar testimonio de que los cargos para los cuales habían sido elegidos no les eran entregados. Aun un gobierno como el del doctor Guido y sus perplejos asesores militares estaba en condiciones de resistir ataques de esta laya.

Sin duda los dirigentes peronistas juzgaron adecuado compensar esta conducta apacible con palabras menos serenas. El protagonista de esta etapa fue el señor Framini, designado jefe local del movimiento por su desterrado fundador. Bajo su orientación el peronismo pareció dispuesto a alinearse sobre

el ejemplo de aquellos movimientos de emancipación nacional más abiertos a una aproximación con el mundo socialista; el señor Framini, que durante su campaña electoral había buscado asesoramiento económico entre los más moderados responsables de la gestión económica del régimen peronista, lo cambió ahora para declararse autor de una nueva ley histórico-económica: era la que proclamaba, con gran apoyo de cifras, la imposibilidad de lograr el desarrollo mientras el país se mantuviese en el marco proporcionado por el imperialismo. Pero estas declaraciones que por primera vez no dejaban lugar a ambigüedades eran interpretadas por muchos como un elemento más en la preparación de las necesarias tratativas con los factores de poder, en las que el peronismo habría de decir su palabra (y una palabra, como de costumbre, muy poco revolucionaria) sobre el futuro político de la Nación.

La pasividad peronista, sólo quebrada por declaraciones cada vez más violentas, hacía más fácil de entender la de los otros movimientos políticos: en el fondo ésta tenía en todos los casos el mismo origen; todos los partidos se juzgaban en condiciones de participar en negociaciones sobre el futuro tanto con el gobierno cuanto con el movimiento peronista, cuyo estatuto era precisamente el problema central en la fijación de ese futuro: su pasividad era entonces, más que un signo de desesperanza, una consecuencia de esperanzas a veces infundadas, y del deseo de no frustrarlas mediante apresuradas tomas de posición que limitasen el área de maniobra de cada partido.

Pero, cualquiera fuese su causa, esta actitud debía contribuir a la confusión dominante en los meses que quedaban por vivir al gobierno Guido: los grupos políticos no deseaban ni enfrentar a ese gobierno, por mucho que sus actitudes les desagradasen, ni identificarse con él, aun cuando coincidieran de hecho con sus puntos de vista; era inútil entonces esperar de ellos alguna orientación.

El gobierno pasó pues a moverse en un extraño vacío gracias al cual sus crisis internas pudieron desenvolverse —como se ha visto— hasta sus últimas consecuencias. Las crisis provenían de sus apoyos militares; éstos eran de hecho todo el gobierno, y entre ellos no abundaban los puntos de coincidencia; aún menos abundaban las nociones claras sobre las alternativas políticas que el futuro iba previsiblemente a presentar.

Las crisis se dieron necesariamente como enfrentamientos militares, y como tales adquirieron violencia creciente: el país asistía a esbozos de guerras civiles periódicas debidas a oposiciones no siempre aclaradas; cada vez más tendió a ver en ellas sobre todo la continuación agravada de las crisis también periódicas que las Fuerzas Armadas habían vivido desde 1955. Sin duda eran en primer término eso; no convendría sin embargo olvidar que esas crisis y su desenlace no se dieron aislados de un contexto no sólo nacional que contribuyó a atenuar la gravedad de sus esperables consecuencias.

En efecto, sólo luego de la caída de Frondizi llegó a este rincón del mundo el eco del deshielo que, comenzado en el bloque socialista, se extendía ahora al sector occidental, eliminando excesivas rigideces y atenuando tensiones internas. Las consecuencias de ello fueron múltiples: desde la decadencia de la ortodoxia liberal en la economía, frente a la cual volvieron a formularse reservas que un año antes hubiesen sido juzgadas sospechosas, hasta la aceptación (algo tardía) de la necesidad de reformas sociales urgentes, que eran exigidas perentoriamente por la potencia hegemónica en Hispanoamérica, hasta la disminución del tono militante de ciertas instituciones que habían contribuido a dar a la lucha contra el comunismo mucha de su obtusa agresividad, y en primer término de la Iglesia Católica. Ese cambio de clima implicaba la definitiva pérdida de favor de los regímenes autoritarios de derecha; la adhesión a la democracia representativa, que comenzó por ser sobre todo un expediente inventado por la política es-

tadounidense para oponerse al régimen socialista cubano, llegó a traducirse en sugestiones muy precisas de parte de esa potencia. Por otra parte el mismo conflicto cubano perdía buena parte de su virulencia, luego de recuperarla ocasionalmente con motivo de la prueba de fuerza en torno a las bases soviéticas en la isla: luego de ella se hizo evidente, por una parte, que Estados Unidos renunciaba en los hechos a derrocar al régimen revolucionario, y por otra que éste debía entregarse cada vez más a resolver los no escasos problemas internos que la conversión de su economía planteaba; en una etapa que acaso está destinada a ser larga, su papel incitador en posibles procesos revolucionarios dentro del continente debe ser limitado; también aquí la coexistencia pacífica tiende a reemplazar a la guerra fría y la confrontación definitiva sólo podrá hacerse cuando se opongan los resultados de algunos años de construcción socialista en Cuba con los logrados en el intento de modernización económica que Estados Unidos promueve en el resto de América latina.

Consecuencia local de estos cambios fue que comenzase a caer en pedazos la ortodoxia político-ideológica, sin duda perfectamente contradictoria en sus postulados, pero no por eso menos exigente, que tanto había pesado durante la gestión de Frondizi; un año después de su caída la reunión promovida por la CEPAL en Mar del Plata marcó el triunfo formal de una nueva ortodoxia económica, desarrollista y moderadamente dirigista, a la cual dieron bien pronto adhesión no pocos de los sabios locales que hasta hacía unos meses habían repetido infatigablemente el evangelio de la libre empresa. En lo político el nuevo clima se tradujo en una disminución de la intransigencia recíproca de los partidos; mientras la UCRI y la democracia cristiana (dominada ahora por grupos fuertemente hostiles al antiperonismo de sus primeros dirigentes) promovían la constitución de un frente amplio con los peronistas, el radicalismo del pueblo, siempre adverso a coaliciones, patrocina-

ba contactos permanentes entre los partidos democráticos (en cuyo grupo incluía también él a los peronistas) y buscaba transformar esa relativa concordia en un elemento favorable a una salida electoral.

En efecto, eran la disidencias en torno a esa salida la base de las crisis militares reiteradas. Para algunos grupos el fracaso de treinta años de gestión indirecta comprometía a las Fuerzas Armadas a asumir el gobierno sin plazo fijo ni compromisos previos en cuanto al desenlace. Esos grupos militares sólo en pequeña parte tenían una trayectoria anterior nacionalista o clerical-fascista; sin embargo bien pronto todos ellos llegaron a coincidir en las soluciones que esas tendencias políticas habían antes propuesto. Los sectores militares llamados democráticos, identificados con la revolución de 1955, daban así un paso más en esa reinvención espontánea del fascismo que en rigor habían comenzado ya antes: ahora su decepción ante el éxito limitado y la eficacia modesta de los partidos herederos de esa revolución los llevaban a desesperar de la democracia política y promover el establecimiento de un régimen corporativo, basado en las fuerzas del trabajo por las cuales no tenían sin embargo ninguna simpatía real (mientras achacaban a la clase obrera haber sido y seguir siendo el principal apoyo del peronismo, veían en los patronos industriales a los principales beneficiarios de las políticas económicas de Perón y Frondizi). A esa hostilidad por la democracia representativa acompañaba una aversión cada vez más explícita o los llamados influjos foráneos, que si se afirmaba con violencia frente al bloque socialista y las actitudes que, por motivos a veces bastante absurdos, eran juzgadas de apoyo a él, no dejaba de hacerse sentir también frente al bloque rival cuya tendencia distensiva era juzgada traición a los valores eternos de Occidente. Esos sentimientos, frecuentes en nuestras Fuerzas Armadas, no carecían de eco en la clase media; en este sentido la ola de atentados antisemitas que se dio en la segunda mitad

de 1962, si era atribuible a grupos reducidos cuya eficacia se debía sobre todo al apoyo no siempre pasivo que hallaban en el aparato estatal, era sin embargo representativa de actitudes que a medida que la crisis económica se agravaba comenzaban a hacerse más frecuentes de lo que se prefería creer. Nunca hasta entonces había conocido la Argentina un clima tan típicamente prefascista: apatía de los partidos políticos; firme tutela militar; desesperación creciente de las clases media y popular, golpeadas ambas por la depresión económica. Si, a pesar de todo, el fascismo no prevaleció tampoco ahora, ello se debió sin duda a que la coyuntura internacional le era desfavorable: ello privaba a la solución autoritaria de derecha de apoyos externos y también del prestigio difuso que en otras ocasiones la había rodeado.

Ese clima mundial, que por primera vez en decenios atenuaba y no agravaba el alcance de la crisis nacional, explica sin duda que, en medio de alternativas en cada caso muy diferentes, las sucesivas crisis militares hayan tenido todas el mismo desenlace. Este clima y otro factor más modesto, no siempre advertido y sin embargo no desprovisto de importancia. En efecto, si como político el doctor Guido carecía de los múltiples talentos de su inmediato predecesor, si su prestigio era nulo, hasta tal punto que en el momento de asumir el poder la mayor parte del país ignoraba hasta su existencia, en cambio mostraba una firmeza que al doctor Frondizi había faltado para apoyar con su autoridad presidencial a los sectores militares con los cuales tenía afinidad: aunque esa autoridad era poco más que una vaga ruina, su gravitación, ejercida constantemente en un sentido determinado, no dejó de alcanzar efectos importantes.

En este marco se dieron las crisis militares sucesivas. La primera y más confusa se debió a la iniciativa del general Rauch, que ya un mes después del derrocamiento de Frondizi avanzó sobre la capital en un enfrentamiento con el general

Poggi, responsable principal de la quiebra de la legalidad y sospechoso de aspirar al poder personal (esta sospecha, luego de la experiencia peronista, tiene consecuencias tan graves en nuestro ambiente militar como las tenía entre los políticos de la Tercera República francesa); por detrás de Poggi, eran los hermanos Toranzo Montero, cuyo influjo decisivo en el Ejército causaba no escasas impaciencias, los adversarios que Rauch se proponía derrocar. Su movimiento logró sólo a medias su propósito; fue favorecido por la neutralidad de la Marina de Guerra, que si era hostil a una demasiado rápida normalización constitucional no deseaba tampoco que el largo interregno moralizador que juzgaba necesario fuese utilizado para consolidar la dictadura de algún jefe del arma rival. Poggi fue en efecto alejado, y bien pronto olvidado; la familia Toranzo perdió algo de su ascendiente, y un neutral, el general Loza, pasó a ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército. Pero la política del gobierno siguió marcada por la preponderancia del sector exaltado de las Fuerzas Armadas, los llamados gorilas, que se reprochaban retrospectivamente su excesiva blandura luego de 1955.

No tiene nada de extraño que durante los meses de abril a setiembre el proceso de normalización institucional que era el objetivo declarado del gobierno haya marchado con tanta lentitud; se aseguraba, por otra parte, que si no era abiertamente abandonado ello se debía a que los sectores militares dominantes no habían decidido aún si era preferible transformar al interregno de Guido en un régimen destinado a durar varios años bajo la tutela militar, o bien darlo por concluido y reemplazarlo de inmediato por una purificadora dictadura libre de todo compromiso con los personeros del corrupto sistema de partidos. En agosto un alzamiento bien pronto exitoso del general Federico Toranzo Montero vino a corregir lo que era ya una anomalía: también en el Ejército el sector gorila recuperaba la posición dominante perdida en abril.

Sólo por pocas semanas: en setiembre un nuevo alzamiento militar, originado en Campo de Mayo y apoyado por los sectores nacionalistas de la Aeronáutica, alcanzaba un fácil pero no totalmente incruento triunfo: el sector autodenominado azul se transformó en el curso de la lucha en abanderado de la legalidad gracias a que el presidente Guido, aflojada la pesada tutela de los jefes gorilas, pudo proclamarlos rebeldes e intimarles inmediata rendición.

El movimiento azul fue el primero en el historial de las luchas internas de las Fuerzas Armadas que quiso darles un justificativo político; los anteriores (que nunca carecieron de él) preferían disimularlos invocando problemas de orden estrictamente castrense. El programa azul se resumía en una toma de posición por la normalización institucional, proclamada con firmes acentos en el comunicado 150 de su comando, destinado a alcanzar vasta celebridad. Pero ese programa no estaba exento de ambigüedades: el sector azul decía desear a la vez la incorporación de los sectores justicialistas a la vida política y una solución que evitara todo retorno del ex presidente Perón y su movimiento a situaciones de poder. Lo que había de autocontradictorio en este programa fue insistentemente subrayado por sus derrotados rivales (ahora caracterizados como colorados), que al señalar que el justicialismo era indistinguible del peronismo no dejaban de formular una objeción válida a los planes azules.

En todo caso los nuevos sectores dominantes creían posible superar esa contradicción contando con la benevolencia del propio peronismo; ante la alternativa de una dictadura implacablemente hostil, éste podría aceptar un retorno gradual y extremadamente lento a la legalidad política, prestar entre tanto su electorado, que luego de marzo de 1962 era universalmente tenido por mayoritario, a las soluciones políticas que contasen con el apoyo del sector predominante en las Fuerzas Armadas.

Pero precisamente, ¿cuáles serían esas soluciones? El doctor Martínez (un ex democristiano llevado al Ministerio del Interior por la victoria azul) creyó ser el encargado de formularlas; le resultaba difícil hacerlo porque el mismo grupo vencedor estaba lejos de tener ideas concordes en torno a ellas.

Dentro de ese grupo militar un sector relativamente reducido pero influyente apoyaba el retorno político del general Aramburu como candidato nacional en elecciones que habrían de plebiscitarlo; el modo de lograr que este programa se realizase no era claro; a medida que sus dificultades se hiciesen evidentes, la vocación legalista de este grupo iba a conocer ambigüedades crecientes. Un grupo aún más reducido, que sólo ocasionalmente adquirió alguna gravitación, se guiaba según parecidas ilusiones, pero confiaba ver consagrado como presidente al señor Alsogaray; también este grupo, abiertamente asesorado por su candidato, iba a gravitar en sentido muy variable; en los momentos de lucidez en que llegaba a columbrar las dificultades que encontraría el señor Alsogaray para ser plebiscitado, su entusiasmo por la salida legal sufría también él un eclipse.

Pero el grupo más apegado a la normalización institucional (el que se hallaba más cerca del jefe del movimiento azul, el general Onganía) estaba también él lejos de haber tomado posición decidida frente al problema. Un sector, con entusiasmo o resignación, aceptaba que el camino hacia la legalidad estaba condicionado por el surgimiento de un frente político en que a la UCRI y el peronismo debía agregarse ahora la democracia cristiana y los grupos llamados social-cristianos (sectores ex nacionalistas que habían colaborado en general con Frondizi y antes habían apoyado la breve experiencia Lonardi); a ratos parecía exigir un frente aún más amplio que incluyera a radicales del pueblo, conservadores y socialistas de centro; de qué manera esto último podría lograrse era problema que no examinaba.

Según algunos había dentro del grupo azul un sector (al que bien pronto se llamó nasserista) al que se decía partidario de una dictadura militar progresista, apoyada en las organizaciones sindicales y desvinculada del programa de conservación del orden y defensa de los valores occidentales y cristianos que hasta ahora había parecido el único signo político de nuestros aspirantes a dictadores militares. Las dificultades que aun en perspectiva larga plantea este proyecto en un país en que el movimiento sindical no necesita ser organizado desde lo alto (porque —y es curioso que nuestros nasseristas prescindan de tomar en cuenta este dato— hubo ya un jefe militar que se encargó de hacerlo no sin éxito), en que el recuerdo de la pasada prosperidad popular, si crea dificultades a gobiernos que cuentan por lo menos con el apoyo de las clases altas, habría de crearlas mucho más graves a un régimen que rompiera con éstas para emprender un programa de desarrollo incapaz de ofrecer en lo inmediato un aumento del bienestar popular, esas dificultades no son tomadas en cuenta por los que dentro (pero sobre todo fuera) de nuestras Fuerzas Armadas favorecen la solución nasserista. En cambio éstos advierten muy bien las que se les plantean a corto plazo, y en primer término la falta de un apoyo sólido en las propias filas del Ejército. En estas condiciones no tiene nada de extraño que hayan favorecido la normalización constitucional: esperaban que el gobierno surgido de ella repitiese el espectáculo de vacilante impotencia que caracterizó al de Frondizi y contaban con que luego de esa segunda experiencia las Fuerzas Armadas aceptarían acaso un punto de vista que por el momento no encuentra en ellas excesivo favor.

No eran éstas las únicas dificultades que el ministro del Interior debió afrontar: su tarea consistía en organizar una coalición política basada en los dos partidos sucesivamente expulsados del gobierno por nuestras Fuerzas Armadas, uno de los cuales —el peronista— seguía sometido a graves limitaciones

legales y debería aceptar espontáneamente otras aún más serias. El doctor Martínez no se arredró ante esa difícil misión; a medida que ésta se desenvolvía se hizo evidente que el desenlace previsible de la misma iba a confirmar no sólo las posiciones que habían alcanzado Perón y Frondizi antes de la crisis de marzo de 1962, sino también el excepcional papel del señor Frigerio, en quien nuestros militares veían al principal responsable de la corrupción económica y política que había caracterizado al gobierno Frondizi. En efecto, a través de los socialcristianos y de los dirigentes de la UCRI, el señor Frigerio mantenía un ascendiente complementado con el que al parecer había reconquistado sobre el ex presidente Perón.

Este se mostró de inmediato partidario fervoroso de un acuerdo con los militares azules y de un nuevo pacto con intransigentes y socialcristianos; el señor Framini fue al efecto desalojado de su posición dirigente y reemplazado por el doctor Matera, próspero facultativo sin militancia anterior, considerado más adecuado para alternar en las tertulias políticas de sabor algo pasatista en las que parecía nuevamente decidirse, con palabras medidas y ricas en sobreentendidos, el futuro de la Nación. El estilo plañidero del nuevo dirigente (siempre ansioso de comprensión y dispuesto a ofrecerla ilimitadamente) contrastaba gratamente con el implacable tono leninista que el señor Framini había creído oportuno adoptar en su ya olvidado aporte a la teoría de las luchas por la emancipación nacional antiimperialista. Pero había entre sus propios patrocinadores militares demasiado interesados en que el esfuerzo del doctor Martínez no alcanzase éxito; por otra parte éste encontró un obstáculo cada vez más decidido en la democracia cristiana, que había esperado ser el único aliado de un proscrito peronismo y ahora se encontraba con que éste tenía la legalidad semiabierta y se disponía a unirse con la mitad de los grupos políticos del país. En estas condiciones la operación perdía para la democracia cristiana bue-

na parte de su interés; y el vehemente dirigente que la había llevado a la alianza peronista la retiró de ella alegando con verdad que reeditaba una tradición de pactos políticos sin contenido programático que el país tenía sobrados motivos para recordar sin nostalgia. El doctor Sueldo se lanzó desde entonces a una campaña de denuncias contra el liberalismo masónico, el imperialismo foráneo y el gran capital apátrida que, si no sirvió para ganarle la confianza de nuestra derecha clerical, cuyo vocabulario imitaba, le conquistó en cambio las simpatías del proscrito comunismo, esperanzado de hallar en él por fin al representante político de la burguesía nacional que había buscado en vano durante decenios.

Si el alejamiento de Sueldo no restaba en verdad ningún apoyo tangible al frente en gestación, lo hacía intolerablemente parecido al que —menos públicamente negociado— había llevado al poder a Frondizi en 1958. Pero el golpe de gracia contra las gestiones del doctor Martínez fue proporcionado por el doctor Zavala Ortiz, quien denunció que el ministro lo había invitado a aceptar la candidatura a vicepresidente de la Nación como compañero de fórmula del general Onganía y con el apoyo presunto de todos los partidos políticos con algún caudal.

La denuncia —tan imposible de probar como de refutar— precedió en pocos días a un alzamiento militar que tras de la dirección nominal del general Menéndez y el apoyo del sector nacionalista de la Aeronáutica (que meses antes se había lanzado a la aventura por su cuenta, con un programa que incluía la supresión de la libertad de cultos, y había sido fácilmente reducido por sus suboficiales) escondía mal un alzamiento casi totalmente limitado a la Marina de Guerra. Este pudo ser reducido a principios de abril luego de varios día de lucha sangrienta. Si el sector azul obtuvo nuevamente la victoria, ello se debió al apoyo que le prestó nuevamente el grupo aramburista; este apoyo no parece haber sido incondicionado. Una de las

consecuencias de la nueva victoria azul fue, en efecto, el fin definitivo de la experiencia Martínez (el ministro ya había renunciado unos días antes); en el Ministerio del Interior lo reemplazó el general Rauch, que se lanzó a una lucha verbal violentísima (acompañada de abundantes órdenes de detención) contra esa forma particularmente perversa de "marxismo-leninismo insurreccional" que representaba el frigerismo. No contento con esto, el general Rauch exigió un cambio radical en la política económica; este inesperado catecúmeno reclutado en Mar del Plata por los conferenciantes de la CEPAL propugnaba la adopción del estructuralismo como línea inspiradora de nuestra conducción económica; ello lo llevó a enzarzarse en una guerra de comunicados con ministros partidarios de soluciones opuestas, a los que acusó finalmente de un pasado corrupto. Tantas iniciativas inesperadas formaban, según algunos, parte de un plan destinado a hacer imposible la salida electoral; es dudoso que, de haber sido así, el general Rauch lo haya advertido plenamente. Bien pronto se hizo evidente en cambio que su permanencia en el gabinete era imposible; el general Rattenbach, secretario de guerra, identificado con la salida electoral, solicitó su renuncia, que sus colegas civiles intentaron forzar entregando las propias al presidente Guido. Sólo cuando el general Onganía se unió a la solicitud del secretario de Guerra, el general Rauch se inclinó ante ella y abandonó su cargo. Lo reemplazó el general Villegas, tenido por uno de los jefes del llamado sector nasserista, de existencia sólo hipotética.

Y ahora podía comenzar de veras la preparación de las elecciones. En los meses que quedaban atrás, en medio del caos aparentemente cada vez más cercano, se habían dado algunos hechos importantes: la resignada voluntad de paz del peronismo había podido ser comprobada hasta la saciedad (al parecer estaba aún dispuesto a aceptar una nueva limitación inventada por los asesores del general Rauch: no podría llevar

candidatos municipales en aquellos puntos en que hubiese guarniciones militares a fin de evitar a los jefes de éstas la molestia de tener contacto con peronistas en las ceremonias oficiales); en el equilibrio político entre las Fuerzas Armadas el Ejército recobraba la hegemonía que se había visto obligado a compartir luego de 1955; su tendencia a pesar de todo menos favorable a las soluciones extremas, nacida de una experiencia política más larga, volvería a dar el tono a la presión militar...

Bajo estos auspicios la gestión frentista pudo seguir adelante. Sus avances, algo rutinarios, se centraban ahora en el trazado de un programa, lo bastante anodino para no causarle problemas nuevos, y en la elección del candidato presidencial. En cuanto a las limitaciones del peronismo, se entendía que éste seguía aceptando las convenidas durante la gestión ministerial de Martínez: se conformaba con un 30% de los cargos electivos en las listas comunes del frente y renunciaba a presentar candidatos a gobernadores en las provincias más importantes. La elección del candidato presidencial era menos fácil de resolver: durante semanas llenó la atención pública el doctor Pérez Companc, devoto multimillonario que contaba con el beneplácito del arzobispo de La Plata y el del señor Frigerio; este insólito candidato habría sido aprobado también por los ex presidentes que apoyaban al frente; en todo caso su candidatura se desvaneció sin dejar rastros para dar paso a la del doctor Vicente Solano Lima, conservador disidente que había intentado en 1958 conquistar los votos que luego apoyaron al doctor Frondizi mediante un plan de gobierno consistente en presentar de inmediato la renuncia y convocar a nuevas elecciones en las que el general Perón podría ser candidato. Por entonces no tuvo éxito en su postulación; en 1963 reaparecía con proyectos menos precisos y con el voluble beneplácito del señor Frigerio, que desde Montevideo lanzó su candidatura. A este apoyo siguió el de los ex presidentes; tan

importantes avales no impidieron que la candidatura del doctor Lima fuese recibida con sentimientos muy mezclados entre quienes debían votarla.

En el peronismo el doctor Matera aprovechó un decreto del ministro Villegas que hacía obligatorios los renunciamentos a los que ese movimiento se había comprometido en privado para amenazar con la ruptura del frente y la presentación de candidatos para todos los cargos (él mismo se disponía a encabezar la fórmula presidencial). Esta amenaza no pudo cumplirla; por decisión emanada de quien podía tomarla, había sido reemplazado como jefe local del peronismo por el ingeniero Iturbe, que se mostró mejor dispuesto a incorporar a su partido al frente. El doctor Matera, por su parte, inauguró una campaña algo incoherente pero no inefectiva que, comenzada en favor de la abstención revolucionaria, concluyó en su aceptación de la candidatura presidencial ofrecida por la democracia cristiana. Mientras tanto la organización sindical peronista (las llamadas 62 Organizaciones) se incorporaba desganadamente al frente; particularmente fría era la actitud de Framini, que pocas semanas antes había reiterado su llamado a la revolución social y conminado a los partidos de la burguesía nacional a apoyar la causa del proletariado so pena de perder una parte de su caudal electoral. Aún más fría era la recepción que el frente encontró en la UCRI; su jefe nacional, el doctor Alende, proclamado ya candidato presidencial del partido, se abstenía de retirar su postulación para dar paso a la de Vicente Solano Lima; no pudo hallarse en la Convención Nacional del partido una mayoría para realizar el cambio de candidato, pese a la gravitación del doctor Frondizi, que —contra su costumbre— esta vez tomó abiertamente posición.

La resistencia era muy comprensible: la UCRI había prosperado gracias a su papel de intermediaria entre el movimiento prohibido y los poderes militares y económicos; era sin duda suicida contribuir a que otros grupos políticos pudiesen

desde el poder armar un mecanismo rival orientado hacia las mismas funciones.

En estas condiciones el triunfo del frente en la arena electoral comenzaba a parecer problemático. Aumentaba las dificultades la implantación por el gobierno Guido de la representación proporcional para las elecciones nacionales y provinciales; los partidos frentistas no la habían objetado porque esperaban reunir de todos modos mayoría propia pero ahora era menos evidente que fuesen a lograrlo. Tenían frente a ellos a las candidaturas disidentes de Alende y Matera; a las opositoras del doctor Illia, postulado por el radicalismo del pueblo, y del general Aramburu, apoyado por un partido creado al efecto —la Unión del Pueblo Argentino— y el Partido Demócrata Progresista, que esperaba salvarse de este modo del peligro de extinción. Para hacer olvidar su poco atractivo candidato, el frente dedicó lo mejor de sus esfuerzos a persuadir del peligro extremo que significaba para el peronismo la candidatura del general Aramburu. Esta alegación no era sin duda del todo sincera; hacía ya unos años que el general se dedicaba a buscar la buena voluntad peronista y en algún momento llegó a parecer que su nombre proporcionaría un desemboque al electorado peronista; tampoco a él le faltó entonces el patrocinio de Frigerio.

Los organizadores de la campaña electoral de Aramburu no olvidaban por su parte que su supuesta moderación durante el gobierno y las vacilaciones que luego mostró su celo antiperonista eran juzgadas sin indulgencia por otros sectores más seguros de su potencial electorado; se dedicaron entonces a difundir una imagen acaso excesivamente marcial del candidato, que con ojos desorbitados parecía escrutar desde todos los muros los sentimientos secretos de los peatones, como el Big Brother en la fantasía de Orwell. Esa propaganda tuvo al parecer demasiado éxito; la acompañó la más hábil en que sus adversarios peronistas recordaban qué parte había tenido

el propuesto pacificador en los fusilamientos de 1956. Pese a esos esfuerzos el frente creyó sin embargo que su causa era de éxito problemático; fue en último término la decisión de los gremios peronistas la que lo forzó a retirarse del comicio, aconsejando el voto en blanco. El doctor Matera, candidato por algunas horas, se retiró a su vez; desde Berisso, en el corazón industrial de la provincia de Buenos Aires, el doctor Lima anunció la revolución social, de la que parecía un anticipo la decisión mayoritaria lograda en la CGT por el acuerdo de peronistas y comunistas para encarar una serie de huelgas generales progresivas en defensa de la burlada voluntad popular. El retiro del frente había tomado en efecto como pretexto un nuevo decreto limitativo; una vez producido ese retiro el ministro Villegas fue profuso en explicaciones que probaban hasta la saciedad que el nuevo instrumento jurídico no innovaba sobre los ya vigentes y aceptados.

De este modo se llegó a las elecciones del 7 de julio; con concurrencia importante aunque menor que en otras ocasiones. El radicalismo del pueblo obtenía dos millones y medio de votos; seguían la UCRI (sorprendida por la fecha electoral en plena crisis interna) y los votos en blanco con un millón y medio; a no mucha distancia de éstos se ubicaba el general Aramburu. El resultado causó unánime sorpresa y también (algo inesperadamente) unánime satisfacción; hasta ese momento el doctor Illia había sido el candidato que menos interés había logrado despertar. ¿A qué se debía su triunfo? Al parecer, lo mismo que el sorprendente éxito del doctor Alende, se vincula con las resistencias que despertaba (y no sólo en la opinión peronista) la candidatura de general Aramburu. En todo caso esa solución electoral creó —en un país que cree apasionadamente en el valor catártico de las consultas electorales— una esperanza nueva. Luego del período más duro de la experiencia posperonista, en lo más hondo de una depresión económica que golpeaba duramente a sus centros vitales, en

el desenlace de una crisis que parecía haber disuelto para siempre la estructura de los partidos, despojados de toda confianza colectiva, las cifras comiciales, cuyo carácter artificioso se prefiere olvidar, parecen devolver a la Argentina un rostro antiguo, que no se esperaba ya ver resurgir. En la alegría con que el país vive los resultados actuales (una alegría desprovista de ilusiones; a diferencia del fervor que acompañó al triunfo de Frondizi, tan esperanzado de novedades, el contentamiento actual se relaciona menos con esperanzas de cambios futuros que con la rectificación de una imagen acaso demasiado truculenta del presente) renace una vez más, en forma nueva, el mito del retorno a una Argentina de cuya desaparición parece imposible consolarse. Esa Argentina sin duda no ha de volver; ni aun el estilo parsimonioso y provinciano del doctor Illia podrá cumplir el milagro de ocultar al país que ha perdido su vieja forma y no sabe encontrar otra.

Es posible, es seguro, que el despertar ha de ser cruel. Sin embargo las ilusiones de hoy tienen por lo menos un elemento real: el hecho de que la Argentina sigue eligiendo como objeto de sus ilusiones la imagen rediviva de un pasado que juzga mejor que su presente. Quizá mañana un nuevo agravamiento del proceso que los sucesivos gobiernos han hecho —y acaso pueden hacer— muy poco por detener obligue finalmente a enfrentar una situación que cada anterior vuelta de tuerca parecía hacer definitivamente intolerable y que a la postre pudo siempre ser tolerada. Aun entonces, aun en la hora de ese enfrentamiento ineludible es de temer que la nostalgia de un pasado que con la complicidad de todos el recuerdo embellece cada día siga siendo el sentimiento dominante en un país que se resiste vigorosamente a entrar en la historia contemporánea.

Índice



España
Av. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona (España)
Tel. (34) 93 492 80 36
Fax (34) 93 496 70 58
Mail: info@planetaint.com
www.planeta.es

Argentina
Av. Independencia, 1668
C1100 ABQ Buenos Aires
(Argentina)
Tel. (5411) 4382 40 43/45
Fax (5411) 4383 37 93
Mail: info@eplaneta.com.ar
www.editorialplaneta.com.ar

Brasil
Rua Ministro Rocha Azevedo, 346 -
8º andar
Bairro Cerqueira César
01410-000 São Paulo, SP (Brasil)
Tel. (5511) 3088 25 88
Fax (5511) 3898 20 39
Mail: info@editoraplaneta.com.br

Chile
Av. 11 de Septiembre, 2353,
piso 16
Torre San Ramón, Providencia
Santiago (Chile)
Tel. Gerencia (562) 431 05 20
Fax (562) 431 05 14
Mail: info@planeta.cl
www.editorialplaneta.cl

Colombia
Calle 73, 7-60, pisos 7 al 11
Santafé de Bogotá, D.C.
(Colombia)
Tel. (571) 607 99 97
Fax (571) 607 99 76
Mail: info@planeta.com.co
www.editorialplaneta.com.co

Ecuador
Whymper, 27-166 y Av. Orellana
Quito (Ecuador)
Tel. (5932) 290 89 99
Fax (5932) 250 72 34
Mail: planeta@access.net.ec
www.editorialplaneta.com.ec

Estados Unidos y Centroamérica
2057 NW 87th Avenue
33172 Miami, Florida (USA)
Tel. (1305) 470 0016
Fax (1305) 470 62 67
Mail: infosales@planetapublishing.com
www.planeta.es

México
Av. Insurgentes Sur, 1898, piso 11
Torre Siglum, Colonia Florida, CP-01030
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F. (México)
Tel. (52) 55 53 22 36 10
Fax (52) 55 53 22 36 36
Mail: info@planeta.com.mx
www.editorialplaneta.com.mx
www.planeta.com.mx

Perú
Grupo Editor
Jirón Talara, 223
Jesús María, Lima (Perú)
Tel. (511) 424 56 57
Fax (511) 424 51 49
www.editorialplaneta.com.co

Portugal
Publicações Dom Quixote
Rua Ivone Silva, 6, 2.º
1050-124 Lisboa (Portugal)
Tel. (351) 21 120 90 00
Fax (351) 21 120 90 39
Mail: editorial@dquixote.pt
www.dquixote.pt

Uruguay
Cuareim, 1647
11100 Montevideo (Uruguay)
Tel. (5982) 901 40 26
Fax (5982) 902 25 50
Mail: info@planeta.com.uy
www.editorialplaneta.com.uy

Venezuela
Calle Madrid, entre New York y Trinidad
Quinta Toscanella
Las Mercedes, Caracas (Venezuela)
Tel. (58212) 991 33 38
Fax (58212) 991 37 92
Mail: info@planeta.com.ve
www.editorialplaneta.com.ve



Planeta es un sello editorial del Grupo Planeta www.planeta.es

OTROS TÍTULOS DEL MISMO AUTOR
EN ESTA EDITORIAL:

La larga agonía de la Argentina peronista

Proyecto y construcción de una nación

Vida y muerte de la República verdadera

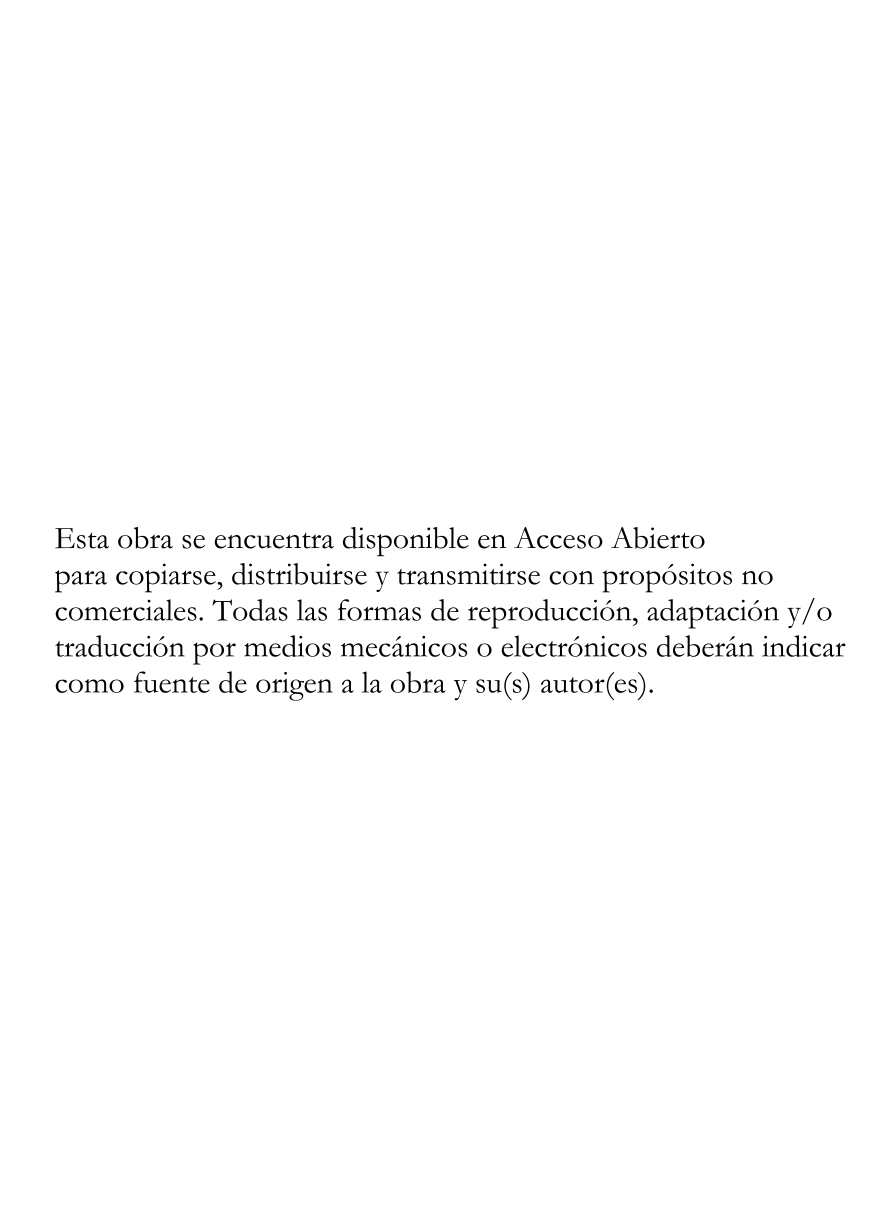
La República imposible

OTROS TÍTULOS DE HISTORIA EN ESTA EDITORIAL:

Mario Rapoport
Historia económica, política y social de la Argentina

Marcelo Cavarozzi
Autoritarismo y democracia

Carlos Nino
Un país al margen de la ley



Los escritos reunidos en esta edición corregida y aumentada de *Argentina en el callejón*, libro publicado originalmente en 1964, reflejan el esfuerzo de uno de nuestros más grandes historiadores por entender una de las etapas más problemáticas de la vida política del país: aquella que inaugura el golpe militar de 1930, atraviesa los dos gobiernos peronistas y se cierra con el ascenso y la caída del frondizismo. Crónica de revoluciones y restauraciones, de apostasías y retracciones, de demagogias y autorismos, este libro muestra el inexorable avance hacia el desenlace necesariamente catastrófico de esa larvada guerra civil en la que se había ya consumido un tercio de siglo de historia argentina. Buscando alcanzar una visión del pasado que exprese a la vez una preocupación de objetividad y la plena conciencia de lo que ese pasado tiene de significativo en el presente, Tulio Halperín Donghi nos propone en estas páginas un ejercicio de rememoración sostenido por la esperanza de que, al desentrañar algunas claves de nuestra historia, sea posible también vislumbrar el rumbo hacia el cual se encamina la Argentina.

Ariel



